



## **DOCUMENTACION**





**PROTOCOLO Nº 2 DE 6 DE MAYO DE 1963 DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1950.**

**INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 18 DE MARZO DE 1982  
(B.O.E. 10 MAYO 1982)**

**DON JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA**

Por cuanto el día 23 de febrero de 1979, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Protocolo número 2, de 6 de mayo de 1963, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.

Vistos y examinados los cinco artículos del mismo,

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y dos.—  
JUAN CARLOS R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

**PROTOCOLO NUMERO 2 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES POR EL QUE SE CONFIERE AL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS LA COMPETENCIA PARA EMITIR DICTAMENES CONSULTIVOS.**

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo,

Vistas las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante "el Convenio"), y en particular el artículo 19, por el que se instituye, entre otros órganos, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (denominado en adelante "el Tribunal").

Considerando que es conveniente conferir al Tribunal la competencia de emitir, en determinadas condiciones, dictámenes consultivos,

Convienen en lo siguiente:



## DOCUMENTACION

### ARTICULO I

1. Cuando lo solicitare el Comité de Ministros, el Tribunal podrá emitir dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas referentes a la interpretación del Convenio y sus Protocolos.

2. Estos dictámenes no podrán versar sobre cuestiones relacionadas con el contenido o alcance de los derechos y libertades definidos en el título I del Convenio y en sus Protocolos, ni sobre las demás cuestiones que la Comisión, el Tribunal o el Comité de Ministros hubieren de conocer por haberse interpuesto un recurso de conformidad con lo previsto en el Convenio.

3. La decisión del Comité de Ministros de solicitar un dictamen del Tribunal se adoptará por mayoría de dos tercios de los representantes con derecho a participar en las reuniones del Comité.

### ARTICULO 2

El Tribunal decidirá si la solicitud de un dictamen presentado por el Comité de Ministros está dentro de su competencia consultiva, en la forma en que ésta queda definida en el artículo 1 del presente Protocolo.

### ARTICULO 3

1. Para examinar las solicitudes de dictámenes consultivos, el Tribunal se reunirá en sesión plenaria.

2. El dictamen del Tribunal será fundamentado.

3. Si el dictamen no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cada uno de ellos tendrá derecho de hacerlo acompañar con la exposición de su opinión individual.

4. El dictamen del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros.

### ARTICULO 4

Por extensión de las facultades que le confiere el artículo 55 del Convenio, y a los efectos del presente Protocolo, el Tribunal podrá, si lo estima necesario, establecer su Reglamento y fijar su procedimiento.

### ARTICULO 5

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Miembro del Consejo de Europa signatarios del Convenio, quienes podrán llegar a ser Partes en el mismo mediante:

a) La firma sin reserva de ratificación o de aceptación.

b) La firma con reserva de ratificación o de aceptación, seguida de ratificación o de aceptación.

Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados ante el Secretario general del Consejo de Europa.

2. El presente Protocolo entrará en vigor cuando todos los Estados Parte del



## DOCUMENTACION

Convenio hayan pasado a ser Partes del Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo se considerará que sus artículos 1 a 4 forman parte integrante del Convenio.

4. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados Miembros del Consejo:

- a) Toda firma sin reserva de ratificación o aceptación.
- b) Toda firma con reserva de ratificación o aceptación.
- c) El depósito de todo Instrumento de ratificación o de aceptación.
- d) La fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo el 6 de mayo de 1963, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general transmitirá copias certificadas a cada uno de los Estados signatarios.

PROTOCOLO NUMERO 2, DE 6 DE MAYO DE 1963, DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.

### Estados Parte

Alemania, República Federal de, 3 de enero de 1969. Ratificación.

Austria, 29 de mayo de 1967. Ratificación.

Bélgica, 21 de noviembre de 1970. Ratificación.

Chipre, 22 de enero de 1969. Ratificación.

Dinamarca, 6 de mayo de 1963. Ratificación.

España, 6 de abril de 1982. Ratificación.

Francia, 2 de octubre de 1981. Ratificación.

Grecia, 8 de enero de 1975. Ratificación.

Irlanda, 12 de noviembre de 1963. Ratificación.

Islandia, 16 de noviembre de 1967. Ratificación.

Italia, 3 de abril de 1967. Ratificación.

Luxemburgo, 27 de octubre de 1965. Ratificación.

Malta, 23 de enero de 1967. Ratificación.

Noruega, 12 de junio de 1964. Ratificación.

Países Bajos, 11 de octubre de 1966. Ratificación.

Portugal, 9 de noviembre de 1978. Ratificación.

Reino Unido, 6 de mayo de 1963. Ratificación.

Suecia, 13 de junio de 1964. Ratificación.

Suiza, 28 de noviembre de 1974. Ratificación.

Turquía, 25 de marzo de 1968. Ratificación.



## DOCUMENTACION

El presente Protocolo entró en vigor con carácter general el 21 de septiembre de 1970 y para España el 6 de abril de 1982, fecha del depósito del Instrumento de ratificación.

Madrid, 23 de abril de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. José Antonio de Yturriaga Barberán.

### **RENOVACION DE LA DECLARACION FORMULADA POR ESPAÑA RELATIVA AL ART. 46 DEL CONVENIO EUROPEO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1950 PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (B.O.E. 23 octubre 1982).**

Tengo el honor de declarar, de conformidad con las disposiciones del artículo 46 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, que España reconoce, por un nuevo período de tres años a partir del 15 de octubre de 1982, como obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para conocer de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación de dicho Convenio que se susciten con posterioridad al 14 de octubre de 1982.

Madrid, 24 de septiembre de 1982.

El Ministro de Asuntos Exteriores

José Pedro Pérez-Llorca

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 15 de octubre de 1982.— El Secretario general Técnico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

### **CONVENCION SOBRE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL, HECHA EN PARIS EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1972.**

INSTRUMENTO DE ACEPTACION DE 18 DE MARZO DE 1982  
(B.O.E. 1 julio 1982)

DON JUAN CARLOS I  
REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, extendiendo el presente Instrumento de Aceptación de



España de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural hecha en París el 23 de noviembre de 1972, para que, mediante su depósito, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 31, España pase a ser Parte de dicha Convención.

En fe de lo cual firmo el presente instrumento, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1962.—Juan Carlos R.—El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

#### CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17ª reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más terribles.

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo;

Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido;

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto.

Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan;

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera;

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente;



## DOCUMENTACION

Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos;

Habiendo decidido, en su decimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una Convención internacional

Aprueba en este día 16 de noviembre de 1972 la presente Convención:

### *I. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL*

#### ARTICULO 1

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":

- Los monumentos: Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal, excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia,

- Los conjuntos: Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

- Los lugares: Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

#### ARTICULO 2

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio natural":

- Los monumentos naturales constituídos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el habitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

- Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

#### ARTICULO 3

Incumbirá a cada Estado Parte en la presente convención identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.





**II. PROTECCION NACIONAL Y PROTECCION INTERNACIONAL  
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**

**ARTICULO 4**

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

**ARTICULO 5**

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:

a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general.

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban.

c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural.

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio, y

e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.

**ARTICULO 6**

1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.

2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el ar-



## DOCUMENTACION

título 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.

3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención.

### ARTICULO 7

Para los fines de la presente Convención se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.

### III. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

#### ARTICULO 8

1. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional denominado "el Comité del Patrimonio Mundial". Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por los Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente Convención en 40 o más Estados.

2. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de las diferentes regiones y culturas del mundo.

3. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma), un representante del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS) y un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), a los que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes reunidos en Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales que tengan objetivos similares.

#### ARTICULO 9

1. Los Estados Miembros del Comité del Patrimonio Mundial ejercerán su mandato desde que termine la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguien-

2. Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera elección expirará al fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido elegidos, y el mandato de un segundo tercio de los miembros designados al mismo tiempo, expirará al fin de la segunda reunión ordinaria de la conferencia general siguiente a aquella en que hayan sido elegidos. Los nombres de esos miembros serán sorteados por el Presidente de la Conferencia General después de la primera elección.

3. Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas calificadas en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural.

#### ARTICULO 10

1. El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento.

2. El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos o privados, así como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones determinadas.

3. El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para ejecutar su labor.

#### ARTICULO 11

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del Patrimonio Mundial en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo. Este inventario, que no se considera exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.

2. A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité establecerá, llevará al día y publicará, con el título de "Lista del patrimonio mundial", una lista de los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de la presente Convención, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo los criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al menos cada dos años.

3. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la lista del patrimonio mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio que sea objeto de reivindicación de soberanía o de jurisdicción por parte de varios Estados no prejuzgará nada sobre los derechos de las partes en litigio.

4. El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo exijan, con el nombre de "Lista del patrimonio mundial en peligro" una lista de los bienes que figuren en la Lista del patrimonio mundial, cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud de la presente Convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las operaciones. Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del patri-



monio cultural y natural que están amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El Comité podrá siempre, en caso de urgencia, efectuar una nueva inscripción en la Lista del patrimonio mundial en peligro y darle una difusión inmediata.

5. El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien del patrimonio cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo.

6. El Comité definirá los criterios que servirán de base para las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte en cuyo territorio esté situado el bien del patrimonio cultural o natural de que se trate.

7. El Comité, con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los estudios y las investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren los párrafos 2 y 4 del presente artículo.

#### ARTICULO 12

El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una u otra de las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo alguno que no tenga un valor universal excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción en estas listas.

#### ARTICULO 13

1. El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia internacional formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en lo que respecta a los bienes del patrimonio cultural y natural situados en sus territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11. Esas peticiones podrán tener por objeto la protección, la conservación, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes.

2. Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, podrán tener también por objeto la identificación de los bienes del patrimonio cultural o natural definidos en los artículos 1 y 2, cuando las investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser perseguidas.

3. El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y la importancia de su ayuda y autorizará la celebración en su nombre de los acuerdos necesarios con el Gobierno interesado.

4. El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en cuenta la importancia respectiva de los bienes que se hayan de pro-



## DOCUMENTACION

teger para el patrimonio mundial cultural y natural, la necesidad de asegurar una protección internacional a los bienes más representativos de la naturaleza o del genio y la historia de los pueblos del mundo, la urgencia de los trabajos que se hayan de emprender, la importancia de los recursos de los Estados en cuyo territorio se encuentren los bienes amenazados y en particular la medida en que podrán asegurar la salvaguardia de esos bienes por sus propios medios.

5. El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los que se haya prestado ayuda internacional.

6. El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de aumentar los recursos y tomará para ello las disposiciones necesarias.

7. El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de la presente Convención. Para elaborar sus programas y ejecutar sus proyectos, el Comité podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular, al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma), al Consejo Internacional de Monumentos y de Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS) o a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), como también a organismos públicos y privados y a particulares.

8. El Comité tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Constituirá quórum la mayoría de los miembros del Comité.

### ARTICULO 14

1. El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una Secretaría nombrada por el Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura.

2. El Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro Internacional de Estudios para la conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma), del Consejo Internacional de Monumentos y de Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS) y los de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), dentro de sus competencias y de sus atribuciones respectivas, preparará la documentación del Comité y el orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones.

## IV. FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

### ARTICULO 15

1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural



## DOCUMENTACION

Mundial de Valor Universal Excepcional, denominado "el Fondo del Patrimonio Mundial".

2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:

a) Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los Estados Partes en la presente Convención.

b) Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer: i) Otros Estados. ii) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras organizaciones intergubernamentales. iii) Organismos públicos o privados o personas privadas.

c) Todo interés producido por los recursos del Fondo.

d) El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones organizadas en provecho del Fondo.

e) Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio Mundial.

4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al Comité sólo se podrán dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas a un determinado programa o a un proyecto específico, a condición de que él haya decidido poner en práctica ese programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al Fondo no han de estar supeditadas a condiciones políticas.

## ARTICULO 16

1. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos años, en el Fondo del Patrimonio Mundial, contribuciones cuya cuantía en forma de un porcentaje único aplicable a todos los Estados decidirá la Asamblea General de los Estados Partes en la Convención, reunida durante la celebración de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa decisión de la Asamblea General requerirá la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución obligatoria de los Estados Partes en la Convención no podrá exceder en ningún caso del 1 por 100 de la contribución al presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 32 de la presente Convención podrá en el momento de depositar su instrumento de ratificación de aceptación o de adhesión, declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.



## DOCUMENTACION

3. Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, notificando al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración no producirá efecto alguno respecto de la contribución obligatoria que adeude dicho Estado hasta la fecha de la siguiente Asamblea General de los Estados Partes en la Convención.

4. Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera eficaz, las contribuciones de los Estados Partes en la presente Convención que hayan hecho la declaración de que trata el párrafo 2 del presente artículo habrán de ser entregadas de una manera regular, cada dos años por lo menos, y no deberían ser inferiores a las contribuciones que hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

5. Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su contribución obligatoria o voluntaria en lo que respecta al año en curso y al año civil inmediatamente anterior, no podrá ser elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial, si bien esta disposición no será aplicable en la primera elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité no será aplicable en la primera elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité, su mandato se extinguirá en el momento en que se efectúen las elecciones previstas por el párrafo 1 del artículo 8 de la presente Convención.

### ARTICULO 17

Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación de fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto estimular las liberalidades en favor de la protección cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.

### ARTICULO 18

Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas internacionales de colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del Patrimonio Mundial bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Facilitarán las colectas hechas con este propósito por los organismos mencionados en el párrafo 3 del artículo 15.

## V. CONDICIONES Y MODALIDADES DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

### ARTICULO 19

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en favor de los bienes del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional situados en su territorio. Unirá a su petición los elementos de infor-





## DOCUMENTACION

mación y los documentos previstos en el artículo 21 de que disponga que el Comité necesite para tomar su decisión.

### ARTICULO 20

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado c) del artículo 23, la asistencia internacional prevista por la presente Convención sólo se podrá conceder a los bienes del patrimonio cultural y natural que el Comité del Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer figurar en una o en las dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11.

### ARTICULO 21

1. El Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las peticiones de asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los elementos que habrá de contener la petición que describirá la operación que se proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su costo, su urgencia y las razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer frente a la totalidad de los gestos. Siempre que sea posible, las peticiones se apoyarán en un dictamen de expertos.

2. Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender, sin demora, el Comité examinará con preferencia las peticiones que se presenten justificadas por calamidades naturales o por catástrofes. El Comité dispondrá para esos casos de un fondo de reserva.

3. Antes de tomar una decisión, el Comité efectuará los estudios o las consultas que estime necesarios.

### ARTICULO 22

La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes:

a) Estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la protección, la conservación, la revalorización y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural definido en los párrafos 2 y 4 del artículo 11 de la presente Convención.

b) Servicios de expertos, de técnicos y de mano de obra calificada para velar por la buena ejecución del proyecto aprobado.

c) Formación de especialistas de todos los niveles en materia de identificación, protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y natural.

d) Suministro de equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir.

e) Préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo.

f) Concesión en casos excepcionales y especialmente motivados de subvenciones no reintegrables.





## DOCUMENTACION

### ARTICULO 23

El Comité del Patrimonio Mundial podrá también prestar asistencia internacional a centros nacionales o regionales de formación de especialistas de todos grados en materia de identificación, protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y natural.

### ARTICULO 24

Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá conceder después de un estudio científico, económico y técnico detallado. Este estudio habrá de hacer uso de las técnicas más avanzadas de protección, de conservación, de revalorización y de rehabilitación del patrimonio cultural y natural y habrá de corresponder a los objetivos de la presente Convención. Habrá de buscar también la manera de emplear racionalmente los recursos disponibles en el Estado interesado.

### ARTICULO 25

El financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá, en principio, a la comunidad internacional más que parcialmente. La participación del Estado que reciba la asistencia internacional habrá de constituir una parte cuantiosa de su aportación a cada programa o proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo permitan.

### ARTICULO 26

El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que concierten las condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto para el que se facilite asistencia internacional con arreglo a las disposiciones de esta Convención. Incumbirá al Estado que reciba tal asistencia internacional seguir protegiendo, conservando y revalorizando los bienes así preservados, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo.

## VI. PROGRAMAS EDUCATIVOS

### ARTICULO 27

1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.

2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 28

Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia internacional tomarán las medidas necesarias para hacer que ese conozca la importancia de los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado.

### ARTICULO 29

1. Los Estados Partes en la presente Convención indicarán en los informes que presenten a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, y las demás medidas que hayan tomado para aplicar la presente Convención, así como la experiencia que hayan adquirido en este campo.

2. Estos informes se comunicarán al Comité del Patrimonio Mundial.

3. El Comité presentará un informe sobre sus trabajos en cada una de las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

## VIII. CLAUSULAS FINALES

### ARTICULO 30

La presente Convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo los cinco textos igualmente auténticos.

### ARTICULO 31

1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

### ARTICULO 32

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, invitados a adherirse a ella por la Conferencia General de la Organización.

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 33

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del vigésimo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto de los Estados que hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de aceptación o de adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los demás Estados, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

### ARTICULO 34

A los Estados Partes en la presente Convención que tengan un sistema constitucional federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:

a) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación entraña una acción legislativa del poder legislativo federal o central, las obligaciones del Gobierno federal o central serán las mismas que las de los Estados Partes que no sean Estados federales.

b) En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que, en virtud del sistema constitucional de la federación, no estén facultados para tomar medidas legislativas, el Gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, países, provincias o cantones.

### ARTICULO 35

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de denunciarla.

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia.

No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.

### ARTICULO 36

El Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión mencionados en los artículos 31 y 32, y de las denuncias previstas en el artículo 35.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 37

1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente Convención. Pero esta revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a ser Partes en la Convención revisada.

2. En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención, que constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva Convención revisada.

### ARTICULO 38

En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Hecho en París, en este día 23 de noviembre de 1972, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en la 17ª reunión, y del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se depositarán en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuyas copias autenticadas se entregarán a todos los Estados a que se refieren los artículos 31 y 32, así como a las Naciones Unidas.

### ESTADOS PARTE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Alemania, R.F. de <sup>1</sup> . . . . . | 20 de marzo de 1979 (r).      |
| Arabia Saudita . . . . .                 | 23 de agosto de 1976 (r).     |
| Afganistán . . . . .                     | 7 de agosto de 1978 (ac).     |
| Argelia . . . . .                        | 24 de junio de 1974 (r).      |
| Argentina . . . . .                      | 23 de agosto de 1978 (ac).    |
| Australia . . . . .                      | 22 de agosto de 1974 (r).     |
| Bolivia . . . . .                        | 4 de octubre de 1976 (r).     |
| Brasil . . . . .                         | 1 de septiembre de 1977 (ac). |
| Bulgaria . . . . .                       | 7 de marzo de 1974 (ac).      |
| Canadá . . . . .                         | 23 de julio de 1978 (ac).     |
| Costa de Marfil . . . . .                | 9 de enero de 1981 (r).       |
| Costa Rica . . . . .                     | 23 de agosto de 1977 (r).     |

(r): ratificación; (ac): aceptación.

1. R.F. de Alemania; "Se aplicarán también a Berlín (Occidental) con efecto a partir de la fecha en que entre en vigor para la República Federal de Alemania". - Declaración de conformidad con el párrafo del artículo 16 de la Convención, que este país no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.



## DOCUMENTACION

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Cuba . . . . .                        | 24 de marzo de 1981 (r).      |
| Chile . . . . .                       | 20 de febrero de 1980 (r).    |
| Chipre . . . . .                      | 14 de agosto de 1975 (ac).    |
| Dinamarca . . . . .                   | 25 de julio de 1979 (r).      |
| Ecuador . . . . .                     | 16 de junio de 1975 (ac).     |
| España . . . . .                      | 4 de mayo de 1982 (ac).       |
| Estados Unidos . . . . .              | 7 de diciembre de 1973 (r).   |
| Etiopía . . . . .                     | 6 de julio de 1977 (r).       |
| Francia . . . . .                     | 27 de junio de 1975 (ac).     |
| Ghana . . . . .                       | 4 de julio de 1975 (r).       |
| Grecia . . . . .                      | 17 de julio de 1981 (r).      |
| Guatemala . . . . .                   | 16 de enero de 1979 (ac).     |
| Guinea . . . . .                      | 18 de marzo de 1979 (ac).     |
| Guyana . . . . .                      | 20 de junio de 1977 (ac).     |
| Haiti . . . . .                       | 18 de enero de 1980 (r).      |
| Honduras . . . . .                    | 8 de junio de 1979.           |
| India . . . . .                       | 14 de noviembre de 1977 (r).  |
| Irak . . . . .                        | 5 de marzo de 1974 (ac).      |
| Irán . . . . .                        | 26 de febrero de 1975 (ac).   |
| Italia . . . . .                      | 23 de junio de 1978 (r).      |
| Jamahiriya Arabe Libia . . . . .      | 13 de octubre de 1978 (r).    |
| Jordania . . . . .                    | 5 de mayo de 1975 (r).        |
| Malawi . . . . .                      | 5 de enero de 1982 (r).       |
| Mali . . . . .                        | 5 de abril de 1977 (ac).      |
| Malta . . . . .                       | 14 de noviembre de 1978 (ac). |
| Marruecos . . . . .                   | 28 de octubre de 1975 (r).    |
| Mauritania . . . . .                  | 2 de marzo de 1981 (r).       |
| Mónaco . . . . .                      | 7 de noviembre de 1978 (r).   |
| Nepal . . . . .                       | 20 de junio de 1978 (ac).     |
| Nicaragua . . . . .                   | 17 de diciembre de 1979 (ac). |
| Níger . . . . .                       | 23 de diciembre de 1974 (ac). |
| Nigeria . . . . .                     | 23 de octubre de 1974 (r).    |
| Noruega . . . . .                     | 12 de mayo de 1977 (r).       |
| Panamá . . . . .                      | 3 de marzo de 1978 (r).       |
| Paquistán . . . . .                   | 23 de julio de 1976 (r).      |
| Perú . . . . .                        | 24 de febrero de 1982.        |
| Polonia . . . . .                     | 29 de junio de 1976 (r).      |
| Portugal . . . . .                    | 30 de septiembre de 1980 (r). |
| República Arabe de Egipto . . . . .   | 7 de febrero de 1974 (r).     |
| República Arabe de Siria . . . . .    | 13 de agosto de 1975 (ac).    |
| República Centrafricana . . . . .     | 22 de diciembre de 1980 (ac). |
| República Unida de Tanzania . . . . . | 2 de agosto de 1977 (r).      |
| Senegal . . . . .                     | 13 de febrero de 1976 (r).    |
| Seychelles . . . . .                  | 9 de abril de 1980 (r).       |



## DOCUMENTACION

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Sri Lanka.....         | 6 de junio de 1980 (ac).      |
| Sudán.....             | 6 de junio de 1974 (r).       |
| Suiza.....             | 17 de septiembre de 1975 (r). |
| Túnez.....             | 10 de marzo de 1975 (r).      |
| Yemen Democrático..... | 7 de octubre de 1980 (ac).    |
| Yugoslavia.....        | 26 de mayo de 1975 (r).       |
| Zaire.....             | 23 de septiembre de 1974 (r). |

La presente Convención entró en vigor el 17 de diciembre de 1975, y para España entrará en vigor el 4 de agosto de 1982, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la misma.

Madrid, 16 de junio de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

### ACUERDO DE PESCA DE 15 DE ABRIL DE 1980 ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (B.O.E. 25 de marzo de 1982).

El Gobierno de España y la Comunidad Económica Europea (denominada a continuación "la Comunidad").

Recordando las estrechas relaciones que existen entre la Comunidad y España;

Considerando el deseo común de asegurar la conservación y administración racional de las reservas de peces existentes en las aguas adyacentes a sus costas;

Considerando la labor realizada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

Afirmando que la extensión, por parte de los Estados ribereños, de las zonas de recursos biológicos dependientes de su jurisdicción y el ejercicio en las mismas de sus derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de estos recursos deben hacerse de acuerdo con los principios del Derecho internacional;

Considerando el hecho de que la Comunidad ha convenido que los límites de las zonas de pesca de sus Estados miembros (denominadas en adelante "zonas de pesca de la Comunidad") se extienden hasta 200 millas marinas a lo largo de las costas que bordean el Atlántico Norte, el mar del Norte, el Skagerrak, el Kattegat y el mar Báltico, quedando bien entendido que el ejercicio de la pesca dentro de estos límites esté sometido a la política común de la Comunidad en materia pesquera, sin perjuicio de una acción de la misma naturaleza para las demás zonas pesqueras, y para el Mediterráneo en particular;

Teniendo en cuenta el hecho de que España ha fijado, con efecto a partir del 15 de marzo de 1978, una zona económica que se extiende hasta 200 millas marinas de la costa atlántica en la que España ejerce sus derechos soberanos con fi-

nes de exploración, explotación, conservación y administración de recursos, sin perjuicio de una acción de la misma naturaleza para el Mediterráneo.

Deseosos de establecer los principios y las normas que regirán sus relaciones mutuas en el sector pesquero,

Han convenido lo siguiente:

#### ARTICULO 1

1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los principios y las normas que regirán el conjunto de condiciones para el ejercicio de la pesca por parte de los buques de cada una de las partes en las zonas pesqueras dependientes de la jurisdicción de la otra parte.

2. Sin embargo, el presente Acuerdo no afecta al ejercicio de la pesca recíproca de los pescadores en el Bidasoa y en la habia de Higuier, tal como queda definido por el Acuerdo de 14 de julio de 1959 entre España y Francia.

#### ARTICULO 2

Cada una de las partes acuerda a los buques de pesca de la otra parte el acceso a la zona de pesca dependiente de su jurisdicción en las condiciones previstas por los artículos siguientes.

#### ARTICULO 3

1. Cada parte determina cada año, para la zona de pesca dependiente de su jurisdicción, sin perjuicio de ajustes que podrían ser necesarios a causa de circunstancias imprevisibles y habida cuenta de la necesidad de garantizar una administración racional de los recursos biológicos:

a) El volumen total de capturas autorizadas para reservas determinadas o grupos de las mismas en base a datos científicos lo más fiables posible, a la interdependencia de las reservas, a la labor de las organizaciones internacionales apropiadas y a todos los demás factores pertinentes.

b) Tras las consultas mutuas apropiadas, el volumen de capturas asignado a los buques de pesca de la otra parte y las zonas en que estas capturas pueden llevarse a cabo. Las dos partes se fijan como objetivo lograr un equilibrio satisfactorio de las posibilidades de pesca de cada una, en la zona de pesca dependiente de la jurisdicción de la otra parte.

Al determinar estas posibilidades, cada parte tiene en cuenta: i) El interés de preservar las características tradicionales de las actividades pesqueras en las zonas costeras fronterizas. ii) La necesidad de reducir al mínimo las dificultades que pudiera encontrar la parte cuyas posibilidades de pesca se vieran disminuidas a causa de la realización del equilibrio anteriormente mencionado. iii) Todos los demás factores pertinentes.

2. Cada parte podrá adoptar cualquiera otra medida con vistas a garantizar la conservación y administración racional de los recursos en la zona pesquera dependiente de su jurisdicción. Las medidas así adoptadas, tras la fijación anual de

las posibilidades de pesca de la otra parte, no deberán poder comprometer el ejercicio efectivo de la pesca.

Cada parte puede decidir que el ejercicio de actividades de pesca en la zona pesquera dependiente de su jurisdicción por buques de pesca de la otra parte se subordinará a la concesión de licencias.

Las autoridades competentes de cada parte notificarán a la otra parte el nombre, el número de matrícula y las demás características pertinentes de los buques para los cuales se solicita la autorización de pescar en la zona pesquera de la otra parte. Dicha disposición también se aplica a todo buque destinado a ayudar o asistir a un buque de pesca con vistas a la realización de misiones relacionadas directamente con la actividad pesquera de este buque. La segunda parte expedirá licencias que correspondan a las posibilidades de pesca acordadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 3, parágrafo 1, sub. b).

#### ARTICULO 5

Los buques pesqueros de una de las dos partes que ejercen su actividad en la zona pesquera dependiente de la jurisdicción de la otra parte respetan las medidas de conservación y control, así como las demás disposiciones que rigen las actividades de pesca en esta zona. Toda nueva medida, condición o disposición debe ser debidamente notificada con anticipación.

#### ARTICULO 6

Cada parte toma todas las medidas necesarias para asegurar el respeto de las disposiciones del presente Acuerdo y de las demás medidas conexas por parte de sus buques pesqueros.

#### ARTICULO 7

Dentro de la zona pesquera dependiente de su jurisdicción cada parte puede adoptar de acuerdo con las normas del Derecho internacional aquellas medidas que puedan ser necesarias para garantizar el respeto de las disposiciones del presente Acuerdo por los buques de la otra parte.

#### ARTICULO 8

Las partes se comprometen a cooperar con vistas a asegurar la administración adecuada y la conservación de los recursos biológicos del mar, así como a facilitar sus investigaciones de carácter científico necesarias, en particular con referencia a:

a) Las reservas de peces existentes en las zonas de pesca dependientes de la jurisdicción de las dos partes, a fin de lograr, en la medida de lo posible, la armonización de las medidas para reglamentar la pesca en lo que a estas reservas se refiere.

b) Las reservas de peces de interés común existentes en las zonas de pesca de la jurisdicción de ambas partes, así como en las zonas situadas más allá de es-





tas zonas y en zonas adyacentes a las mismas.

ARTICULO 9

Las partes convienen consultarse acerca de las cuestiones sobre la aplicación y el buen funcionamiento del presente Acuerdo o, en caso de litigio, sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.

ARTICULO 10

Ninguna disposición del presente Acuerdo afecta o prejuzga las posiciones de las dos partes en lo referente a las cuestiones relativas al Derecho del mar.

ARTICULO 11

El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en que se aplica el Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea y en las condiciones previstas por dicho Tratado, y, por otra, al territorio de España.

ARTICULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes contratan-tes se notifiquen el cumplimiento de los procedimientos necesarios a tal efecto. En espera de su entrada en vigor se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma.

El presente Acuerdo se concluye para un primer período de cinco años a partir de su entrada en vigor. Si una de las partes no pone fin al mismo por medio de una notificación dada por lo menos seis meses antes de la fecha de expira-ción de este período, quedará en vigor para períodos de cinco años, con la condi-ción de que una notificación de denuncia no haya sido dada por lo menos seis meses antes de la expiración de cada período.

ARTICULO 13

Las partes acuerdan proceder al examen del presente Acuerdo con ocasión de la conclusión de la negociación de un Tratado multilateral, realizada en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Hecho en Bruselas a 15 de abril de 1980, en dos ejemplares en lengua espa-ñola, alemana, danesa, francesa, inglesa, italiana y neerlandesa, dando fe cada uno de estos textos.

Por España, S.E. M. Raimundo Bassols y Jacas, Jefe de la Misión de España ante las Comunidades Europeas.

Por las Comunidades Europeas, M. Pietro Calamia, Presidente en ejercicio del Comité de Representantes Permanentes; M. Raymond Simonnet, Director de la Comisión encargada de los aspectos internacionales de la pesca.

El presente Acuerdo entró en vigor el 22 de mayo de 1981, fecha de la Nota



## DOCUMENTACION

de respuesta de la CEE a la Nota española de 13 de marzo de 1981, de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo.

Madrid, 8 de marzo de 1982.— El Secretario general técnico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

### **TRATADO ANTARTICO, HECHO EN WASHINGTON DE 1 DE DICIEMBRE DE 1959.**

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 18 DE MARZO DE 1982

(B.O.E. 26 junio 1982)

**DON JUAN CARLOS I  
REY DE ESPAÑA**

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, extendiendo el presente Instrumento de adhesión de España al Tratado Antártico, hecho en Washington el 1 de diciembre de 1959, para que, mediante su depósito y de conformidad con lo dispuesto en su artículo XIII, España pase a ser Parte de dicho Tratado.

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1982.— Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

### **TRATADO ANTARTICO**

Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional;

Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida;

Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Interna-



cional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad;

Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

Han acordado lo siguiente:

#### ARTICULO I

1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas.

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico.

#### ARTICULO II

La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán sujetas a las disposiciones del presente Tratado.

#### ARTICULO III

1. Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida, prevista en el artículo II del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible:

a) Al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones.

b) Al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antártida.

c) Al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente.

2. Al aplicarse este artículo se dará el mayor estímulo al establecimiento de relaciones cooperativas de trabajo con aquellos Organismos especializados de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que tengan interés científico o técnico en la Antártida.

#### ARTICULO IV

1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

a) Como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida que hubiere hecho valer precedentemente.

b) Como una renuncia a menoscabo por cualquiera de las Partes Contratan-



tes a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo.

c) Como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro Estado en la Antártida.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.

#### ARTICULO V

1. Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan prohibidas.

2. En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos, en los que sean partes todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo IX, las normas establecidas en tales acuerdos se aplicarán en la Antártida.

#### ARTICULO VI

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al Sur de los 60° de latitud Sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

#### ARTICULO VII

1. Con el fin de promover los objetivos y asegurar la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, cada una de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones a que se refiere el artículo IX de este Tratado, tendrá derecho a designar observadores para llevar a cabo las inspecciones previstas en el presente artículo. Los observadores serán nacionales de la Parte Contratante que los designa. Sus nombres se comunicarán a cada una de las demás Partes Contratantes que tienen derecho a designar observadores y se les dará igual aviso cuando cesen en sus funciones.

2. Todos los observadores designados de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de este artículo gozarán de entera libertad de acceso, en cualquier momento, a cada una y a todas las regiones de la Antártida.

3. Todas las regiones de la Antártida y todas las estaciones, instalaciones y

equipos que allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves en los puntos de embarque y desembarque de personal o de carga de la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la inspección por parte de cualquier observador designado de conformidad con el párrafo 1 de este artículo.

4. La observación aérea podrá efectuarse, en cualquier momento, sobre cada una y todas las regiones de la Antártida por cualquiera de las Partes Contratantes que estén facultadas a designar observadores.

5. Cada una de las Partes Contratantes, al entrar en vigencia respecto de ella el presente Tratado, informará a las otras Partes Contratantes y, en lo sucesivo, les informará por adelantado sobre:

a) Toda expedición a la Antártida y dentro de la Antártida en la que participen sus navíos o nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártida que se organicen o partan de su territorio.

b) Todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales.

c) Todo personal o equipo militares que se proyecte introducir en la Antártida, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del artículo I del presente Tratado.

#### ARTICULO VIII

1. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que les otorga el presente Tratado, y sin perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratantes en lo que concierne a la jurisdicción sobre todas las demás personas en la Antártida, los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo con el subpárrafo 1, b), del artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acompañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tengan lugar mientras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funciones.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, y en espera de la adopción de medidas expresadas en el subpárrafo 1, e), del artículo IX, las Partes Contratantes implicadas en cualquier controversia con respecto al ejercicio de la jurisdicción en la Antártida se consultarán inmediatamente con el ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable.

#### ARTICULO IX

1. Los representantes de las Partes Contratantes, nombradas en el preámbulo del presente Tratado, se reunirán en la ciudad de Canberra dentro de los dos meses después de la entrada en vigencia del presente Tratado y, en adelante, a intervalos y en lugares apropiados, con el fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados con la Antártida y formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del presente Tratado, inclusive medidas relacionadas con:

a) Uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos.

- b) Facilidades para la investigación científica en la Antártida.
- c) Facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida.
- d) Facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el artículo VII del presente Tratado.
- e) Cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida.
- f) Protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida.

2. Cada una de las Partes Contratantes que hayan llegado a ser Parte del presente Tratado por adhesión, conforme al artículo XIII, tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en las reuniones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, mientras dicha Parte Contratante demuestre su interés en la Antártida mediante la realización en ella de investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de una estación científica o el envío de una expedición científica.

3. Los informes de los observadores mencionados en el artículo VII del presente Tratado serán transmitidos a los representantes de las Partes Contratantes que participen en las reuniones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las medidas contempladas en el párrafo 1 de este artículo entrarán en vigencia cuando las aprueben todas las Partes Contratantes, cuyos representantes estuvieron facultados a participar en las reuniones que se celebraron para considerar esas medidas.

5. Cualquiera o todos los derechos establecidos en el presente Tratado podrán ser ejercidos desde la fecha de su entrada en vigencia, ya sea que las medidas para facilitar el ejercicio de tales derechos hayan sido o no propuestas, consideradas o aprobadas conforme a las disposiciones de este artículo.

#### ARTICULO X

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado.

#### ARTICULO XI

1. En el caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratantes, concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, dichas Partes Contratantes se consultarán entre sí con el propósito de resolver la controversia por negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos, a su elección.

2. Toda controversia de esa naturaleza no resuelta, por tales medios, será referida a la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada caso, de todas las partes en controversia, para su resolución; pero la falta de acuerdo para referirla a la Corte Internacional de Justicia no dispensará a las partes en controversia de la responsabilidad de seguir buscando una solución por cualquiera de los diversos medios pacíficos contemplados en el párrafo 1 de este artículo.



culo.

## ARTICULO XII

1. a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier momento, con el consentimiento unánime de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo IX. Tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia cuando el Gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado.

b) Subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia para cualquier otra Parte Contratante, cuando el Gobierno depositario haya recibido aviso de su ratificación. Si no se recibe aviso de ratificación de dicha Parte Contratante dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la modificación o enmienda, en conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 (a) de este artículo, se la considerará como habiendo dejado de ser Parte del presente Tratado en la fecha de vencimiento de tal plazo.

2. a) Si después de expirados treinta años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, cualquiera de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo IX, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al Gobierno depositario, se celebrará, en el menor plazo posible, una Conferencia de todas las Partes Contratantes para revisar el funcionamiento del presente Tratado.

b) Toda modificación o toda enmienda al presente Tratado, aprobada en tal Conferencia por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representadas, incluyendo la mayoría de aquellas cuyos representantes están facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo IX, se comunicará a todas las Partes Contratantes por el Gobierno depositario, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

c) Si tal modificación o tal enmienda no hubiera entrado en vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este artículo, dentro de un período de dos años, contados desde la fecha de su comunicación a todas las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, después de la expiración de dicho plazo, informar al Gobierno depositario que ha dejado de ser Parte del presente Tratado, y dicho retiro tendrá efecto dos años después que el Gobierno depositario haya recibido esta notificación.

## ARTICULO XIII

1. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación por parte de los Estados signatarios. Quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, o de cualquier otro Estado que pueda ser invitado a adherirse al Tratado con el consentimiento de todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo IX del Tratado.



## DOCUMENTACION

2. La ratificación del presente Tratado o la adhesión al mismo será efectuada por cada Estado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

3. Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán depositados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que será el Gobierno depositario.

4. El Gobierno depositario informará a todos los Estados signatarios y adherentes sobre la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión y sobre la fecha de entrada en vigencia del Tratado y de cualquier modificación o enmienda al mismo.

5. Una vez depositados los instrumentos de ratificación por todos los Estados signatarios, el presente Tratado entrará en vigencia para dichos Estados y para los Estados que hayan depositado sus instrumentos de adhesión. En lo sucesivo, el Tratado entrará en vigencia para cualquier Estado adherente una vez que deposite su instrumento de adhesión.

6. El presente Tratado será registrado por el Gobierno depositario conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

### ARTICULO XIV

El presente Tratado, hecho en los idiomas inglés, francés, ruso y español, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, será depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el que enviará copias debidamente certificadas del mismo a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los adherentes.

En testimonio de lo cual, los infraescritos Plenipotenciarios, debidamente autorizados, suscriben el presente Tratado.

Hecho en Washington el primer día del mes de diciembre de 1959.

### ESTADOS PARTE

|   | Ratificación | Adhesión  | Entrada en vigor |
|---|--------------|-----------|------------------|
| Alemania, República Federal de <sup>1</sup> | —            | 5-2-1979  | 5-2-1979         |
| Argentina . . . . .                         | 23-6-1961    | —         | 23-6-1961        |
| Australia . . . . .                         | 23-6-1961    | —         | 23-6-1961        |
| Bélgica . . . . .                           | 26-7-1960    | —         | 23-6-1961        |
| Brasil . . . . .                            | —            | 16-5-1975 | 16-5-1975        |
| Bulgaria . . . . .                          | —            | 11-9-1978 | 11-9-1978        |

1. El Instrumento de Adhesión de la República Federal de Alemania fue acompañado de una declaración contenida en una nota del Embajador de la República Federal de Alemania de fecha 5 de febrero de 1979, en la que se indica que a partir de la fecha en que el Tratado entre en vigor para la República Federal de Alemania, se aplicará también a Berlín Oeste, sujeto a los derechos y responsabilidades de Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América incluyendo los relativos al desarme y la desmilitarización.





## DOCUMENTACION

|   |           |                        |                        |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Checoslovaquia . . . . .                                | -         | 14-6-1962              | 14-6-1962              |
| Chile . . . . .   | 23-6-1961 | -                      | 23-6-1961              |
| Dinamarca . . . . .                                     | -         | 20-5-1965              | 20-5-1965              |
| Estados Unidos . . . . .                                | 18-8-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Francia . . . . .                                       | 16-9-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Italia . . . . .  | -         | 18-3-1981              | 18-3-1981              |
| Japón . . . . .   | 4-8-1960  | -                      | 23-6-1961              |
| Noruega . . . . .                                       | 24-8-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Nueva Zelanda . . . . .                                 | 1-11-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Países Bajos <sup>2</sup> . . . . .                     | -         | 30-3-1967              | 30-3-1967              |
| Papua Nueva Guinea . . . . .                            | -         | 16-3-1981 <sup>3</sup> | 16-9-1975 <sup>4</sup> |
| Perú . . . . .  | -         | 10-4-1981              | 10-4-1981              |
| Polonia . . . . .                                       | -         | 8-6-1961               | 23-6-1961              |
| Reino Unido . . . . .                                   | 31-5-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| República Democrática<br>Alemana <sup>5</sup> . . . . . | -         | 19-11-1974             | 19-11-1974             |
| República Sudafricana . . . . .                         | 21-6-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Rumania <sup>6</sup> . . . . .                          | -         | 15-9-1971              | 15-9-1971              |
| URSS . . . . .  | 2-11-1960 | -                      | 23-6-1961              |
| Uruguay <sup>7</sup> . . . . .                          | -         | 11-1-1980              | 11-1-1980              |
| España . . . . .  | -         | 31-3-1982              | 31-3-1982              |

El presente Tratado entró en vigor el 23 de junio de 1961 y para España el 31 de marzo de 1982, fecha del depósito de su Instrumento de Adhesión.

Madrid, 12 de mayo de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

2. La adhesión de los Países Bajos comprende el Reino de los Países Bajos en Europa, Surinam y las Antillas Holandesas.

3. Fecha del depósito de la notificación de sucesión.

4. Fecha de la independencia.

5. La República Democrática Alemana señala que el artículo XIII, párrafo 1 del Tratado se contraponen al principio de que todos los Estados que han acomodado sus políticas según los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas tienen un derecho a ser parte en los Tratados que afecten a los intereses de todos los Estados.

6. El Instrumento de Adhesión fue acompañado por una nota del Embajador de la República Socialista de Rumanía, de fecha 15 de septiembre de 1971, conteniendo la siguiente declaración del Consejo de Estado de la República Socialista de Rumanía. "El Consejo de Estado de la República Socialista de Rumanía declara que las disposiciones del párrafo 1 del artículo XIII del Tratado Antártico no concuerdan con el principio según el cual los Tratados multilaterales cuyo objeto y fines interesan a la comunidad internacional en su conjunto deberían estar abiertos a una participación universal".

7. "El Gobierno de la República Oriental del Uruguay considera que con su adhesión al Tratado de la Antártida, suscrito en Washington (Estados Unidos de América) el 1 de diciembre de 1959, contribuye a afirmar los principios del uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos, de prohibición de toda explosión nuclear y de la eliminación de los desechos radiactivos en esa área, de la libertad de investigación científica en la Antártida puesta al servicio de la Humanidad y de la cooperación internacional para el logro de esos objetivos, que consagra el mencionado Tratado. Dentro del marco de esos principios el Uruguay propugnará, mediante cualquier procedimiento basado en el principio de igualdad jurídica, por el establecimiento de un Estatuto general y definitivo para la Antártida, en el que, respetándose los derechos que reconozca a los Estados el Derecho Internacional, se contemplen equitativamente los intereses de todos los Estados involucrados y de la Comunidad internacional en su conjunto. La decisión del Gobierno uruguayo de adherir al Tratado de la Antártida se funda no solamente en el interés que, como todo miembro de la Comunidad Internacional, tiene el uruguayo en la Antártida, sino además en un interés especial, directo y sustancial, derivado de su situación geográfica, del enfrentamiento de su costa atlántica al continente antártico, de la influencia que éste ejerce en su clima, en su ecología



## DOCUMENTACION

### **ACUERDO SOBRE EL REGIMEN DE CIRCULACION DE PERSONAS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA, HECHO EN PARIS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1957.**

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 27 DE ABRIL DE 1982

(B.O.E. 1 de julio de 1982)

DON JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 31 de julio de 1981 el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Acuerdo Europeo sobre el Régimen de la Circulación de las Personas entre los países miembros del Consejo de Europa, hecho en París el 13 de diciembre de 1957.

Vistos y examinados los trece artículos del Acuerdo y el anexo que forma parte del mismo.

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española.

Vengo en aprobar y ratificar, cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y dos.— Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

### **ACUERDO EUROPEO SOBRE EL REGIMEN DE CIRCULACION DE PERSONAS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA.**

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, deseosos de facilitar los viajes personales entre sus países, han convenido lo siguiente:

#### **ARTICULO I**

1. Los nacionales de las Partes Contratantes, cualquiera que sea su país de residencia, podrán entrar en el territorio de las demás Partes o salir de ese territorio, por todas las fronteras, presentando uno de los documentos mencionados en el anexo del presente Acuerdo, que es parte integrante del mismo.

2. Las facilidades indicadas en el párrafo precedente sólo se aplicarán a las visitas que no excedan de tres meses de duración.

3. Para todas las visitas de una duración superior a tres meses o para la entrada en el territorio de otra Parte con objeto de desarrollar una actividad lucra-

y en su biología marina; de los vínculos históricos que lo ligan desde las primeras expediciones que se aventuraron a explorar dicho continente y sus aguas, así como de las obligaciones asumidas conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que incluye una parte del territorio antártico en la zona descrita en el artículo cuarto, por virtud de lo cual el Uruguay coparticipa en la responsabilidad de la defensa de la región. En ocasión de comunicar su decisión de adherir al Tratado de la Antártida, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay declara que deja reservados los derechos que le correspondan en la Antártida, de acuerdo con el Derecho Internacional”.



## DOCUMENTACION

tiva podrá exigirse pasaporte y visado válidos.

4. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "territorio" de una Parte Contratante tendrá el significado que dicha Parte le asigne en una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, quien lo pondrá en conocimiento de las demás Partes Contratantes.

### ARTICULO 2

Cuando lo juzguen necesario una o varias Partes Contratantes, el cruce de la frontera se efectuará sólo por los puestos autorizados.

### ARTICULO 3

Las disposiciones de los artículos precedentes no afectarán a las normas legislativas y reglamentarias relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.

### ARTICULO 4

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a las normas de las legislaciones nacionales, tratados, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes o que entren en vigor posteriormente, por las que se apliquen condiciones más favorables a los nacionales de una o varias Partes Contratantes en lo relativo al cruce de fronteras.

### ARTICULO 5

Cada una de las Partes Contratantes permitirá regresar a su territorio, sin formalidad alguna, a todo titular de uno de los documentos mencionados en la lista incluida en el anexo del presente Acuerdo, aun en el caso de que la nacionalidad del interesado se halle en litigio.

### ARTICULO 6

Cada una de las Partes Contratantes se reserva el derecho a denegar la entrada o la permanencia en su territorio a los nacionales de otra Parte que considere indeseables.

### ARTICULO 7

Cada una de las Partes Contratantes se reserva la facultad, por razones de orden público, seguridad o salud pública, de no aplicar inmediatamente el presente Acuerdo o de suspender temporalmente su aplicación respecto de las demás Partes o algunas de ellas, excepto las disposiciones del artículo 5. Esta medida habrá de notificarse inmediatamente al Secretario general del Consejo de Europa, quien lo comunicará a las demás Partes. Se seguirá el mismo procedimiento cuando deje de aplicarse dicha medida.

Si una Parte Contratante decide hacer uso de las facultades mencionadas en



## DOCUMENTACION

el párrafo precedente no podrá exigir a la otra Parte que aplique el presente Acuerdo más que en la medida en que lo aplica a esa Parte.

### ARTICULO 8

El presente Acuerdo estará abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa, que podrán ser Partes mediante:

- a) La firma sin reserva de ratificación.
- b) La firma con reserva de ratificación, seguida por ratificación.

Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

### ARTICULO 9

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que tres miembros del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, hubieren firmado el Acuerdo sin reserva de ratificación o lo hubieran ratificado.

Para cada miembro que posteriormente firme el Acuerdo sin reserva de ratificación o lo ratifique, el Acuerdo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha de la firma o del depósito del Instrumento de Ratificación.

### ARTICULO 10

Después de que haya entrado en vigor el presente Acuerdo, el Comité de Miembros del Consejo de Europa podrá invitar a adherirse al mismo a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo. La adhesión surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la fecha del depósito del Instrumento de Adhesión en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

### ARTICULO 11

Todo Gobierno que desee firmar el presente Acuerdo o adherirse al mismo sin haber decidido todavía su lista de documentos, a que hace referencia el párrafo 1 del artículo 1, para su inclusión en el anexo, presentará posteriormente dicha lista a las Partes Contratantes por conducto del Secretario general del Consejo de Europa.

Si no se formula ninguna objeción en el plazo de dos meses después de haber sido comunicada por el Secretario general, se considerará que esta lista ha sido aprobada por todas las Partes Contratantes y se incluirá en el anexo del presente Acuerdo.

Se seguirá el mismo procedimiento si un Gobierno signatario desea modificar su lista de documentos, incluida ya en el anexo.

### ARTICULO 12

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los miembros del Consejo y a los Estados adheridos:



## DOCUMENTACION

- a) La fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo y los nombres de los miembros que lo hayan firmado sin reserva de ratificación o lo hayan ratificado.
- b) El depósito de todo Instrumento de Adhesión efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.
- c) Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 10 y la fecha en que surte efecto la notificación.

### ARTICULO 13

Cualquier Parte Contratante podrá dar por terminada la aplicación del presente Acuerdo, en lo que le concierne, con un preaviso de tres meses, mediante notificación al Secretario general del Consejo de Europa.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firman el presente Acuerdo.

Hecho en París el 13 de diciembre de 1957, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a los Gobiernos signatarios.

### ANEXO

#### *República Federal de Alemania*

Pasaporte nacional o certificado de viaje para menores de la República Federal de Alemania, válidos.

Tarjeta de identidad oficial de la República Federal de Alemania, válida.

Tarjeta de identidad provisional y fotografía certificada de identificación de un menor, expedida por el Land de Berlín, válida.

#### *Austria*

Pasaporte válido o caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta de identidad oficial.

#### *Bélgica*

Pasaporte nacional de Bélgica, válido o caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta de identidad oficial.

Tarjeta de identidad expedida a un nacional belga, equivalente a un certificado de matriculación, expedida por un funcionario diplomático o consular de Bélgica en el extranjero.

Certificado de identidad con fotografía, expedido por una autoridad municipal belga a un menor de doce años.

Documento de identidad, sin fotografía, expedido a menores de doce años por una autoridad municipal belga; sin embargo, sólo se admitirá este documento cuando los menores viajen en compañía de sus padres.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por la autoridad com-



## DOCUMENTACION

petente del país de residencia, para los belgas que residan legalmente en Francia, Luxemburgo y Suiza, con la mención de que el titular es de nacionalidad belga.

### *España*

- a) Pasaporte en vigor o caducado desde menos de cinco años.
- b) Documento nacional de identidad en vigor.
- c) Los menores de dieciocho años, documento nacional en vigor, unido al correspondiente permiso, concedido por la persona que ejerza la patria potestad, expedido por comparecencia ante la Jefatura o Comisaría del Cuerpo Superior de Policía, Juzgado, Notario, Alcalde o Comandante de Puesto de la Guardia Civil.

### *Francia*

Pasaporte nacional de la República Francesa, válido o caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta oficial de identidad de la República Francesa, válida.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por la autoridad competente del país de residencia, para los franceses que residan legalmente en Bélgica, Luxemburgo y Suiza; esta tarjeta deberá mencionar la nacionalidad del titular.

### *Grecia*

Pasaporte nacional, válido.

Tarjeta de identidad turística.

### *Italia*

Pasaporte nacional, válido, de la República Italiana.

Tarjeta de identidad oficial de la República Italiana.

Para los menores, certificado de nacimiento, con fotografía refrendada por la Policía.

Tarjeta personal de identidad, expedida a los funcionarios del Estado.

### *Luxemburgo*

Pasaporte válido o caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta de identidad oficial.

Documento de identidad y de viaje, expedido a un menor de quince años por una administración municipal luxemburguesa.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por la autoridad competente del país de residencia, para los luxemburgueses que residen legalmente en Bélgica, Francia, Suiza y Liechtenstein, con la mención de que el titular es de nacionalidad luxemburguesa.



## DOCUMENTACION

### Malta

Pasaporte nacional, válido.

Tarjeta de identidad oficial, válida.

### Países Bajos

Pasaporte válido del Reino de los Países Bajos, que incluye pasaporte nacional, el pasaporte diplomático, el pasaporte oficial (pasaporte de servicio) y el salvocinducto.

Pasaporte nacional caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta de identidad, válida (tarjeta de turista), modelos A o B.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por las autoridades belgas con la mención de que el titular es de nacionalidad neerlandesa.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por las autoridades luxemburguesas con la mención de que el titular es de nacionalidad neerlandesa.

### Suiza

Pasaporte nacional, válido o caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta suiza de identidad, válida, expedida por una autoridad cantonal o municipal.

Para los menores de quince años que carezcan de pasaporte y de tarjeta de identidad, salvoconducto expedido por la autoridad cantonal.

| Estados Parte          | Firma               | Rectificación      |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Alemania, República    |                     |                    |
| Federal de . . . . .   | 13 diciembre 1957.  | 30 mayo 1958.      |
| Austria . . . . .      | 13 diciembre 1957.  | 30 mayo 1958.      |
| Bélgica . . . . .      | 13 diciembre 1957.  | 13 diciembre 1957. |
| España(*) . . . . .    | 31 julio 1981.      | 18 mayo 1982.      |
| Francia . . . . .      | 13 diciembre 1957.  | 13 diciembre 1957. |
| Grecia . . . . .       | 13 diciembre 1957.  | 13 diciembre 1957. |
| Italia . . . . .       | 13 diciembre 1957.  | 13 diciembre 1957. |
| Luxemburgo. . . . .    | 13 diciembre 1957.  | 24 abril 1981.     |
| Malta . . . . .        | 22 septiembre 1967. | 7 mayo 1968.       |
| Países Bajos . . . . . | 31 marzo 1960.      | 24 febrero 1961.   |
| Suiza . . . . .        | 29 noviembre 1965.  | 20 diciembre 1966. |
| Turquía . . . . .      | 25 mayo 1961.       | 25 mayo 1961.      |

El presente Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1958 y para España el 1 de junio de 1982, según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 2, del mismo.

Madrid, 22 de junio de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

(\*) De acuerdo con el artículo 1, párrafo 4, el término "territorio" se entenderá como "territorio nacional".



## DOCUMENTACION

### TRATADO DE 4 DE ABRIL DE 1949 DEL ATLANTICO NORTE.

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE ESPAÑA DE 29 DE MAYO DE 1982

(B.O.E. 31 mayo 1982)

DON JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española, extendiendo el presente Instrumento de Adhesión del Reino de España al Tratado del Atlántico Norte, para que mediante su depósito y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 10, el Reino de España pase a ser Parte en dicho Tratado.

En fe de lo cual, firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y re-frendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos.—  
Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

### TRATADO DEL ATLANTICO NORTE

Los Estados Partes en este Tratado:

Reafirmando su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos.

Decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, fundadas en los principios de democracia, libertades individuales e imperio de la ley;

Deseosos de favorecer el bienestar y la estabilidad en la región del Atlántico Norte;

Resueltos a unir sus esfuerzos para su defensa colectiva y la conservación de la paz y la seguridad,

Han convenido en el siguiente Tratado del Atlántico Norte:

#### ARTICULO I

Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no se pongan en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.





## DOCUMENTACION

### ARTICULO 2

Las Partes contribuirán al desarrollo de las relaciones internacionales pacíficas y amistosas reforzando sus instituciones libres, asegurando una mejor comprensión de los principios en que se basan esas instituciones y favoreciendo las condiciones propias para asegurar la estabilidad y el bienestar. Tratarán de eliminar cualquier conflicto en sus políticas económicas internacionales y estimularán la colaboración económica entre algunas de las Partes o entre todas ellas.

### ARTICULO 3

A fin de lograr más eficazmente la realización de los fines del presente Tratado, las Partes, actuando individual y conjuntamente de manera continua y efectiva mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, mantendrán y acrecerán su capacidad individual y colectiva de resistencia al ataque armado.

### ARTICULO 4

Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuere amenazada.

### ARTICULO 5

Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte.

Todo ataque armado de esta naturaleza y toda medida adoptada en consecuencia se pondrán inmediatamente en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.

### ARTICULO 6

A efectos del artículo 5º se considera ataque armado contra una o varias de las Partes, un ataque armado contra el territorio de cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra las fuerzas de ocupación de cualquiera de las Partes en Europa, contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las Partes en la región del Atlántico Norte al Norte del Trópico de Cáncer o contra los buques o aeronaves de cualquiera de las Partes en la citada región.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 7

El presente Tratado no afecta ni se podrá interpretar que afecte de modo alguno a los derechos y obligaciones derivados de la Carta para las Partes que son miembros de las Naciones Unidas, ni a la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

### ARTICULO 8

Cada una de las Partes declara que ninguno los compromisos internacionales actualmente en vigor entre ella y cualquier otra Parte o cualquier Estado está en contradicción con las disposiciones del presente Tratado y asume la obligación de no adquirir ningún compromiso internacional en contradicción con el Tratado.

### ARTICULO 9

Las Partes establecen por la presente disposición un Consejo, en el que cada una de ellas estará representada, para conocer de las cuestiones relativas a la aplicación del Tratado. El Consejo estará organizado de manera que pueda reunirse rápidamente en cualquier momento. El Consejo establecerá cuantos órganos subsidiarios puedan ser necesarios; y en especial establecerá inmediatamente un comité de defensa que recomendará las medidas apropiadas para la aplicación de los artículos tercero y quinto.

### ARTICULO 10

Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a adherirse al Tratado a cualquier otro Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la región del Atlántico Norte. Cualquier Estado así invitado puede pasar a ser parte en el Tratado depositando su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este informará a cada una de las Partes del depósito de cada instrumento de adhesión.

### ARTICULO 11

Este Tratado será ratificado y sus disposiciones aplicadas por las Partes conforme a sus preceptos constitucionales respectivos. Los instrumentos de ratificación se depositarán, tan pronto como sea posible, ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, quien informará a los Gobiernos de las otras Partes del depósito de cada instrumento de ratificación. El Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo hayan ratificado, en cuanto se hayan depositado las ratificaciones de la mayoría de los signatarios, comprendidas las de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido. Y entrará en vigor para los demás signatarios el día del depósito de sus ratificaciones.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 12

Pasados diez años de vigencia del Tratado, o en cualquier fecha ulterior, las Partes se consultarán, a petición de cualesquiera de ellas, con el fin de revisar el Tratado, teniendo en cuenta los factores que afecten en aquel momento a la paz y a la seguridad de la región del Atlántico Norte, incluido el desarrollo de los acuerdos, tanto universales como regionales, concluidos conforme a la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

### ARTICULO 13

Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al Tratado, un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual informará a los Gobiernos de las demás Partes del depósito de cada notificación de denuncia.

### ARTICULO 14

Este Tratado, cuyos textos en francés e inglés hacen igualmente fe, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Este Gobierno remitirá copias debidamente certificadas a los Gobiernos de los demás Estados signatarios.

Hecho en Washington el 4 de abril de 1949.

## PROTOCOLOS

### ADHESION DE GRECIA, TURQUIA Y LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE

#### *Protocolo al Tratado del Atlántico Norte, relativo a la adhesión de Grecia y Turquía*

Las Partes del Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949 en Washington:

Convenidas de que la adhesión del Reino de Grecia y de la República de Turquía al Tratado del Atlántico Norte permitirá incrementar la seguridad de la región del Atlántico Norte,

Convienen en lo siguiente:

### ARTICULO 1

Al entrar en vigor el presente Protocolo, el Gobierno de los Estados Unidos remitirá, en nombre de todas las Partes, al Gobierno del Reino de Grecia y al Gobierno de la República de Turquía, una invitación para que se adhieran al Tratado del Atlántico Norte tal como quedará modificado por el artículo 2º del pre-



presente Protocolo.

Conforme al artículo 10 del Tratado, el Reino de Grecia y la República de Turquía llegarán a ser cada uno de dichos países Partes de dicho Tratado el día de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

#### ARTICULO 2

Si la República de Turquía llegara a ser Parte del Tratado del Atlántico Norte, el artículo 6º del mismo se modificará, a partir de la fecha de depósito por el Gobierno de la República de Turquía de su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, de la forma siguiente:

“A efectos del artículo 5º se considera ataque armado contra una o varias de las Partes un ataque armado:

i) Contra el territorio de cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las Partes en la región del Atlántico Norte al Norte del Trópico de Cáncer.

ii) Contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las Partes que están en dichos territorios o sobre ellos, o en cualquiera otra región de Europa en la que estuviesen estacionadas fuerzas de ocupación de cualquiera de las Partes en la fecha en que el Tratado entró en vigor, o en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al Norte del Trópico de Cáncer”.

#### ARTICULO 3

Al presente Protocolo entrará en vigor cuando todas las Partes del Tratado del Atlántico Norte hayan notificado su aprobación al Gobierno de los Estados Unidos de América. El Gobierno de los Estados Unidos de América informará a todas las Partes del Tratado del Atlántico Norte de la fecha de recepción de cada una de dichas notificaciones y de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.

#### ARTICULO 4

El presente Protocolo, cuyos textos en francés e inglés serán igualmente fehacientes, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho Gobierno remitirá copias certificadas conformes a los Gobiernos de todas las demás Partes del Tratado del Atlántico Norte.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se designan firman el presente Protocolo.

Abierto a la firma en Londres el 17 de octubre de 1951.



## DOCUMENTACION

### *Protocolo al Tratado del Atlántico Norte, relativo a la adhesión de la República Federal de Alemania*

Las Partes del Tratado del Atlántico Norte firmado en Washington el 4 de abril de 1949;

Convencidas de que la adhesión de la República Federal de Alemania a este Tratado reforzará la seguridad de la región del Atlántico Norte;

Tomando nota de la declaración por la cual la República Federal de Alemania, el 3 de octubre de 1954, aceptó las obligaciones previstas en el artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidas y se comprometió, al adherirse al Tratado del Atlántico Norte, a abstenerse a toda acción incompatible con el carácter estrictamente defensivo de este Tratado;

Tomando nota, además, de la decisión de todos los Gobiernos miembros de asociarse a la Declaración igualmente hecha el 3 de octubre de 1954 por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la República francesa y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Declaración citada anteriormente de la República Federal de Alemania,

Han acordado las disposiciones siguientes:

#### ARTICULO 1

Al entrar en vigor el presente Protocolo, el Gobierno de los Estados Unidos de América remitirá, en nombre de todas las Partes, al Gobierno de la República Federal de Alemania una invitación para que se adhiera al Tratado del Atlántico Norte. Conforme al artículo 10 del Tratado, la República Federal de Alemania será Parte de este Tratado a partir de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

#### ARTICULO 2

El presente Protocolo entrará en vigor: a) cuando todas las Partes del Tratado del Atlántico Norte hayan notificado su aprobación al Gobierno de los Estados Unidos de América; b) cuando todos los instrumentos de ratificación del Protocolo que modifican y completan el Tratado de Bruselas hayan sido depositados ante el Gobierno belga, y c) cuando todos los instrumentos de ratificación o aprobación del Convenio sobre la presencia de fuerzas extranjeras sobre el territorio de la República Federal de Alemania hayan depositados ante el Gobierno de la República Federal de Alemania. El Gobierno de los Estados Unidos de América informará a todas las Partes del Tratado del Atlántico Norte de la fecha de recepción de cada una de estas notificaciones y de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.

#### ARTICULO 3

El presente Protocolo, cuyos textos en francés e inglés serán igualmente fehacientes, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de



## DOCUMENTACION

América. Dicho Gobierno remitirá copias certificadas conformes a los Gobiernos de todas las demás Partes del Tratado del Atlántico Norte.

En fe de lo cual, los representantes abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.

Firmado en París el 23 de octubre de 1954.

### Estados Partes en el Tratado del Atlántico Norte

Bélgica: 24 de agosto de 1949.

Canadá: 24 de agosto de 1949.

Dinamarca: 24 de agosto de 1949.

Estados Unidos: 24 de agosto de 1949.

Francia: 24 de agosto de 1949.

Islandia: 24 de agosto de 1949.

Italia: 24 de agosto de 1949.

Luxemburgo: 24 de agosto de 1949.

Noruega: 24 de agosto de 1949.

Países Bajos: 24 de agosto de 1949.

Portugal: 24 de agosto de 1949.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 24 de agosto de 1949.

Grecia: 18 de febrero de 1952.

Turquía: 18 de febrero de 1952.

República Federal de Alemania: 5 de mayo de 1955.

El presente Tratado entró en vigor para España el día 30 de mayo de 1982, fecha del depósito del Instrumento de Adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 30 de mayo de 1982.— El Secretario general Técnico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

### ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. CONSTITUCION.

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada el 28 de junio de 1919 (Asuntos Exteriores) y modificada por la Enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 de junio de 1934; por el Instrumento de Enmienda de 1945, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1946; por el Instrumento de Enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948; por el Instrumento de Enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de mayo de 1954; por el Instrumento de Enmienda de 1962, que entró en vigor el 22 de mayo de 1963, y por el Instrumento de Enmienda de 1972, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1974. (B.O.E. 21 septiembre 1982).



## DOCUMENTACION

### PREAMBULO

Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social;

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas.

Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

### CAPITULO PRIMERO

#### ARTICULO 1

##### *Organización*

1. Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución y en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo a esta Constitución.

2. Serán Miembros de la Organización Internacional del Trabajo los Estados que eran Miembros de la Organización el 1 de noviembre de 1945 y cualquier otro Estado que adquiera la calidad de Miembro de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo.

3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cualquier Estado admitido como Miembro de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta, podrán adquirir la calidad de Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, comunicando al Direc-



tor general de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

4. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo podrá también admitir a un Estado en calidad de Miembro de la Organización por mayoría de dos tercios de los delegados presentes en la reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales presentes y votantes. Esta admisión surtirá efecto cuando el gobierno del nuevo Miembro comunique al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá retirarse de la Organización sin dar aviso previo de su intención al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto dos años después de la fecha de su recepción por el Director General a reserva de que en esta última fecha el Miembro haya cumplido todas las obligaciones financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando un Miembro haya ratificado un convenio internacional del trabajo, su retiro no menoscabará la validez de todas las obligaciones que se deriven del convenio o se refieran a él, respecto del período señalado en dicho convenio.

6. En caso de que un Estado hubiera dejado de ser Miembro de la Organización, su readmisión como Miembro se regirá por las disposiciones de los párrafos 3 ó 4 de este artículo.

La Organización permanente comprende:

## ARTICULO 2

- a) La Conferencia General de los representantes de los Miembros;
- b) El Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artículo 7; y
- c) La Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la dirección del Consejo de Administración.

## ARTICULO 3

1. La Conferencia General de los representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año; se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros.

2. Cada delegado podrá estar acompañado de dos consejeros técnicos, como máximo, por cada uno de los puntos que figuren en el orden del día de la reunión. Cuando en la Conferencia deban discutirse cuestiones de especial interés para las mujeres, entre las personas designadas como consejeros técnicos una, por lo menos, deberá ser mujer.

3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones internacionales de territorios no metropolitanos podrá designar como consejeros técnicos adicionales





## DOCUMENTACION

para acompañar a cada uno de sus delegados:

a) A personas nombradas por dicho Miembro en calidad de representantes de cualquiera de esos territorios para los asuntos que sean de la competencia de las autoridades de tales territorios; y

b) A personas nombradas por dicho Miembro para asesorar a sus delegados en los asuntos relativos a territorios no autónomos.

4. Cuando un territorio esté bajo la autoridad conjunta de dos o más Miembros, podrán designarse personas para asesorar a los delegados de dichos Miembros.

5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate.

6. Los consejeros técnicos sólo podrán hacer uso de la palabra a petición del delegado a quien acompañen y con autorización especial del Presidente de la Conferencia; no podrán participar en las votaciones.

7. Cualquier delegado podrá, por nota escrita dirigida al Presidente, designar como suplente a uno de sus consejeros técnicos, quien, en tal caso, podrá participar en los debates y en las votaciones.

8. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos serán comunicados a la Oficina Internacional de Trabajo por el gobierno de cada uno de los Miembros.

9. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos serán examinados por la Conferencia, la cual podrá, por mayoría de dos tercios de los votos de los delegados presentes, rechazar la admisión de cualquier delegado o consejero técnico que en opinión de la misma no haya sido designado de conformidad con el presente artículo.

### ARTICULO 4

1. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a la Conferencia.

2. En caso de que uno de los Miembros no hubiere designado a uno de los delegados no gubernamentales a que tiene derecho, el otro delegado no gubernamental tendrá derecho a participar en los debates de la Conferencia, pero no a votar.

3. En caso de que la Conferencia, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 3, rechazare la admisión de un delegado de uno de los Miembros, las disposiciones del presente artículo se aplicarán como si dicho delegado no hubiere sido designado.

### ARTICULO 5

Las reuniones de la Conferencia se celebrarán, a reserva de las decisiones que



pueda haber tomado la propia Conferencia en una reunión anterior, en el lugar que decida el Consejo de Administración.

#### ARTICULO 6

Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo lo decidirá la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los propios delegados presentes.

#### ARTICULO 7

1. El Consejo de Administración se compondrá de cincuenta y seis personas: Veintiocho representantes de los gobiernos; Catorce representantes de los empleadores, y Catorce representantes de los trabajadores.

2. De los veintiocho representantes de los gobiernos, diez serán nombrados por los Miembros de mayor importancia industrial, y los dieciocho restantes, por los Miembros designados al efecto de los delegados gubernamentales a la Conferencia, con exclusión de los delegados de los diez Miembros primeramente mencionados.

3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que sea necesario, cuáles son los Miembros de la Organización de mayor importancia industrial y fijará las normas para que todas las cuestiones relacionadas con la designación de dichos Miembros sean examinadas por una comisión imparcial antes de que el Consejo de Administración adopte una decisión al respecto. Toda apelación interpuesta por un Miembro contra la decisión del Consejo de Administración por la que determine cuáles son los Miembros de mayor importancia industrial será resuelta por la Conferencia; pero dicha apelación no suspenderá la aplicación de la decisión mientras la Conferencia no se haya pronunciado.

4. Los representantes de los empleadores y los de los trabajadores serán elegidos, respectivamente, por los delegados empleadores y los delegados trabajadores a la Conferencia.

5. El Consejo de Administración se renovará cada tres años. Si por cualquier razón las elecciones del Consejo de Administración no pudieren celebrarse al expirar este plazo, el Consejo de Administración continuará en funciones hasta que puedan realizarse.

6. La forma de proveer los puestos vacantes y de designar los suplentes, y otras cuestiones análogas, podrán ser resueltas por el Consejo, a reserva de la aprobación de la Conferencia.

7. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un presidente y dos vicepresidentes. Uno de estos tres cargos deberá ser desempeñado por una persona que represente a un gobierno y los otros dos por personas que representen, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores.

8. El Consejo de Administración fijará su propio reglamento, así como las fechas de sus reuniones. Se celebrará reunión extraordinaria cuando lo soliciten



por escrito por lo menos dieciséis miembros del Consejo de Administración.

#### ARTICULO 8

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá instrucciones y ante el cual será responsable de la buena marcha de la Oficina y de la ejecución de cualesquiera otras funciones que pudieren serle confiadas.

2. El Director General o su suplente asistirá a todas las sesiones del Consejo de Administración.

#### ARTICULO 9

1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Director General, de acuerdo con las reglas aprobadas por el Consejo de Administración.

2. Los nombramientos que efectúe el Director general deberán recaer en personas de diferentes nacionalidades, siempre que ello sea compatible con la eficacia de las labores de la Oficina.

3. Algunas de estas personas deberán ser mujeres.

4. Las funciones del Director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el Director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la Organización.

5. Todo Miembro de la Organización se obliga a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director general y del personal y no tratará de ejercer influencia sobre ellos en el cumplimiento de sus funciones.

#### ARTICULO 10

1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo comprenderán la compilación y distribución de todas las informaciones concernientes a la reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con miras a la adopción de convenios internacionales, así como la realización de encuestas especiales ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de Administración.

2. A reserva de las instrucciones que pueda darle el Consejo de Administración, la Oficina:

a) Preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las reuniones de la Conferencia;

b) Prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la ayuda posible para elaborar una legislación basada en las decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas administrativas y los sistemas de inspección;



## DOCUMENTACION

c) Cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, los deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los convenios.

d) Redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administración considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones relativas a la industria y al trabajo que tengan interés internacional.

3. De un modo general, la Oficina tendrá cualesquiera otras facultades y obligaciones que la Conferencia o el Consejo de Administración considere conveniente encomendarle.

### ARTICULO 11

Las dependencias gubernamentales de los Estados Miembros que se ocupen de cuestiones de trabajo podrán comunicarse directamente con el Director General por conducto del representante de su gobierno en el Consejo de Administración de la Oficina internacional del Trabajo, o, en su defecto, por conducto de cualquier otro funcionario debidamente calificado y designado al respecto por el gobierno interesado.

### ARTICULO 12

1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución, con cualquier organización internacional de carácter general encargada de coordinar las actividades de las organizaciones de derecho internacional público que tengan funciones especializadas, y con las organizaciones de derecho internacional público que tengan funciones especializadas en esferas afines.

2. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar medidas apropiadas para que los representantes de las organizaciones de derecho internacional público participen, sin voto, en sus debates.

3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para efectuar consultas, cuando lo considere conveniente, con las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas, comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y de cooperativistas.

### ARTICULO 13

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá celebrar con las Naciones Unidas los acuerdos financieros y presupuestarios que considere apropiados.

2. Mientras no se hayan concluido tales acuerdos, o si en un momento dado no estuvieren en vigor:

a) Cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y estancia de sus delegados y consejeros técnicos, así como los de sus representantes que participen en las reuniones de la Conferencia o del Consejo de Administración, según sea el caso;

b) Todos los demás gastos de la Oficina Internacional del Trabajo y de las



## DOCUMENTACION

reuniones de la Conferencia o del Consejo de Administración serán sufragados por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con cargo al presupuesto general de la Organización Internacional del Trabajo;

c) Las disposiciones relativas a la aprobación del presupuesto de la Organización Internacional del Trabajo, así como las concernientes al prorrateo y recaudación de las contribuciones, las fijará la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, y en dichas disposiciones se establecerá que el presupuesto y las reglas concernientes al prorrateo de los gastos entre los Miembros de la Organización serán aprobados por una comisión de representantes gubernamentales.

3. Los gastos de la Organización Internacional del Trabajo correrán a cargo de los Miembros, conforme a las disposiciones vigentes en virtud del párrafo 1º del apartado c) del párrafo 2 de este artículo.

4. El Miembro de la Organización que esté atrasado en el pago de su contribución financiera a la Organización no podrá votar en la Conferencia, en el Consejo de Administración, en ninguna comisión, ni en las elecciones de miembros del Consejo de Administración, si la suma adeudada fuere igual o superior al total de la contribución que deba pagar por los dos años anteriores completos. Sin embargo, la Conferencia podrá, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que el retraso se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro.

5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, será responsable, ante el Consejo de Administración, del empleo de los fondos de la Organización Internacional del Trabajo.

## CAPITULO II

### *Funcionamiento*

#### ARTICULO 14

1. El Consejo de Administración fijará el orden del día de las reuniones de la Conferencia, después de examinar todas las proposiciones presentadas al respecto por los gobiernos de los Miembros, por cualquiera de las organizaciones representativas a que se hace referencia en el artículo 3, o por cualquier organización de derecho internacional público.

2. El Consejo de Administración fijará reglas para lograr que se efectúe una preparación técnica y cabal y se consulte adecuadamente a los Miembros principalmente interesados, por medio de una conferencia preparatoria o de cualquier otro modo, antes de la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia.

#### ARTICULO 15

1. El Director General actuará como Secretario General de la Conferencia y



## DOCUMENTACION

cuatro meses antes de la sesión de apertura, pondrá el orden del día de cada reunión en conocimiento de los Miembros y, por conducto de éstos, en conocimiento de los delegados no gubernamentales, una vez que hayan sido designados.

2. Los informes sobre cada punto del orden del día serán enviados a los Miembros en tiempo oportuno a fin de que puedan ser examinados adecuadamente antes de la reunión de la Conferencia. El Consejo de Administración fijará las reglas para la aplicación de esta disposición.

### ARTICULO 16

1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá derecho a oponerse a la inscripción de una o varias cuestiones propuestas en el orden del día de la reunión. Los motivos que justifiquen dicha oposición deberán ser expuestos en una nota dirigida al Director General, quien deberá comunicarla a los Miembros de la Organización.

2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de oposición continuarán inscritas en el orden del día si la Conferencia así lo decidiere por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes.

3. Cuando la Conferencia decida, por la misma mayoría de dos tercios, que una cuestión deba ser examinada (y no se trate del caso previsto en el párrafo precedente), dicha cuestión será inscrita en el orden del día de la reunión siguiente.

### ARTICULO 17

1. La Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresidentes. De los tres vicepresidentes uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La Conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse.

2. Las decisiones de la Conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la Conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13.

3. Ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emitidos fuere inferior a la mitad del número de delegados presentes en la reunión.

### ARTICULO 18

La Conferencia podrá agregar expertos técnicos, sin derecho a voto, a las comisiones que constituya.

## ARTICULO 19

1. Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma: a) de un convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión tratada, o uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio.

2. En ambos casos, para que la Conferencia adopte en votación final el convenio o la recomendación será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes.

3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países.

4. El Presidente de la Conferencia y el Director General autenticarán, con sus firmas, dos copias del convenio o de la recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se enviará al Secretario General de las Naciones Unidas. El director General remitirá una copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los Miembros.

5. En el caso de un convenio:

a) El convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación;  
b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes completa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas;

c) Los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;

d) Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio;

e) Si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner





en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio.

6. En el caso de una recomendación:

a) La recomendación se comunicará a todos los Miembros para su examen, a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo;

b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas;

c) Los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;

d) Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.

7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Respecto a los convenios o recomendaciones que el gobierno federal considere apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales;

b) Respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, el gobierno federal:

i) Adoptará, de acuerdo con su constitución o las constituciones de los Estados, provincias o cantones interesados, medidas efectivas para someter tales convenios y recomendaciones, a más tardar dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia, a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o adopten otras medidas;





ii) Adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los gobiernos de los Estados, provincias o cantones interesados, para celebrar consultas periódicas entre las autoridades federales y las de los Estados, provincias o cantones interesados, a fin de promover, dentro del Estado federal, medidas coordinadas para poner en ejecución las disposiciones de tales convenios y recomendaciones;

iii) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter tales convenios y recomendaciones a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales apropiadas, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a las autoridades consideradas apropiadas y a las medidas por ellas adoptadas;

iv) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo;

v) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.

8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación.

#### ARTICULO 20

Todo convenio así ratificado será comunicado por el Director General de la oficina Internacional del Trabajo al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, pero sólo obligará a los Miembros que lo hayan ratificado.

#### ARTICULO 21

1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la Conferencia que en la votación final no obtuviere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los Miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los Miembros de la Organización que así lo deseen.

2. Todo convenio concertado en esta forma deberá ser comunicado por los



## DOCUMENTACION

gobiernos interesados al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

### ARTICULO 22

Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que hayan adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite.

### ARTICULO 23

1. El Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las informaciones y memorias que le hayan comunicado los Miembros en cumplimiento de los artículos 19 y 22.

2. Todo Miembro comunicará a las organizaciones representativas reconocidas, a los efectos del artículo 3, copia de las informaciones y memorias que haya enviado al Director General en cumplimiento de los artículos 19 y 22.

### ARTICULO 24

Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente.

### ARTICULO 25

Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida.

### ARTICULO 26

1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes.

2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerare conveniente y antes de referir el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente



la queja, en la forma prevista en el artículo 24.

3. Si el Consejo de Administración no considerare necesario comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informara al respecto.

4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja presentada por un Delegado de la Conferencia.

5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada por la aplicación de los artículos 25 ó 26, el gobierno interesado, si no estuviere ya representado en el Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en las deliberaciones del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado.

#### ARTICULO 27

En caso de que se decidiera someter a una comisión de encuesta una queja recibida en virtud del artículo 26, cada Miembro le concierna o no directamente la queja, se obliga a poner a disposición de la comisión todas las informaciones que tuviere en su poder relacionadas con el objeto de dicha queja.

#### ARTICULO 28

La comisión de encuesta, después de examinar detenidamente la queja, redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomendaciones que considere apropiado formular con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse.

#### ARTICULO 29

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a su publicación.

2. Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia.

#### ARTICULO 30

En caso de que uno de los Miembros no adoptare, para la aplicación de un convenio o de una recomendación, las medidas prescritas por los párrafos 5 b), 6 b) o 7 b) i) del artículo 19, cualquier otro Miembro podrá someter la cuestión al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración reconociere que



## DOCUMENTACION

el Miembro no ha adoptado dichas medidas, informará a la Conferencia sobre el particular.

### ARTICULO 31

La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable.

### ARTICULO 32

La Corte Internacional de Justicia podrá confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones que pudiese haber formulado la comisión de encuesta.

### ARTICULO 33

En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiese contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones.

### ARTICULO 34

El gobierno acusado de un cumplimiento podrá informar en cualquier momento al Consejo de Administración que ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta o las contenidas en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y podrá pedir que se constituya una comisión de encuesta encargada de comprobar sus aseveraciones. En este caso, serán aplicables las disposiciones de los artículos 27, 28, 29, 31 y 32, y si el informe de la comisión de encuesta o decisión de la Corte Internacional de Justicia fueren favorables al gobierno acusado de incumplimiento, el Consejo de Administración deberá recomendar que cese inmediatamente cualquier medida adoptada de conformidad con el artículo anterior.

## CAPITULO III

### *Prescripciones generales*

### ARTICULO 35

1. Los Miembros se obligan a aplicar los convenios que haya ratificado, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, a los territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales sean responsables, incluidos los territorios en fideicomiso de los cuales sean la autoridad administrativa excepto cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan dentro de la competencia de las autoridades del territorio, o cuando el convenio sea inaplicable debido a las condiciones locales, o a reserva de las modificaciones que se requieran para



adaptarlo a las condiciones locales.

2. Todo Miembro que ratifique un convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, tan pronto como sea posible después de la ratificación, una declaración en la que indique, respecto a los territorios que no estén comprendidos en los párrafos 4 y 5 de este artículo, en qué medida se obliga a que se apliquen las disposiciones del convenio y en la que proporcione las informaciones prescritas en tal convenio.

3. Todo Miembro que haya comunicado una declaración en virtud del párrafo precedente podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración que modifique los términos de cualquier otra anterior y dé a conocer la situación en lo que concierne a tales territorios.

4. Cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan dentro de la competencia de las autoridades de cualquier territorio no metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones internacionales de dicho territorio deberá comunicar el convenio al gobierno del territorio, tan pronto sea posible, a fin de que ese gobierno promulgue la legislación pertinente o adopte otras medidas. Posteriormente, el Miembro, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte las obligaciones del convenio en nombre de dicho territorio.

5. Cualquier declaración en virtud de la cual se acepten las obligaciones de un convenio podrá ser comunicada al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo:

a) Por dos o más Miembros de la Organización, respecto a cualquier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o

b) Por cualquier autoridad internacional responsable de la administración de un territorio en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición vigente para dicho territorio.

6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en virtud de los párrafos 4 ó 5 implicará la aceptación, en nombre del territorio interesado, de las obligaciones establecidas en el convenio y de las obligaciones que según la Constitución de la Organización se apliquen a los convenios ratificados. En la declaración de aceptación se podrán especificar las modificaciones a las disposiciones del convenio que sean necesarias para adaptarlo a las condiciones locales.

7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunicado una declaración en virtud de los párrafos 4 ó 5 de este artículo podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración por la que modifique los términos de cualquier declaración anterior o por la que deje sin efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en nombre del territorio interesado.

8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en nombre de un territorio al que se refieren los párrafos 4 ó 5 de este artículo, el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional, según sea el caso, deberán informar al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la legislación y la práctica que rigen en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el conve-



## DOCUMENTACION

nio, y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo. También deberán exponer en el informe las dificultades que impiden o retrasan la aceptación de tal convenio.

### ARTICULO 36

Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas o aceptadas por dos tercios de los Miembros de la Organización, incluidos cinco de los diez Miembros representados en el Consejo de Administración como Miembros de mayor importancia industrial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7 de esta Constitución.

### ARTICULO 37

1. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los Miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el Consejo de Administración podrá formular y someter a la aprobación de la Conferencia reglas para establecer un tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que le fuere referida por el Consejo de Administración o en virtud de los términos de dicho convenio. Cualquier fallo u opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia obligará a cualquier tribunal establecido en virtud del presente párrafo. Toda sentencia dictada por tal tribunal deberá ser comunicada a los Miembros de la Organización y cualquier observación que éstos formulen al respecto deberá someterse a la Conferencia.

### ARTICULO 38

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá convocar las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que considere convenientes para la consecución de los fines y objetivos de la Organización.

2. Las facultades, funciones y procedimientos de las conferencias regionales se regirán por reglas establecidas por el Consejo de Administración y sometidas a la Conferencia para su confirmación.

## CAPITULO IV

### *Disposiciones diversas*

### ARTICULO 39

La Organización Internacional del Trabajo gozará de completa personalidad



jurídica y especialmente de capacidad para:

- a) Contratar;
- b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos;
- c) Comparecer en juicio.

#### ARTICULO 40

1. La Organización Internacional del Trabajo, gozará en el territorio de cada uno de sus miembros, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para la consecución de sus fines.

2. Los delegados a la Conferencia, los miembros del Consejo de Administración, así como el Director General y los funcionarios de la Oficina, gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con toda independencia las funciones relacionadas con la Organización.

3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en un acuerdo separado que preparará la Organización para su aceptación por los Estados Miembros.

#### ANEXO

##### *Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo*

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adopta, el día 10 de mayo de 1944, la presente Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros.

#### I

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y, en especial, los siguientes:

- a) El trabajo no es una mercancía;
- b) La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante;
- c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos;
- d) La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común.

## II

La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social, afirma que:

- a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades;
- b) El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional;
- c) Cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental;
- d) Incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero; y
- e) Al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada.

## III

La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan:

- a) Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida;
- b) Emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimiento y de contribuir al máximo al bienestar común;
- c) Conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos;
- d) Adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección;
- e) Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción y la colaboración de trabajadores y empleadores en





## DOCUMENTACION

la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas;

f) Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa;

g) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones;

h) Proteger a la infancia y a la maternidad;

i) Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados;

j) Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.

## IV

La Conferencia, convencida de que la utilización más completa y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta Declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el progreso económico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y constante volumen, ofrece la entera colaboración de la Organización Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pudiere confiarse parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así como en el mejoramiento de la salud, de la educación y del bienestar de todos los pueblos.

## V

La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos y que si bien en las modalidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que todavía son dependientes y a los que han llegado a gobernarse por sí mismos interesa a todo el mundo civilizado.

## ESTADOS MIEMBROS

Afganistán: Desde 1934.

Alemania, Rep. Fed. de: De 1919 a 1935  
(Alemania) y desde 1951.

Alto Volta: Desde 1960.

Angola: Desde 1976.

Antigua y Barbuda: Desde 1982.

Arabia Saudita: Desde 1976.

Argelia: Desde 1962.

Argentina: Desde 1919.

Australia: Desde 1919.

Austria: De 1919 a 1938 y desde 1947.

Bahamas: Desde 1976.

Bahrein: Desde 1977.

Bangladesh: Desde 1972.

Barbados: Desde 1967.

Bélgica: Desde 1919.

Belize: Desde 1981.

Benin: Desde 1960.

RSS de Bielorrusia: Desde 1954.

Birmania: Desde 1948.

Bolivia: Desde 1919.

Botswana: Desde 1978.

Brasil: Desde 1919.

Bulgaria: Desde 1920.

Burundi: Desde 1963.

Cabo Verde: Desde 1979.



## DOCUMENTACION

República Unida del Camerún: Desde 1960.

Canadá: Desde 1919.

República Centroafricana: Desde 1960.

Chad: Desde 1960.

Checoslovaquia: Desde 1919.

Chile: Desde 1919.

China: Desde 1919.

Chipre: Desde 1960.

Colombia: Desde 1919.

Comoras: Desde 1978.

Congo: Desde 1960.

Costa de Marfil: Desde 1960.

Costa Rica: De 1920 a 1927 y desde 1944.

Cuba: Desde 1919.

Dinamarca: Desde 1919.

Djibouti: Desde 1978.

Dominica: Desde 1982.

República Dominicana: Desde 1924.

Ecuador: Desde 1934.

Egipto: Desde 1936.

El Salvador: De 1919 a 1939 y desde 1948.

Emiratos Árabes Unidos: Desde 1972.

España: De 1919 a 1941 y desde 1956.

Estados Unidos: De 1934 a 1977 y desde 1980.

Etiopía: Desde 1923.

Fidji: Desde 1974.

Filipinas: Desde 1948.

Finlandia: Desde 1920.

Francia: Desde 1919.

Gabón: Desde 1960.

Ghana: Desde 1957.

Granada: Desde 1979.

Grecia: Desde 1919.

Guatemala: De 1919 a 1938 y desde 1945.

Guinea: Desde 1959.

Guinea Bissau: Desde 1977.

Guinea Ecuatorial: Desde 1981.

Guyana: Desde 1966.

Haití: Desde 1919.

Honduras: De 1919 a 1938 y desde 1955.

Hungría: Desde 1922.

India: Desde 1919.

Indonesia: Desde 1950.

Irán: Desde 1919.

Iraq: Desde 1932.

Irlanda: Desde 1923.

Islandia: Desde 1945.

Israel: Desde 1949.

Italia: De 1919 a 1939 y desde 1945.

Jamaica: Desde 1962.

Japón: De 1919 a 1940 y desde 1951.

Jordania: Desde 1956.

Kampuchea Democrática: Desde 1969.

Kenia: Desde 1964.

Kuwait: Desde 1961.

República Lao: Desde 1964.

Leshoto: De 1966 a 1971 y desde 1980.

Líbano: Desde 1948.

Liberia: Desde 1919.

Jamahiriyá Árabe Libia: Desde 1952.

Luxemburgo: Desde 1920.

Madagascar: Desde 1960.

Malasia: Desde 1957.

Malawi: Desde 1965.

Malí: Desde 1960.

Malta: Desde 1965.

Marruecos: Desde 1956.

Mauricio: Desde 1969.

Mauritania: Desde 1961.

México: Desde 1931.

Mongolia: Desde 1968.

Mozambique: Desde 1976.

Namibia: Desde 1978.

Nepal: Desde 1966.

Nicaragua: De 1919 a 1938 y desde 1957.

Níger: Desde 1961.

Nigeria: Desde 1960.

Noruega: Desde 1919.

Nueva Zelanda: Desde 1919.

Países Bajos: Desde 1919.

Pakistán: Desde 1947.

Panamá: Desde 1919.

Papúa Nueva Guinea: Desde 1976.

Paraguay: De 1919 a 1937 y desde 1956.

Perú: Desde 1919.

Polonia: Desde 1919.

Portugal: Desde 1919.

Qatar: Desde 1972.

Reino Unido: Desde 1919.

República Democrática Alemana: De 1919 a 1935 (Alemania) y desde 1974.

Rumania: De 1919 a 1942 y desde 1956.

Rwanda: Desde 1962.

San Marino: Desde 1982.

Santa Lucía: Desde 1980.

Santo Tomé y Príncipe: Desde 1982.

Senegal: Desde 1960.

Seychelles: Desde 1977.

Sierra Leona: Desde 1961.

Singapur: Desde 1965.

República Árabe Siria: Desde 1947.

Somalia: Desde 1960.



Sri Lanka: Desde 1948.

Sudán: Desde 1956.

Suecia: Desde 1919.

Suiza: Desde 1919.

Suriname: Desde 1976.

Swazilandia: Desde 1975.

Tailandia: Desde 1919.

Tanzania: Desde 1962.

Togo: Desde 1960.

Trinidad y Tobago: Desde 1963.

Túnez: Desde 1956.

Turquía: Desde 1932.

RSS de Ucrania: Desde 1954.

Uganda: Desde 1963.

URSS: De 1934 a 1940 y desde 1954.

Uruguay: Desde 1919.

Venezuela: De 1919 a 1957 y desde 1958.

Vietnam: De 1950 a 1976 y desde 1980.

Yemen: Desde 1965.

Yemen Democrático: Desde 1969.

Yugoslavia: De 1919 a 1949 y desde 1951.

Zaire: Desde 1960.

Zambia: Desde 1964.

Zimbabwe: Desde 1980.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 10 de septiembre de 1962.— El Secretario general Técnico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

## CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICION, HECHO EN PARIS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1957.

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 21 DE ABRIL DE 1982

(B.O.E. 8 junio 1982)

DON JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

Vistos y examinados los treinta y dos artículos de dicho Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el artículo noventa y cuatro, punto uno, de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes reservas y declaraciones:

### A) Reservas:

— Al artículo 1: "La persona objeto de extradición no podrá ser sometida en el territorio del Estado requirente a un Tribunal de excepción. No se concederá la extradición para ello, ni para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta por Tribunales que tengan este carácter".

— Al artículo 10: "España no concederá la extradición si se hubiere produci-

do la extinción de la responsabilidad criminal por cualquier causa prevista en la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida”.

— Al artículo 21.5: “España sólo concederá el tránsito en las condiciones que para la extradición se precisan en el presente Convenio”.

— Al artículo 23: “España exigirá de la Parte requirente una traducción al español, al francés o al inglés, de la solicitud de extradición y de los documentos aportados con la misma”.

#### B) Declaraciones:

— Al artículo 2.7: “España se atenderá a la regla de la reciprocidad en cuanto a las infracciones excluidas del ámbito de aplicación del presente Convenio, en virtud del artículo 2 del mismo”.

— Al artículo 3: “A los efectos de la extradición, no se considerarán delitos políticos, además de los excluidos en el artículo 3, apartado 3, del Convenio, los delitos de terrorismo”.

— Al artículo 6. 1 b): “A los efectos del presente Convenio, España considerará como nacionales a las personas que ostentan esta condición con arreglo a las normas del Título I del Libro I del Código Civil Español”.

— Al artículo 9: “Se entenderá que la persona ha sido definitivamente sentenciada cuando la resolución judicial no sea susceptible de recurso ordinario alguno, por haberse agotado éstos, por haber sido consentida la resolución o por la propia naturaleza de la misma”.

— Al artículo 11: “Cuando el delito por el cual se pide la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte según las leyes de la Parte requirente, España denegará la extradición, a no ser que la Parte requirente ofrezca garantías, consideradas suficientes por la Parte requerida, de que no se impondrá la pena de muerte o de que si se impone no será ejecutada”.

Dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y dos.—  
Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

#### CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICION

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,  
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es lograr una unión más estrecha entre sus miembros;

Considerando que tal objetivo puede alcanzarse mediante la conclusión de convenios o la adopción de una acción común en la esfera jurídica;

Convencidos de que la aceptación de reglas uniformes en materia de extradición es adecuada para hacer progresar dicha obra de unificación,

Han convenido lo siguiente:

## ARTICULO 1

*Obligación de conceder la extradición*

Las partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y en las condiciones prevenidas en los artículos siguientes, a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad.

## ARTICULO 2

*Hechos que dan lugar a extradición*

1. Darán lugar a la extradición aquellos hechos que las Leyes de la Parte requirente y de la Parte requerida castiguen, bien con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año por lo menos, bien con pena más severa. Cuando en el territorio de la Parte requirente se hubiere pronunciado condena a una pena o se hubiere infligido una medida de seguridad, la sanción impuesta deberá tener una duración de cuatro meses cuando menos.

2. Si la solicitud de extradición se refiere a varios hechos distintos castigados, cada uno de ellos, por la Ley de la Parte requirente y por la Ley de la Parte requerida con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad, pero algunos de tales hechos no cumplieren el requisito relativo a la duración mencionada de la pena, la Parte requerida tendrá la facultad de conceder también la extradición por estos últimos.

3. Toda parte contratante cuya legislación no autorizare la extradición por determinados delitos previstos en el párrafo 1. del presente artículo, podrá, por lo que atañe a dicha Parte, excluir los mismos del ámbito de aplicación del Convenio.

4. Toda parte contratante que quisiere ejercitar la facultad prevista en el párrafo 3. del presente artículo, entregará al Secretario general del Consejo de Europa, en el momento del depósito de su Instrumento de Ratificación o de Adhesión, bien una lista de los delitos por los cuales la extradición queda excluida, con expresión de las disposiciones legales que autoricen o excluyan la extradición. El Secretario General del Consejo remitirá dichas listas a los demás signatarios.

5. Si posteriormente la legislación de una Parte contratante excluyere de la extradición otros delitos, dicha Parte notificará esta exclusión al Secretario general del Consejo, quien informará de la misma a los demás signatarios.

Dicha notificación no surtirá efecto hasta que haya transcurrido un término de tres meses a partir de la fecha de su recepción por el Secretario general.

6. Toda Parte que hubiere hecho uso de la facultad prevista en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, podrá, en todo momento, someter a la aplicación del presente Convenio los delitos que se hubieren excluido del mismo. Dicha Parte notificará tales modificaciones al Secretario general del Consejo, quien las comunicará a los demás signatarios.



## DOCUMENTACION

7. Toda Parte podrá aplicar la regla de la reciprocidad por lo que atañe a las infracciones excluidas del ámbito de aplicación del Convenio en virtud del presente artículo.

### ARTICULO 3

#### *Delitos políticos*

1. No se concederá la extradición si el delito por el cual se solicita es considerado por la Parte requerida como delito político o como hecho conexo con un delito de tal naturaleza.

2. Se aplicará la misma regla si la Parte requerida tuviere razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales consideraciones.

3. Para la aplicación del presente Convenio, no se considerará como delito político, el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

4. La aplicación del presente artículo no afectará a las obligaciones que las Partes hubieren contraído o contrajeren en lo futuro con arreglo a cualquier otro Convenio internacional de carácter multilateral.

### ARTICULO 4

#### *Delitos militares*

Queda excluida del ámbito de aplicación del presente Convenio la extradición por causa de delitos militares que no constituyan delitos de naturaleza común.

### ARTICULO 4

#### *Delito fiscales*

En materia de Tasas e Impuestos, de Aduana y de Cambio, la extradición se concederá, en las condiciones prevenidas en el presente Convenio, tan sólo cuando así se hubiere decidido entre las Partes contratantes para cada delito o categoría de delitos.

### ARTICULO 6

#### *Extradición de nacionales*

1. a) Toda Parte contratante tendrá la facultad de denegar la extradición de sus nacionales.

b) Cada Parte contratante podrá, mediante declaración hecha en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, definir, por lo que respecta a la misma, el término "nacionales" en el sentido del



presente Convenio.

c) La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición. Sin embargo, si dicha cualidad hubiere sido concedida entre la fecha de la decisión y la fecha prevista para la entrega, la Parte requerida podrá también acogerse a lo dispuesto en la letra (a) del presente párrafo.

2. Si la Parte requerida no accediese a la extradición de un nacional, deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente, en su caso, contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito se remitirán gratuitamente por la vía prevenida en el párrafo 1, del artículo 12. Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiera obtenido su solicitud.

#### ARTICULO 7

##### *Lugar de comisión*

1. La Parte requerida podrá denegar la extradición de la persona reclamada por causa de un delito que, según su legislación, se hubiere cometido total o parcialmente en su territorio o en lugar asimilado al mismo.

2. Cuando el delito que motivare la solicitud de extradición se hubiere cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la extradición solamente podrá ser denegada si la legislación de la Parte requerida no autorizare la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de su territorio o no autorizare la extradición por el delito objeto de la solicitud.

#### ARTICULO 8

##### *Actuaciones en curso por los mismos hechos*

La Parte requerida podrá denegar la extradición de la persona reclamada si ésta fuera objeto de persecución por las autoridades competentes de aquélla, a causa del hecho o los hechos motivadores de la solicitud de extradición.

#### ARTICULO 9

##### *"Non bis in idem"*

No se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiera sido definitivamente sentenciada por las autoridades competentes de la Parte requerida, por el hecho o los hechos motivadores de la solicitud de extradición. Podrá ser denegada la extradición si las autoridades competentes de la Parte requerida hubieren decidido no entablar persecución, o poner fin a los procedimientos pendientes por el mismo o los mismos hechos.

#### ARTICULO 10

##### *Prescripción*

No se concederá la extradición si se hubiere producido la prescripción de la



## DOCUMENTACION

acción penal o de la pena, con arreglo a la legislación de la Parte requirente o a la de la Parte requerida.

### ARTICULO 11

#### *Pena capital*

Si el hecho que motivare la solicitud de extradición estuviere castigado con pena capital por la Ley de la Parte requirente y en tal caso, dicha pena no se hallare prevista en la legislación de la Parte requerida, o generalmente no se ejecutarse, podrá no concederse la extradición sino a condición de que la Parte requirente dé seguridades, consideradas suficientes por la Parte requerida, de que la pena capital no será ejecutada.

### ARTICULO 12

#### *Solicitud y documentos anejos*

1. La solicitud se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática. Podrá concertarse otra vía mediante acuerdo directo entre dos o más Partes contratantes.

2. En apoyo de la solicitud, se presentarán:

a) El original o copia auténtica, bien de una decisión ejecutoria de condena, bien de un mandamiento de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza, expedidos en la forma prescrita por la Ley de la Parte requirente.

b) Una exposición de los hechos por los cuales se solicitare la extradición, indicando con la mayor exactitud posible el tiempo y lugar de su perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales que les fueran aplicables; y

c) Una copia de las disposiciones legales aplicables o, si tal cosa no fuera posible, una declaración sobre el derecho aplicable, así como la filiación lo más precisa posible de la persona reclamada, y cualesquiera otros datos que permitan determinar su identidad y nacionalidad.

### ARTICULO 13

#### *Información complementaria*

Si la información proporcionada por la Parte requirente resultare insuficiente para permitir a la Parte requerida tomar una decisión en aplicación del presente Convenio, dicha Parte requerida solicitará la información complementaria necesaria, pudiendo fijar un plazo para la obtención de la misma.

### ARTICULO 14

#### *Principio de especialidad*

1. La persona que hubiere sido entregada no será perseguida, ni sentenciada,





## DOCUMENTACION

ni detenida a fines de ejecución de una pena o medida de seguridad, ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal, por cualquier hecho anterior a la entrega distinto del que hubiera motivado la extradición, excepto en los casos siguientes:

a) Cuando la parte que la hubiese entregado consintiere en ello. A tal efecto, se presentará una solicitud, acompañada de los documentos previstos en el artículo 12 y de un testimonio judicial de la declaración de la persona entregada. Se dará el consentimiento cuando el delito para el cual se solicite hubiere determinado la obligación de proceder a la extradición con arreglo al presente Convenio.

b) Cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte a la cual se efectuó la entrega, no lo hubiere hecho así dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su excarcelación definitiva o hubiere regresado a dicho territorio después de haberlo abandonado.

2. Sin embargo, la Parte requirente podrá tomar las medidas necesarias, de un lado, para una posible expulsión de su territorio y, de otro, para una interrupción de la prescripción con arreglo a su legislación, incluido el procedimiento en rebeldía.

3. Cuando la calificación del hecho imputado se modifique durante el procedimiento, la persona entregada no será perseguida o sentenciada sino en la medida en que los elementos constitutivos de la infracción nuevamente calificada hubieran permitido la extradición.

### ARTICULO 15

#### *Reextradición a un tercer Estado*

Salvo en el caso previsto en el párrafo 1, letra b) del artículo 14, será necesario el consentimiento de la Parte requerida para permitir a la Parte requirente entregar a otra Parte o a un tercer Estado a la persona que le hubiese sido entregada a aquella y que fuere reclamada por la mencionada otra Parte o tercer Estado a causa de delitos anteriores a la entrega. La Parte requerida podrá exigir el envío de los documentos previstos en el párrafo 2, del artículo 12.

### ARTICULO 16

#### *Detención preventiva*

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada; las autoridades competentes de la Parte requerida resolverán acerca de esta solicitud de conformidad a la Ley de esta última Parte.

2. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguno de los documentos previstos en el párrafo 2, letra a), del artículo 12, y notificará la intención de cursar una solicitud de extradición; mencionará asimismo el delito por el cual solicitará la extradición, el tiempo y lugar de la comisión de aquél, y, en la medida de lo posible, la filiación de la persona reclamada.



## DOCUMENTACION

3. La solicitud de detención preventiva se remitirá a las autoridades competentes de la Parte requerida, bien por vía diplomática, bien directamente por vía postal o telegráfica, bien por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), bien por cualquier otro medio que deje constancia escrita o sea admitido por la mencionada Parte. Se informará sin dilación a la autoridad requirente del resultado que haya tenido su solicitud.

4. La detención preventiva podrá concluir si, dentro de los dieciocho días siguientes a la misma, la Parte requerida no hubiere recibido la solicitud de extradición ni los documentos mencionados en el artículo 12; en ningún caso la detención excederá de cuarenta días, contados desde la fecha de la misma. Sin embargo, será posible en cualquier momento la puesta en libertad provisional, pero en tal caso la Parte requerida habrá de tomar las medidas que estimare necesarias para evitar la fuga de la persona reclamada.

5. La puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención, ni tampoco para la extradición si la solicitud de ésta se presentare ulteriormente.

### ARTICULO 17

#### *Concurso de solicitudes de extradición*

Si la extradición fuere solicitada concurrentemente por varios Estados, bien por el mismo hecho, o por hechos diferentes, la Parte requerida resolverá teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente la gravedad relativa y lugar de los delitos, las respectivas fechas de las solicitudes, la nacionalidad de la persona reclamada y la posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.

### ARTICULO 18

#### *Entrega del extradicto*

1. La Parte requerida dará a conocer a la Parte requirente, por la vía prevista en el párrafo 1, del artículo 12, su decisión sobre la extradición.

2. Toda denegación total o parcial será motivada.

3. En caso de aceptación, la Parte requirente será informada del lugar y la fecha de la entrega, así como de la duración de la detención sufrida a fines de extradición por la persona reclamada.

4. A reserva del caso previsto en el párrafo 5 del presente artículo, si la persona reclamada no hubiera sido recibida en la fecha fijada, podrá ser puesta en libertad una vez transcurrido un plazo de quince días a contar de dicha fecha, y será en todo caso puesta en libertad una vez transcurrido un plazo de treinta días pudiendo la Parte requerida denegar la extradición por el mismo hecho.

5. En caso de fuerza mayor que impidiere la entrega o la recepción del extradicto, la Parte interesada informará de ello a la otra Parte; en tal caso, ambas Partes convendrán en una nueva fecha de entrega, y se aplicarán las disposiciones del párrafo 4 del presente artículo.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 19

#### *Entrega aplazada o condicional*

1. La Parte requerida podrá después de haber resuelto la solicitud de extradición, aplazar la entrega de la persona reclamada, a fin de que pueda ser perseguida por ella o, si ya hubiere sido condenada a fin de que pueda cumplir en su territorio de una pena impuesta por un hecho distinto de aquel que hubiere motivado la solicitud de la extradición.

2. En lugar de aplazar la entrega, la Parte requerida podrá entregar temporalmente a la Parte requirente a la persona reclamada en las condiciones que se fijaren de común acuerdo entre las Partes.

### ARTICULO 20

#### *Entrega de objetos*

1. A petición de la Parte requirente, la Parte requerida ocupará y entregará, en la medida en que lo permitiere su legislación, los objetos:

- a) Que pudieren servir de piezas de convicción, o
- b) Que, procediendo de delito, hubieran sido encontrados en el momento de la detención en poder de la persona reclamada, o fueran descubiertos con posterioridad.

2. La entrega de los objetos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo se efectuará incluso en el caso en que la extradición ya concedida no pudiere tener lugar a consecuencia de la muerte o evasión de la persona reclamada.

3. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de embargo o comiso en el territorio de la Parte requerida, esta última podrá a efectos de un proceso penal en curso, conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condición de su restitución.

4. En todo caso quedarán a salvo los derechos que la Parte requerida o terceros hubieran adquirido sobre los citados objetos. Si existieren tales derechos, los objetos serán restituidos lo antes posible y sin gastos de la Parte requerida, una vez terminado el proceso.

### ARTICULO 21

#### *Tránsito*

1. El tránsito a través del territorio de una de las Partes contratantes será concedido previa solicitud dirigida por la vía prevista en el párrafo 1 del artículo 12, a condición de que no se trate de un delito considerado por la Parte requerida para el tránsito como de carácter político o puramente militar, habida cuenta de los artículos 3 y 4 del presente Convenio.

2. El tránsito de un nacional en el sentido del artículo 6, del país requerido para el tránsito, podrá ser denegado.

3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, será nece-



## DOCUMENTACION

saría la presentación de los documentos previstos en el párrafo 2 del artículo 12.

4. En el caso de que se utilizare la vía aérea, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Cuando no estuviere previsto aterrizar alguno, la Parte requirente avisará a la Parte cuyo territorio haya de ser sobrevolado y certificará la existencia de algunos de los documentos previstos en el párrafo 2, letra a), del artículo 12. En caso de aterrizaje fortuito esta notificación surtirá los efectos de la solicitud de detención preventiva regulada en el artículo 16, y la Parte requirente presentará una solicitud formal de tránsito.

b) Cuando estuviere previsto el aterrizaje, la Parte requirente presentará una solicitud formal de tránsito.

5. No obstante, una de las Partes podrá declarar en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de Ratificación o de Adhesión, que no concederá el tránsito de una persona más que en las mismas condiciones que la extradición o algunas de ellas. En este caso podrá aplicarse el principio de reciprocidad.

6. El tránsito de la persona entregada no se efectuará a través de un territorio en el que hubiere motivo para creer que su vida o su libertad podrían verse amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

### ARTICULO 22

#### *Procedimiento*

Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la Ley de la Parte requerida es la única aplicable al procedimiento de extradición, así como al de la detención preventiva.

### ARTICULO 23

#### *Lenguas*

Los documentos que se presenten estarán redactados en la lengua de la Parte requirente o de la Parte requerida. Esta última podrá exigir una traducción en la lengua oficial del Consejo de Europa que eligiere.

### ARTICULO 24

#### *Gastos*

1. Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán de cargo de ésta.

2. Los gastos ocasionados por el tránsito a través del territorio de la parte requerida para el tránsito serán de cargo de la Parte requirente.

3. En caso de extradición procedente de un territorio no metropolitano de la parte requerida, los gastos ocasionados por el transporte entre este territorio, y el territorio metropolitano de la parte requirente serán de cargo de esta última. Regirá la misma norma con respecto a los gastos ocasionados por el



## DOCUMENTACION

transporte entre el territorio no metropolitano de la Parte requerida y el territorio metropolitano de ésta.

### ARTICULO 25

#### *Definición de "medidas de seguridad"*

A efectos del presente Convenio, la expresión "medidas de seguridad" designará cualquier medida de privación de libertad que hubiere sido impuesta como complemento o en sustitución de una pena, por sentencia de un Organismo judicial penal.

### ARTICULO 26

#### *Reservas*

1. Toda Parte contratante podrá, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de Ratificación o Adhesión, formular alguna reserva con respecto a una o varias disposiciones determinadas del Convenio.

2. Toda Parte Contratante que hubiere formulado alguna reserva la retirará tan pronto como lo permitieren las circunstancias. La retirada de reservas se hará por notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa.

3. La Parte contratante que hubiere formulado alguna reserva con respecto a una disposición del Convenio no podrá pretender la aplicación de dicha disposición por otra Parte más que en la medida en que ella misma la hubiere aceptado.

### ARTICULO 27

#### *Ambito de aplicación territorial*

1. El presente Convenio se aplicará a los territorios metropolitanos de las Partes contratantes.

2. Se aplicará igualmente, en lo que concierne a Francia, a Argelia y a los departamentos de Ultramar; y en lo que concierne al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a las islas Anglonormandas y a la isla de Man.

3. La República Federal de Alemania podrá extender la aplicación del presente Convenio al Land de Berlín, por medio de declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. Este notificará dicha declaración a las demás Partes.

4. Por acuerdo directo entre dos o varias Partes Contratantes, podrá ampliarse el ámbito de aplicación del presente Convenio en las condiciones que se estipularen en el Acuerdo, a cualquier territorio de alguna de las Partes distinto de los mencionados en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo y cuyas relaciones internacionales tuviere a su cargo una de las Partes.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 28

#### *Relaciones entre el presente Convenio y los acuerdos bilaterales*

1. El presente Convenio abroga, en lo que concierne a los territorios en los cuales se aplica, las disposiciones de los Tratados, Convenios o Acuerdos bilaterales que regulen la materia de la extradición entre dos Partes contratantes.

2. Las Partes contratantes no podrán concluir entre ellas Acuerdos bilaterales o multilaterales, mas que para completar las disposiciones del presente Convenio o para facilitar la aplicación de los principios contenidos en éste.

3. Cuando entre dos o varias Partes contratantes se practicare la extradición sobre la base de una legislación uniforme, las Partes tendrán la facultad de regular sus relaciones mutuas en materia de extradición fundándose exclusivamente en dicho sistema, no obstante las disposiciones del presente Convenio. El mismo principio será aplicable entre dos o varias Partes contratantes, cada una de las cuales tuviere en vigor una Ley que previere la ejecución en su territorio de los mandamientos de detención librados en el territorio de la otra o de las otras. Las Partes contratantes que excluyan o excluyeren de sus relaciones mutuas la aplicación del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, deberán remitir una notificación a este efecto al Secretario general del Consejo de Europa. Esta comunicará a las demás Partes contratantes toda notificación recibida en virtud del presente párrafo.

### ARTICULO 29

#### *Firma, ratificación, entrada en vigor*

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado y los Instrumentos de Ratificación serán depositados en poder del Secretario general del Consejo.

2. El Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha del depósito del tercer Instrumento de Ratificación.

3. El mismo entrará en vigor, con respecto a cualquier signatario que lo ratifique con posterioridad, noventa días después del depósito de su Instrumento de Ratificación.

### ARTICULO 30

#### *Adhesión*

1. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo a adherirse al presente Convenio. El Acuerdo concerniente a esta invitación deberá ser objeto de la aprobación unánime de los miembros del Consejo que hubieren ratificado el Convenio.

2. La adhesión se efectuará por medio del depósito en poder del Secretario general del Consejo, de un Instrumento de Adhesión que surtirá efectos noventa días después de su depósito.



## DOCUMENTACION

### ARTICULO 31

#### *Denuncia*

Cualquier Parte contratante podrá, en lo que le concierne, denunciar el presente Convenio dirigiendo una notificación al Secretario general del Consejo de Europa. Esta denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de su notificación por el Secretario general del Consejo.

### ARTICULO 32

#### *Notificaciones*

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los miembros del Consejo y al Gobierno de todo Estado que se hubiere adherido al presente Convenio:

- a) El depósito de todo Instrumento de Ratificación o de Adhesión.
- b) La fecha de entrada en vigor.
- c) Toda declaración hecha en aplicación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6 y del párrafo 5 del artículo 21.
- d) Toda reserva formulada en aplicación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 26.
- e) La retirada de toda reserva efectuada en aplicación de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 26.
- f) Toda notificación de denuncia recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 31 del presente Convenio y la fecha en que ésta surtiere efecto.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en París a 13 de diciembre de 1957, en francés y en inglés, haciendo fe igualmente ambos textos en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo enviará copia fehaciente del mismo a los Gobiernos signatarios.

#### ESTADOS PARTE

1. Alemania, República Federal: 2 de octubre de 1976 (R) y 1 de enero de 1977 (EV).
2. Austria: 21 de mayo de 1969 (R) y 19 de agosto de 1969 (EV).
3. Chipre: 22 de enero de 1971 (R) y 22 de abril de 1971 (EV).
4. Dinamarca: 13 de septiembre de 1962 (R) y 12 de diciembre de 1962 (EV).
5. Finlandia: 12 de mayo de 1971 (AD) y 11 de agosto de 1971 (EV).
6. Grecia: 29 de mayo de 1961 (R) y 27 de agosto de 1969 (EV).
7. Irlanda: 2 de mayo de 1968 (R) y 1 de agosto de 1966 (EV).
8. Israel: 27 de septiembre de 1967 (AD) y 26 de diciembre de 1967 (EV).
9. Italia: 6 de agosto de 1963 (R) y 4 de noviembre de 1963 (EV).

— (R): Ratificación; (AD): Adhesión; (EV): Entrada en vigor.



10. Liechtenstein: 28 de octubre de 1969 (AD) y 28 de enero de 1970 (EV).
11. Luxemburgo: 18 de noviembre de 1976 (R) y 16 de febrero de 1977 (EV).
12. Países Bajos: 14 de febrero de 1969 (R) y 15 de mayo de 1969 (EV).
13. Noruega: 19 de enero de 1960 (R) y 18 de abril de 1969 (EV).
14. Suecia: 22 de enero de 1959 (R) y 18 de abril de 1960 (EV).
15. Suiza: 20 de diciembre de 1966 (R) y 20 de marzo de 1967 (EV).
16. Turquía: 7 de enero de 1960 (R) y 18 de abril de 1960 (EV).

## DECLARACIONES Y RESERVAS DE LOS ESTADOS PARTE

### 1. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Art. 6: La extradición de nacionales alemanes está prohibida por el artículo 16,2, de la Ley Fundamental de la R.F.A.

El término "nacional" abarca, en el sentido del artículo 8, 1,b) del Convenio, a todos los alemanes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Fundamental.

Art. 21: En caso de tránsito, se aplicará "mutatis mutandis" el artículo 11 del Convenio.

Art. 21, 2: El tránsito de un nacional alemán a través del territorio de la F.A. está prohibido por el artículo 16, 2, de la Ley Fundamental.

Art. 21, 4, a): Cuando el tránsito se efectúe por vía aérea a través del territorio de la R.F.A., sin escala prevista, las autoridades alemanas exigirán prueba documental del Estado requirente y, según los documentos en su posesión, de que la persona extraditada no es un nacional alemán ni pretende serlo.

Art. 23: Si la solicitud de extradición y los documentos anejos no están en idioma alemán, deberá acompañarse una traducción al alemán o a una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa.

Art. 27,3: El Convenio europeo de extradición se aplicará también al Land de Berlín a partir de la fecha de su entrada en vigor en la R.F.A.; sin embargo una solicitud de extradición fuera del Land de Berlín para un nacional francés, inglés o estadounidense no será ejecutada sin el previo consentimiento del Comandante del Sector implicado.

El Representante Permanente ha declarado, en nombre de su Gobierno, que el Convenio Europeo de Extradición se aplicará al Land de Berlín desde la fecha en que entre en vigor para la República Federal de Alemania.

### 2. AUSTRIA

#### A) Declaraciones

Al párrafo 2 del artículo 2: Austria concederá la extradición igualmente en las condiciones del artículo 2, párrafo 2.

Al artículo 6, 1, c): En cuanto a la apreciación de la cualidad de nacional, Austria considerará como decisivo el momento de la entrega del individuo reclamado.



A los artículos 7 y 8: Austria no concederá la extradición de una persona por una infracción en la que según la Ley austríaca sean competentes los Tribunales austríacos, mas que en aquellos casos en los que esa persona sea extraditada a causa de otra infracción y que su procesamiento por las autoridades judiciales del Estado requirente, por todas las infracciones, vaya en el interés del descubrimiento de la verdad o sea oportuno por razones atinentes a la fijación de la pena y a su ejecución.

Al artículo 9: Austria concederá la extradición cuando el individuo reclamado haya sido absuelto en base a la incompetencia de la jurisdicción austríaca o cuando, únicamente por la misma razón, ninguna acción haya sido iniciada contra él o se haya desistido de acciones ya emprendidas.

Al artículo 16,2: En el caso de una solicitud de detención preventiva, Austria solicitará también una breve memoria de los hechos imputados a la persona reclamada.

Al artículo 21, 2: Austria denegará, en todos los casos, el tránsito de nacionales austríacos.

Al artículo 21, 5: Austria denegará igualmente el tránsito por infracciones fiscales, en el sentido del artículo 5 del Convenio, así como por las infracciones citadas en la reserva al artículo 5. El tránsito para las infracciones que, según la Ley del Estado requirente, estén penadas con la pena de muerte o con otra incompatible con los postulados de humanidad y dignidad humana, será concedido en las condiciones que regulan la extradición para dichas infracciones.

## B) Reservas

Al artículo 1: Austria no concederá la extradición cuando la persona reclamada haya de comparecer ante un Tribunal de excepción o cuando la extradición haya de servir a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad o de reeducación impuestas por dicho Tribunal.

Al artículo 5: Austria concederá también la extradición, pero sólo en las condiciones previstas en el artículo 5, por infracciones que constituyan exclusivamente violación de los reglamentos sobre monopolios o sobre exportación, importación, tránsito y racionamiento de mercancías.

Al artículo 11: Austria denegará la extradición que conlleve la ejecución de una pena de muerte. La extradición a los fines de acciones relativas a una infracción susceptible de ser castigada con pena de muerte según la Ley del Estado requirente no será concedida más que en el caso de que este Estado no aplique la pena de muerte. Austria aplicará el mismo principio en los casos de penas incompatibles con los postulados de humanidad y dignidad humana.

## 3. CHIPRE

Art. 1: El artículo 11, 2, f), de la Constitución chipriota prohíbe la extradición de nacionales. Por tanto, las disposiciones del artículo 1 del Convenio se limitan, para la República de Chipre, a la extradición de extranjeros.

Art. 6: Dado que la extradición de nacionales no está autorizada por la Constitución, el término "nacionales" empleado por el Convenio designa, en cuanto concierne a Chipre "a los ciudadanos de la República de Chipre o a las personas que, en virtud de las disposiciones aplicables en materia de nacionalidad, podrían adquirir la condición de ciudadanos de la República".

Además, según el Código Penal chipriota, los nacionales de la República pueden ser perseguidos en Chipre por un delito castigado con la pena capital o con una pena de prisión de más de dos años y cometido en el extranjero, si el acto o la omisión que constituyen el delito están también legalmente penados por la ley del país donde se cometió la infracción.

Art. 11: Según el Código Penal chipriota, cuando un ciudadano de Chipre comete en un país extranjero un delito castigado con la pena capital por la Ley chipriota, pero no por la ley del país extranjero, la pena de muerte no puede ser aplicada en Chipre, pero el autor de tal delito puede ser castigado con cualquier otra pena, incluida la reclusión a perpetuidad.

Art. 21, 2: A esta disposición se aplica lo expresado respecto a los artículos 1 y 6.

#### 4. DINAMARCA

##### A) Reservas

Al artículo 1: La extradición será concedida siempre y cuando el acusado no haya de comparecer ante un Tribunal de excepción. Para la ejecución de una pena pronunciada por tal Tribunal, se denegará igualmente la extradición.

Se denegará igualmente si conlleva consecuencias particularmente graves para la persona reclamada, en razón, especialmente, de su edad, su estado de salud u otras razones de índole personal.

Al artículo 1 en relación con el artículo 9: La extradición puede ser denegada si las autoridades competentes de un tercer Estado han condenado o absuelto definitivamente a la persona objeto de la solicitud de extradición o si las autoridades competentes de un tercer Estado han decidido no incoar acción alguna o desistir en la iniciada por el mismo delito.

Al artículo 2, 1: La obligación de extraditar se limita a las infracciones que, según el Código Penal danés, pueden comportar una pena de prisión de más de un año y la detención simple.

Al artículo 3, 3: La cuestión de saber si el atentado o la tentativa de atentado contra la vida de un Jefe de Estado o un miembro de su familia ha de ser considerado como delito político se dilucidará según el caso concreto,

Al artículo 4: La extradición por un delito militar que conlleve al mismo tiempo un "delito civil" no podrá concederse más que si el extraditado no ha de ser condenado según el Código Militar.

Al artículo 12: Cuando así lo indiquen las circunstancias particulares, las autoridades danesas pueden exigir del Estado requirente la aportación de pruebas que establezcan una presunción suficiente de culpabilidad hacia la persona en



cuestión. Si las pruebas se consideran insuficientes, podrá denegarse la extradición.

#### B) Declaraciones

Al artículo 6: El término "nacionales" se refiere en Dinamarca a los nacionales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia así como a las personas domiciliadas en esos países.

Al artículo 28.3: El Convenio no se aplica a las relaciones de Dinamarca con Suecia y Noruega por cuanto la extradición entre estos países escandinavos opera sobre la base de una legislación uniforme.

### 5. FINLANDIA

#### A) Declaraciones

Al artículo 6: El término "nacionales" en el sentido del Convenio se refiere a los nacionales de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, así como a los extranjeros domiciliados en esos Estados.

Al artículo 28.3: Respecto a la extradición por delitos, el Convenio no se aplica entre Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, ya que la extradición entre estos países opera sobre la base de una legislación uniforme.

#### B) Reservas

Al artículo 1: Al conceder la extradición, Finlandia se reserva el derecho de estipular que el extraditado no puede comparecer por la infracción en cuestión ante un Tribunal competente sólo provisionalmente o en circunstancias excepcionales para juzgar a tales infracciones. La extradición pedida con vistas a ejecutar la sentencia de un Tribunal especial de este tipo puede ser denegada. Finlandia se reserva asimismo el derecho a denegar la extradición en el caso de que no fuera humanitariamente razonable en razón de la edad, estado de salud u otra condición de la persona reclamada, o en razón de circunstancias particulares.

Al artículo 2, 1: La obligación de extraditar mencionada en el primer párrafo de este artículo se limitará a los delitos que según la ley finlandesa comporten una pena superior a un año de prisión. Una persona condenada en un Estado extranjero por un delito de tal naturaleza no podrá ser extraditado más que si la pena aún no ejecutada es la de privación de libertad por un período mínimo de cuatro meses.

Al artículo 3,3: Finlandia se reserva el derecho de considerar el delito mencionado en el párrafo 3 de este artículo como un delito político, si se ha cometido en el curso de lucha abierta.

Al artículo 4: Si el delito militar conlleva igualmente un delito en base al cual se autoriza normalmente la extradición, Finlandia se reserva el derecho de estipular que el extraditado no podrá ser condenado en virtud de una disposición relativa a delitos militares.

Al artículo 18: Si el detenido cuya extradición se ha concedido no ha sido recibido por el Estado requirente en la fecha fijada, Finlandia se reserva el dere-

cho de ponerlo en libertad inmediatamente.

## 6. GRECIA

### A) Reservas

Al artículo 6: Las disposiciones del artículo 6 se aplicarán bajo la reserva de la aplicación del artículo 438, a), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal griego, que prohíbe la extradición de nacionales del Estado requerido.

En relación con el artículo 6, 1, c), del Convenio, será igualmente aplicado el artículo 438 de la citada ley. Según este artículo, la fecha de comisión de la infracción no podrá ser tomada en cuenta para establecer la nacionalidad de la persona reclamada.

Al artículo 7: El párrafo será aplicado bajo reserva de las disposiciones del artículo 438, b), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal griega.

Al artículo 11: Se aplicará, en su lugar, el artículo 437, 1, del citado cuerpo legal, que dispone que la extradición de un extranjero por un delito penado con la pena capital, conforme a la ley del estado requirente, se permite sólo en los casos en que la misma pena esté prevista para ese delito por la ley griega.

Al artículo 18: Se acepta la última parte del párrafo 4 de este artículo, pero añadiendo lo que dispone el artículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal griega "a condición de que la nueva solicitud se base en los mismos elementos".

Al artículo 19: Este artículo se acepta a reserva de lo dispuesto en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal griega.

## 7. IRLANDA

Art. 6: El término "nacional" se refiere a "nacionales de Irlanda".

Art. 9: Las autoridades irlandesas no concederán la extradición si sobre la persona reclamada ha recaído ya una sentencia firme, en un tercer Estado, por el hecho en base al cual se solicita la extradición.

## 8. ISRAEL

### A) Declaraciones

Al artículo 21: Israel no concederá el tránsito de un individuo más que en el supuesto en que, si el Estado requirente solicitare la extradición de Israel del individuo reclamado, no hubiera obstáculo legal a que dicho individuo fuera susceptible de extradición y fuera extraditado.

Al artículo 22: Serán admitidas como pruebas válidas en el procedimiento de examen de la petición de extradición las declaraciones escritas y las orales, realizadas o no bajo juramento, las copias certificadas de dichas declaraciones, el mandato de arresto y los demás documentos legales que establezcan la existencia de la condena, si están firmados por un Juez o un funcionario del Estado requirente o si vienen certificadas por éstos o si están legalizados con el sello del Ministerio de Justicia.

**B) Reservas**

A los artículos 2 y 4: Israel no concederá la extradición de una persona más que si ésta está acusada o ha sido condenada en el Estado requirente en base a un hecho que, de haber sido cometido en Israel, constituya uno de los siguientes delitos:

a) Toda infracción que sea castigada con la pena de muerte o con prisión de más de tres años (incluso si la pena es menos grave cuando la condena ha sido impuesta por un Tribunal de instancia), excepto;

1. Un delito por el cual un individuo no puede ser inculpado, mas que si en el momento de su realización, es soldado en los términos de la Ley de Justicia Militar 5715/1955.

2. Los delitos comprendidos en el artículo 85 de la Ley de 1936 estableciendo el Código Penal (el hecho de impedir por la fuerza o dificultar la llamada o la presencia de un agente de policía en caso de aglomeración sediciosa o motín) o en la Ley 5719/1959, relativa a las modificaciones de las disposiciones de Derecho Penal sobre bigamia.

3. Los delitos previstos en la Ley 5712/1952, modificando las disposiciones del Derecho Penal, o en una de las leyes enumeradas en el anexo de la Ley 5711/1951.

b) Un delito castigado con pena menos grave que las reseñadas más arriba y previsto en la Ley 5712/1952 (corrupción), o en cualquiera de los siguientes artículos de la Ley de 1936, que promulga el Código Penal: 88, 109 B, 110, 115, 120-122, 124, 140, 146, 156, 158, 169, 161 a), 185, 186, 195, 218, 242, 250, 261, 262, 270, 304 b) y c), 305, 310, 350, 359, 360, 363-366, o en la Ley 5723/1963.

Al artículo 2: Israel no concederá la extradición de un individuo acusado de un delito, mas que si prueba ante un Tribunal israelí que existen pruebas que serían suficientes para juzgarlo en Israel por un delito parecido.

Al artículo 9: Israel no concederá la extradición si la persona reclamada ha sido perdonada o se le ha condonado la pena en el Estado requirente, por dicho delito.

Al artículo 14: Israel no concederá la extradición por no aplicación de la regla de la especialidad, salvo:

a) Si el individuo reclamado ha sido declarado "in absentia" sujeto a la extradición también por otro hecho, tras haber tenido la oportunidad de estar representado en el procedimiento incoado a esa declaración.

b) Bajo la condición de que el individuo reclamado no será ni juzgado ni condenado ni detenido con vistas a ejecutar una sentencia, a menos que, habiendo abandonado el territorio del Estado requirente tras su extradición, vuelva al mismo voluntariamente o que, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, no haya abandonado el territorio del Estado requirente dentro de los sesenta días siguientes.

Al artículo 15: El artículo 15 se interpretará como si en el artículo 14, b), la expresión "dentro de los sesenta días" sustituyera a la expresión "dentro de los cuarenta y cinco días".



## DOCUMENTACION

### 9. ITALIA

Italia formula la reserva expresa de que no concederá la extradición de personas reclamadas para la ejecución de medidas de seguridad, a menos:

- a) Que no se reúnan, en cada caso, los criterios definidos en el artículo 25.
- b) Que dichas medidas no estén expresamente previstas por disposiciones penales del Estado requirente como consecuencias necesarias de una infracción.

Italia declara que no concederá la extradición por infracciones castigadas con la pena capital por la Ley del Estado requirente.

### 10. LIECHTENSTEIN

Al artículo 1: El Principado sólo concede la extradición a condición de que la persona reclamada sea juzgada por los Tribunales ordinarios del Estado requirente y exigirá garantías suficientes a este respecto.

Al artículo 6, 1, a): El Gobierno del Principado declara que su derecho interno no admite la extradición de nacionales. A partir del momento en que han entrado en su territorio, las autoridades judiciales del Principado serán competentes y aplicarán el derecho penal local (artículo 36 del Código Penal) a las infracciones cometidas en el extranjero, cualesquiera que sean las leyes del lugar de comisión. En el sentido del Convenio, se considera "nacional" a cualquiera que posea la nacionalidad del Principado.

Al artículo 11: El Principado se reserva la facultad de aplicar el artículo 11 por analogía cuando el Estado requirente no garantice suficientemente que no impondrá pena o medida alguna extraña al derecho del Principado o que afecten a la integridad corporal de una manera incompatible con el mismo.

Al artículo 21: El Principado se reserva la facultad de denegar el tránsito a través de su territorio incluso en el caso de que la infracción de que se acusa a la persona reclamada esté prevista en el artículo 5 del Convenio.

Al artículo 23: El Principado exigirá que las solicitudes y documentos, redactados en idiomas distintos del alemán, vengan acompañadas de una traducción a este idioma.

### 11. LUXEMBURGO

#### A) Reservas

Al artículo 1: El Gobierno del Gran Ducado se reserva la facultad de no conceder la extradición que se solicite para la ejecución de una sentencia edictada en rebeldía contra la que no exista recurso alguno, si dicha extradición pudiera tener por efecto hacer sufrir una pena a la persona reclamada, sin que ésta haya podido estar en condiciones de ejercer los derechos de la defensa contemplados en el artículo 6, 3, c), del convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El Gobierno del Gran Ducado se reserva la facultad de denegar la extradición por razones humanitarias, si las condiciones fueran particularmente graves, para la persona reclamada, por razón de su juventud, su avanzada edad o su esta-



do de salud.

Al artículo 6 y 21: El Gobierno del Gran Ducado no concederá ni la extradición ni el tránsito de sus nacionales.

Al artículo 7: El Gobierno del Gran Ducado se reserva la facultad de no conceder la extradición cuando, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7, el Estado requirente estuviera autorizado a denegar la extradición en casos parecidos.

Al artículo 9: El Gobierno del Gran Ducado no concederá la extradición si le consta que la persona reclamada, por lo que respecta a la infracción por la cual se pide su extradición, ha sido definitivamente juzgada por las autoridades competentes de un tercer Estado y si, en el caso de haber sido condenada por ello, el condenado está cumpliendo su pena, la ha cumplido ya o ha sido eximido de cumplirla.

Al artículo 28: Por razón del régimen particular existente entre los países del Benelux, el Gobierno del Gran Ducado no se adhiere al artículo 28, párrafos primero y segundo, en lo que se refiere a sus relaciones con los Países Bajos y Bélgica.

El Gobierno del Gran Ducado se reserva la facultad de derogar estas disposiciones en lo que respecta a sus relaciones con los otros países miembros de la Comunidad Económica Europea.

#### B) Declaraciones

Al artículo 6, 1, b): El Gobierno del Gran Ducado declara que en lo que se refiere al Gran Ducado de Luxemburgo hay que entender como "nacionales" en el sentido del presente Convenio, a aquellas personas que poseen la nacionalidad luxemburguesa, así como los extranjeros que se han integrado en la comunidad luxemburguesa, en tanto en cuanto puedan ser perseguidos en Luxemburgo por el hecho en base al cual se pide la extradición.

Al artículo 19: El Gobierno del Gran Ducado no concederá la extradición temporal prevista en el artículo 19, 2, excepto la de una persona que está cumpliendo condena en su territorio y en el caso de que venga exigida por circunstancias especiales.

Al artículo 21, 5: El Gobierno del Gran Ducado se reserva el derecho de no conceder el tránsito, salvo en las mismas condiciones en que concede la extradición.

### 12. PAISES BAJOS

1. Dada la igualdad que existe desde el punto de vista del Derecho público entre los Países Bajos, Surinán y las Antillas neerlandesas, el término "territorios metropolitanos" utilizado en el párrafo 1 del artículo 27 del presente Convenio pierde su significado original en lo que respecta al Reino de los Países Bajos, y en consecuencia, y por lo que se refiere al Reino, se considerará que significa "territorio de Europa".



### A) Reservas

Al artículo 1: El Gobierno del Reino se reserva la facultad de denegar la extradición pedida a fin de ejecutar una sentencia dictada en rebeldía contra la cual no haya ya ningún recuerdo posible, si dicha extradición pudiera tener como consecuencia hacer sufrir una pena a la persona reclamada, sin que ésta haya tenido la posibilidad de ejercer los derechos de defensa establecidos en el párrafo 2, c), del artículo 6 del Convenio, para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

El Gobierno del Reino se reserva la facultad de denegar la extradición por razones humanitarias si las consecuencias fueran particularmente severas para la persona reclamada en razón de su juventud, su edad avanzada o su estado de salud.

Al artículo 7: El Gobierno del Reino se reserva la facultad de no conceder la extradición cuando, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7, el Estado requirente estuviera autorizado a denegar la extradición en casos parecidos.

Al artículo 9: El Gobierno del Reino no concederá la extradición si le consta que la persona reclamada ha sido definitivamente juzgada por las autoridades competentes de un tercer Estado en lo que respecta a la infracción por la que se le pide la extradición, y que, en el supuesto de condena por tal hecho, el condenado está cumpliendo su pena, la ha cumplido ya o ha sido eximido de cumplirla.

Al artículo 28: Por razón del régimen particular existente entre los países del Benelux, el Gobierno del Reino no acepta los párrafos 1 y 2 del artículo 28, en lo suq ese refiere a sus relaciones con el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

El Gobierno del Reino se reserva la facultad de derogar estas disposiciones en lo referente a sus relaciones con los otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.

### B) Declaraciones

A los artículos 6 y 21: El Gobierno del Reino no concederá la extradición ni el tránsito de sus nacionales. Por lo que se refiere a los Países Bajos, hay que entender como "nacionales", en el sentido del presente Convenio a aquellas personas que poseen la nacionalidad neerlandesa, así como a los extranjeros que se han integrado en la Comunidad neerlandesa, en tanto en cuanto puedan ser perseguidos en los Países Bajos por el hecho en base al cual se pide la extradición.

Al artículo 19: El Gobierno del Reino no concederá la extradición temporal, regulada en el artículo 19, 2, mas que cuando se trate de una persona que sufre una condena en su territorio y si lo exigen circunstancias particulares.

Al párrafo 5 del artículo 21: El Gobierno del Reino se reserva la facultad de no conceder el tránsito mas que en las mismas condiciones que la extradición.

## 13. NORUEGA

Al artículo 1: La extradición puede denegarse en base a consideraciones



humanitarias si la entrega pudiera tener consecuencias de extrema gravedad para el individuo reclamado, en razón especialmente, de su edad, estado de salud u otras razones de orden personal.

Al artículo 2, 1: De acuerdo con el párrafo 3 de la Ley noruega número 39, de 13 de junio de 1975, sobre extradición de los delincuentes, Noruega no puede conceder la extradición más que por causa de una infracción, o infracción equivalente que, según la Ley noruega, esté castigada o hubiera estado castigada con pena de prisión superior a un año.

Al artículo 3, 3: Noruega se reserva el derecho de considerar, según las circunstancias del supuesto en cuestión, la infracción mencionada en el párrafo 3 del artículo 3 como delito político.

Al artículo 4: Si el delito militar conlleva igualmente una infracción en base a la cual se autoriza normalmente la extradición, Noruega se reserva el derecho de estipular que el extraditado no podrá ser condenado en aplicación de la Ley militar del Estado requirente.

Al artículo 6, 1m b): Por lo que respecta a Noruega, el término "nacionales" se refiere tanto a los nacionales como a las personas que residen en Noruega. Se aplica asimismo a los nacionales de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia, y a las personas residentes en estos países, a menos que uno de estos Estados pida la extradición.

Al artículo 12: Las autoridades noruegas se reservan el derecho de exigir de la Parte requirente la aportación de pruebas que establezcan una presunción suficiente de que el individuo reclamado ha cometido la infracción en base a la cual se pide la extradición. La petición puede ser rechazada si las pruebas parecen insuficientes.

Al artículo 28, 3: El presente Convenio no se aplica a la extradición hacia Dinamarca, Finlandia o Suecia, ya que la extradición entre estos Estados opera sobre la base de una legislación uniforme.

#### 14. SUECIA

##### A) Declaraciones

Al artículo 6: El término "nacionales" en el sentido del presente Convenio, se refiere, además de los súbditos suecos, a los extranjeros domiciliados en Suecia, los nacionales de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega, así como los extranjeros domiciliados en estos Estados.

Al artículo 21: No se concederá el tránsito pedido mas que en las mismas condiciones que la extradición, tomando en cuenta las circunstancias del caso particular.

##### B) Reservas

Al artículo 1: Al conceder la extradición, Suecia se reserva el derecho de estipular que el extraditado no podrá ser llamado a comparecer ante un Tribunal competente para juzgar la infracción de que se trate sólo provisionalmente o en

circunstancias particulares excepcionales, así como de denegar la extradición a efectos de ejecutar una sentencia pronunciada por tal Tribunal de excepción.

Suecia se reserva el derecho de denegar la extradición en casos particulares, si dicha medida es manifiestamente incompatible con los derechos humanitarios; en razón de la edad, el estado de salud o de toda otra condición de la persona objeto de aquélla, teniendo en cuenta asimismo la naturaleza de la infracción y los intereses del estado requirente.

Al artículo 2: La extradición de un individuo que todavía no ha sido juzgado definitivamente por el hecho en base al cual se pide la extradición no se concederá mas que si tal hecho corresponde a un delito por el que la ley sueca impone pena de prisión superior a un año.

Al artículo 3: Suecia se reserva el derecho de considerar como delito político, según las circunstancias del caso en cuestión, la infracción mencionada en el párrafo 3 del presente artículo.

Al artículo 4: Si el delito militar conlleva igualmente una infracción en virtud de la cual se ha concedido la extradición, Suecia se reserva el derecho de estipular que el extraditado no podrá sufrir una pena impuesta en aplicación de disposiciones relativas a las infracciones cometidas por los militares.

Al artículo 12: Aunque la sentencia pronunciada o el mandato de detención dictado por un Tribunal o un Juez en un Estado parte en el Convenio sean generalmente aceptados, Suecia se reserva el derecho de denegar la extradición pedida, si del examen del caso en cuestión resulta que la sentencia o el mandato de detención sean manifiestamente infundados.

Al artículo 18: Si el individuo cuya extradición se ha concedido no ha sido recibido en la fecha fijada por el Estado requirente, Suecia se reserva el derecho de anular inmediatamente la medida de privación de libertad a la que estaba sometido.

## 15. SUIZA

Al artículo 1: El Consejo Federal declara que toda extradición concedida por Suiza está sometida a la condición de que la persona reclamada no haya de comparecer ante un Tribunal de excepción. En consecuencia, se reserva el derecho de denegar la extradición:

a) Si existe la posibilidad de que la persona reclamada en caso de extradición haya de comparecer ante un Tribunal de excepción y si el Estado requirente no da seguridades que se estimen suficientes de que la sentencia será pronunciada por un Tribunal al cual las reglas de la organización judicial atribuyen de una manera general la competencia en materia penal;

b) Si la extradición debe servir a la ejecución de una pena pronunciada por un Tribunal de excepción.

Al artículo 2, 1: Dadas las condiciones establecidas en Derecho suizo para la extradición, Suiza se reserva el derecho de denegar la extradición cuando el hecho que se imputa a la persona reclamada no reúne los elementos constitutivos de una de las infracciones definidas en la lista depositada en la Secretaría del

Consejo de Europa, como anejo a esta declaración.

Al artículo 2,2: El Consejo Federal declara que la reserva hecha al artículo 2,1, no impide que Suiza, cuando una extradición se concede o se ha concedido por un crimen o un delito en razón del cual aquélla está autorizada por la ley suiza amplíe sus efectos a todo otro hecho que sea castigado por una disposición de Derecho común suizo.

Al artículo 3, 3: Derogando el artículo , párrafo 3, del Convenio, Suiza se reserva el derecho de denegar también la extradición fundándose en el artículo 3, párrafo 1, cuando ésta se pide por atentado a la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

Al artículo 6: El Consejo Federal declara que el Derecho suizo no permite la extradición de nacionales suizos. Las infracciones cometidas fuera de Suiza y castigadas según la ley suiza como crímenes o delitos pueden ser perseguidas y juzgadas por las autoridades suizas si se cumplen las condiciones legales.

— Cuando han sido cometidas contra nacionales suizos (artículo 5 del Código Penal suizo);

— Cuando pueden dar lugar a la extradición según el Derecho suizo y han sido cometidas por un nacional suizo (artículo 6 del Código Penal suizo, artículo 16 de la Ley Federal de 14 de marzo de 1958 sobre responsabilidad de la Confederación, de los miembros de sus órganos y de sus funcionarios);

— Cuando han sido cometidas a bordo de un buque o una aeronave suizos (artículo 4 de la Ley Federal de 23 de septiembre de 1953 sobre la navegación marítima bajo pabellón suizo; artículo 97 de la Ley Federal de 21 de diciembre de 1948 sobre la navegación aérea).

A los artículos 7 y 8: El Consejo Federal declara que, de acuerdo con la regulación vigente en Derecho suizo, la extradición no puede concederse por una infracción cometida en territorio suizo o en un lugar asimilado a ese territorio mas que en aplicación del artículo 2, párrafo 2, es decir cuando la persona reclamada es extraditada de todos modos al Estado requirente en razón de otros hechos no sometidos a la jurisdicción suiza y que se considera conveniente, en particular con vistas a favorecer su reinserción social, juzgarla en un solo y mismo procedimiento por todas las infracciones que se le imputan.

Al artículo 9:

a) Suiza se reserva el derecho de denegar también la extradición, derogando el artículo 9, cuando las decisiones que motivan la denegación de la extradición de acuerdo con dicho artículo han sido pronunciadas en un Estado tercero en cuyo territorio se cometió la infracción.

b) Por añadidura, Suiza se reserva el derecho de conceder la extradición, contrariamente a la primera frase del artículo 9 del Convenio, cuando la haya concedido por otro delito y el Estado requirente ha demostrado que nuevos hechos o medios de prueba llegados a su conocimiento justifican una revisión de la decisión denegatoria de la extradición, de acuerdo con este artículo, o cuando la persona cuya extradición se busca no ha cumplido, enteramente o en parte; la pena o la medida impuesta contra ella en base a dicha decisión.

Al artículo 11: Suiza se reserva también el derecho de aplicar el artículo 11 "mutatis mutandi", en los supuestos en que el Derecho a la parte requirente prevé que la persona reclamada puede ser condenada, en razón del delito por el que se pide la extradición, a una pena que afecte a su integridad corporal o ser sometida contra su voluntad a una medida de tal naturaleza.

Al artículo 14, párrafo 1, b): El Consejo Federal declara que las autoridades suizas consideran la puesta en libertad como definitiva en el sentido del artículo 14 del Convenio, si permite a la persona extraditada circular libremente sin violar las reglas de conducta y demás condiciones determinadas por la autoridad competente. Para las autoridades suizas, se supone siempre que el extraditado tiene la posibilidad de abandonar el territorio de un Estado, en el sentido de esta disposición, cuando ni una enfermedad ni cualquier otra restricción real de su libertad de movimientos se lo impiden.

Al artículo 16, párrafo 2: Suiza solicita que toda petición que se le dirija de acuerdo con el artículo 16, párrafo 2, contenga una breve descripción de los hechos imputados a la persona que se reclama, incluidas aquellas indicaciones esenciales que permitan apreciar el carácter de la infracción en relación con el derecho de extradición.

Al artículo 21: Suiza se reserva el derecho de no autorizar tampoco el tránsito cuando el hecho que se imputa a la persona reclamada se encuadra en el artículo 5 del Convenio o constituye una violación de las disposiciones que restringen el comercio de mercancías o instituyen una regulación de mercado.

Al artículo 23: Suiza solicita que las peticiones de extradición dirigidas a sus autoridades, así como los anejos de aquéllas, vengan acompañadas de una traducción al alemán, francés o italiano, cuando no estén redactadas en uno de estos idiomas.

*Lista de infracciones que autorizan la extradición, según el Derecho suizo  
(Anejo a la reserva formulada respecto al artículo 2, párrafo 1,  
del Convenio Europeo de Extradición)*

La Ley Federal de 22 de enero de 1892, sobre extradición, dispone en su artículo 3 que las personas que han cometido o intentado cometer, o que han sido cómplices, en cualquiera de los actos más abajo mencionados, pueden ser extraditadas siempre que se trate de un delito de Derecho común castigado tanto por la Ley del lugar del refugio como por la del Estado requirente.

*I. Delitos contra las personas.*

1. Asesinato, homicidio, homicidio involuntario. 2. Infanticidio y aborto. 3. Abandono de menores o de personas indefensas. 4. Heridas que ocasionen la muerte o un defecto físico permanente, o una incapacidad para el trabajo de más de veinte días, participación en una riña que haya tenido consecuencias de esta naturaleza. 5. Malos tratos de los padres por los hijos; malos tratos habituales de los hijos por los padres o por las personas bajo cuya autoridad se encuentran.



## DOCUMENTACION

### *II. Delitos contra la libertad de las personas y los derechos familiares*

6. Rapto de adultos y de menores. 7. Secuestro de personas. 8. Secuestro de menores. 9. Allanamiento de morada con circunstancias agravantes. 10. Amenazas contra las personas o la propiedad. 11. Alteración o supresión de estado civil.

### *III. Delitos contra la moral*

12. Violación, atentado a la moral con violencia, o contra persona indefensa o privada de sus facultades mentales. 13. Actos inmorales contra menores o contra una persona cualquiera por aquel a quien ha sido confiada. 14. Corrupción de menores por los padres, el tutor u otra persona encargada de su vigilancia. 15. Proxenetismo profesional; trata de blancas y de menores. 16. Actos inmorales que causen escándalo público. 17. Incesto. 18. Bigamia.

### *IV. Delitos contra la propiedad*

19. Bandidaje (piratería), extorsión, robo, receptación. 20. Apropiación indebida (sustracción fraudulenta) y abuso de confianza. 21. Daños causados voluntariamente a la propiedad. 22. Estafa, quiebra fraudulenta y fraude cometido con ocasión de quiebra o de embargo.

### *V. Delitos contra la fe pública*

23. Falsificación de monedas o de papel moneda o de timbre que representen un valor (sellos de correos, etc.), de billetes de banco, obligaciones, acciones y otros títulos emitidos por el Estado, corporaciones, sociedades o por particulares; introducción, emisión, puesta en circulación de tales objetos falsificados, con intención fraudulenta. 24. Falsificación de sellos, troqueles, timbres o clichés; uso fraudulento o abuso de sellos, timbres, troqueles o clichés falsos o auténticos. 25. Falsificación de documentos; uso fraudulento de documentos falsificados; sustracción de documentos; abuso de firma en blanco. 26. Desplazamiento de mojoneros.

### *VI. Delitos que constituyen un peligro público*

27. Incendio, mal uso de explosivos, inundación dolosa, negligente o imprudente. 28. Destrucción o daño, voluntario, por negligencia o por imprudencia, de ferrocarriles, buques de vapor, instalaciones postales, equipos eléctricos y líneas telegráficas o telefónicas y puesta en peligro de su explotación. 29. Actos voluntarios, imprudentes o negligentes, que puedan causar la destrucción, el naufragio o la pérdida de un navío. 30. Propagación voluntaria, imprudente o negligente, de enfermedades contagiosas, epidemias o epizootias; alteración de fuentes u otras aguas por sustancias perjudiciales que constituyan un peligro público. 31. Adulteración de alimentos, que impliquen un peligro para la salud humana o para los animales; puesta en venta o circulación de tales alimentos, con ocultación de su carácter perjudicial. 31. bis. Infracción voluntaria de las regulaciones de drogas, siempre que dicha infracción implique pena de prisión.

### *VII. Delitos contra la administración de la justicia*

32. Falsa denuncia. 33. Perjurio o falsa declaración hecha bajo promesa so-



lemne. 34. Falso testimonio, falsedad en informe pericial, falsa declaración de un intérprete; soborno de testigos. Peritos o intérpretes.

*VIII. Delitos relativos al ejercicio de un cargo público*

35. Corrupción de funcionarios, miembros de un jurado, árbitros o Peritos. 36. Apropiación indebida y extorsión por funcionarios; abuso de autoridad como consecuencia de soborno o fraudulentamente. 37. Destrucción de cartas o telegramas, violación de la correspondencia y de los telegramas por empleados de correos y telégrafos.

La Ley Federal de 23 de septiembre de 1953 sobre navegación marítima bajo pabellón suizo establece en su artículo 154 que los delitos que, según la misma, conllevan una pena de prisión de un año o más grave, permiten la extradición en el sentido de la legislación suiza al respecto. Se trata de los siguientes delitos:

- Puesta en peligro del navío, intencional o por negligencia (artículo 128).
- Puesta en peligro de la navegación, intencional o por negligencia (artículo 129).
- Navegación de buque en mal estado de navegabilidad (artículo 131).
- No asistencia (artículo 133, 1).
- Abandono de navío en peligro (artículo 134).
- No ejercicio del mando del navío (artículo 135, 1).
- Abuso de autoridad y usurpación de funciones (artículo 136, 1).
- Embriaguez (artículo 139, 1).
- Desobediencia (artículo 140, 3).
- Embarque prohibido de personas y objetos (artículo 141, 1).
- Perjuicio al armador o al capitán por razón de contrabando (artículo 142, 1 y 3).
- Mal uso del pabellón (artículo 143, 1).
- Falsedad en el registro (artículo 141, 1).
- Infracción de una disposición de la autoridad, sustracción de buque detenido por las autoridades (artículo 145).
- Transferencia indebida (artículo 146).

16. TURQUÍA

Lo establecido en el artículo 11 se limitará al siguiente procedimiento:

En el supuesto de una extradición hacia Turquía de un condenado a muerte a un acusado de un delito susceptible de ser castigado con la pena de muerte, la Parte requerida cuya legislación no prevé la pena de muerte estará autorizada a transmitir una petición para que se conmute aquella pena por la de prisión perpetua. El Gobierno turco transmitirá dicha petición a la Gran Asamblea Nacional, última instancia que puede confirmar una pena de muerte, en tanto en cuanto no se hubiera pronunciado ya al respecto.



## DOCUMENTACION

El presente Convenio, que entró en vigor el 18 de abril de 1960, entrará en vigor para España el 5 de agosto de 1982, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, 3 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 19 de mayo de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

### **CONVENIO EUROPEO DE 20 DE ABRIL DE 1959 DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN ESTRASBURGO.**

**INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE ESPAÑA DE 14 DE JULIO DE 1982**

(B.O.E. 17 septiembre de 1982)

JUAN CARLOS I  
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 24 de julio de 1979, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959.

Vistos y examinados en Preámbulo y los treinta artículos de dicho Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes declaraciones y reservas:

#### **A) Declaraciones:**

Al artículo 7º, párrafo 3, España declara que, a los efectos de lo previsto en el artículo 7º, 3 del Convenio, la antelación de dicho precepto mencionada será de treinta días como mínimo.

Al artículo 15, párrafo 6, España declara que cuando, en caso de urgencia, se curse directamente una comisión rogatoria a sus autoridades judiciales por las autoridades judiciales de la parte requirente, éstas deben remitir al mismo tiempo una copia de la comisión rogatoria al Ministerio de Justicia español.

Al artículo 24. A los efectos del presente Convenio serán consideradas como autoridades judiciales:

- a) Los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria;
- b) Los miembros del Ministerio Fiscal;
- c) Las autoridades judiciales militares.





## B) Reservas

Al Artículo 5º, párrafo 1. España se reserva la facultad de no ejecutar las comisiones rogatorias que tengan como finalidad un registro o un embargo de bienes a menos que se cumplan las condiciones siguientes:

a) que la infracción que motive la comisión rogatoria sea punible según la legislación española;

b) que la infracción que motive la comisión rogatoria pueda dar lugar a extradición según la legislación española;

c) que la ejecución de la comisión rogatoria resulte compatible con la legislación española.

Al artículo 16, párrafo 2. España se reserva la facultad de exigir las solicitudes de asistencia judicial y documentos anexos que se le cursen se acompañen de una traducción al idioma castellano debidamente autenticada.

Al artículo 22. España se reserva el derecho a no facilitar información a otra parte interesada en cuanto a antecedentes penales cancelados se refiere, en el caso de ciudadanos españoles.

Dado en Madrid a 14 de julio de 1982.— Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

## CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Estrasburgo, 20 de abril de 1959

### PREAMBULO

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros,

Convencidos de que la adopción de normas comunes en la esfera de la asistencia judicial en materia penal contribuirá a alcanzar dicho objetivo,

Considerando que la asistencia judicial está relacionada con la cuestión de la extradición, que fue objeto de un convenio de fecha 13 de diciembre de 1957,

Han convenido lo siguiente:

### TITULO PRIMERO

#### *Disposiciones generales*

#### ARTICULO 1

1. Las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutuamente, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, la asistencia judicial más amplia posible en los procedimientos relativos a infracciones cuya represión, en el momento de pedir la asistencia, sea de la competencia de las autoridades judiciales de la parte requirente.

2. El presente Convenio no se aplicará a las detenciones, ejecución de condenas o infracciones de carácter militar que no constituya infracciones, con arreglo al Derecho Penal común.





## DOCUMENTACION

### ARTICULO 2

Podrá denegarse la asistencia judicial:

- a) Si la solicitud se refiere a infracciones que la Parte requerida considere como infracciones de carácter político, o infracciones relacionados con infracciones de carácter político, o como infracciones fiscales;
- b) Si la Parte requerida estima que la ejecución de la solicitud podría causar perjuicio a la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de su país.

### TITULO II

#### *Comisiones rogatorias*

### ARTICULO 3

1. La parte requerida hará ejecutar, en la forma que su legislación establezca, las comisiones rogatorias relativas a un asunto penal que le cursen las autoridades judiciales de la Parte requirente y que tengan como fin realizar actuaciones de instrucción o transmitir piezas probatorias, expedientes o documentos.

2. Si la Parte requirente desea que los testigos o los Peritos declaren bajo juramento, lo hará constar expresamente en la petición y la Parte requerida cumplirá esta petición si no se opone a ello la Ley de su país.

3. La parte requerida podrá limitarse a enviar copias o fotocopias certificadas de los expedientes o documentos solicitados. No obstante, si la Parte requirente pidiera expresamente el envío de los originales, se cumplimentará esta solicitud en la medida de lo posible.

### ARTICULO 4

Cuando la Parte requirente lo solicite expresamente, la Parte requerida le informará de la fecha y el lugar de ejecución de la comisión rogatoria. Podrán concurrir al acto las autoridades y las personas interesadas, con el consentimiento de la Parte requerida.

### ARTICULO 5

1. Toda Parte Contratante, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de Ratificación o de adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, reservarse la facultad de someter la ejecución de las comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes, a una o varias de las condiciones siguientes:

- a) Que la infracción que motive la comisión rogatoria sea punible según la ley de la Parte requirente y de la Parte requerida;
- b) que la infracción que motive la comisión rogatoria pueda dar lugar a la extradición en el país requerido;
- c) que la ejecución de la comisión rogatoria sea compatible con la ley de la Parte requerida.

2. Cuando una Parte Contratante hubiere formulado una declaración confor-



## DOCUMENTACION

me a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, cualquier otra Parte podrá aplicar la regla de la reciprocidad.

### ARTICULO 6

1. La Parte requerida podrá demorar la entrega de objetos, expedientes o documentos solicitados, si los necesitase para un procedimiento penal en curso.

2. Los objetos, así como los originales de los expedientes y documentos, que hayan sido enviados en ejecución de una comisión rogatoria, serán devueltos lo antes posible por la Parte requerida, salvo que esta última renuncie a dicha devolución.

### TITULO III

*Notificación de documentos procesales y resoluciones judiciales,  
comparecencia de testigos, peritos y procesados*

### ARTICULO 7

1. La Parte requerida procederá a la notificación de los documentos procesales y las resoluciones judiciales que le fueren enviadas con ese fin por la Parte requirente.

Esta notificación podrá efectuarse mediante la simple entrega al destinatario del documento o la resolución. Si la parte requirente lo solicita expresamente, la Parte requerida efectuará la notificación en una de las formas previstas por su legislación para notificaciones análogas o en alguna forma especial que sea compatible con dicha legislación.

Servir como prueba de la notificación un recibo fechado y firmado por el destinatario o una declaración de la Parte requerida en la que se haga constar el hecho, la forma y la fecha de la notificación. Cualesquiera de estos documentos será enviado inmediatamente a la Parte requirente. Si esta última lo solicita, la Parte requerida precisará si la notificación se ha efectuado de conformidad con su ley. Si no hubiere podido efectuarse la notificación, la Parte requerida dará a conocer inmediatamente el motivo de la Parte requirente.

Si toda parte Contratante, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de Ratificación o de adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, estipular que la citación de comparecencia dirigida a un acusado que se encuentre en su territorio, se transmita a las autoridades con una antelación determinada antes de la fecha fijada para la comparecencia. En la mencionada declaración habrá de especificarse dicho plazo que no podrá exceder de cincuenta días.

Se tendrá en cuenta este plazo tanto para fijar la fecha de comparecencia como para la entrega de la citación.

### ARTICULO 8

El testigo o el Perito que no hubiere obedecido una citación de comparecencia, cuya entrega se haya solicitado no podrá ser objeto de ninguna sanción o me-



## DOCUMENTACION

dida coercitiva, aunque dicha citación contenga una intimación de sanciones, salvo que en fecha posterior entre voluntariamente en el territorio de la Parte requirente y sea citado de nuevo en debida forma.

### ARTICULO 9

Las indemnizaciones así como los gastos de viaje y las dietas que hayan de abonarse al testigo o Perito por la Parte requirente se calcularán a partir de su lugar de residencia, y en cuantía por lo menos igual a la que resulte de las escalas y reglamentos en vigor en el país donde haya de tener lugar el interrogatorio.

### ARTICULO 10

1. Si la Parte requirente estimase especialmente necesaria la comparecencia personal ante sus autoridades judiciales de un testigo o de un Perito, lo hará constar así en la solicitud de entrega de la citación y la Parte requerida instará a dicho testigo o Perito a que comparezca.

La Parte requerida dará a conocer la respuesta del testigo o del Perito a la Parte requirente.

2. En el caso previsto en el párrafo 1º del presente artículo, en la solicitud o la citación deberá mencionarse el importe aproximado de las indemnizaciones que hayan de pagarse, así como la de los gastos de viaje y de estancia que hayan de reembolsarse.

3. La Parte requerida, si así se pidiera expresamente, podrá conceder un anticipo al testigo o al Perito. La cantidad del anticipo se mencionará en la citación y será reembolsada por la Parte requirente.

### ARTICULO 11

1. Toda persona detenida cuya comparecencia personal como testigo o para un careo hubiere sido solicitada por la Parte requirente, será trasladada temporalmente al territorio donde vaya a celebrarse el interrogatorio, con la condición de devolver al detenido a su lugar de origen en el plazo indicado por la Parte requerida y con sujeción a las disposiciones del artículo 12 en la medida que sean aplicables.

Podrá denegarse el traslado:

- a) si la persona detenida no consiente en ello;
- b) si su presencia es necesaria en un proceso penal en curso en el territorio de la Parte requerida;
- c) si su traslado pudiera ser causa de que se prolongara su detención, o
- d) si existen otras consideraciones imperiosas que se opongan a su traslado al territorio de la Parte requirente.

2. En el caso previsto en el párrafo precedente y a reserva de las disposiciones del artículo 2, se accederá al tránsito del detenido por el territorio de un tercer estado, parte en este Convenio, cuando se formule una solicitud en este sentido, acompañada de todos los documentos necesarios y dirigida por el Ministerio de Justicia de la Parte requirente al Ministerio de Justicia de la Parte requeri-



da de tránsito.

Toda Parte Contratante podrá denegar el permiso para el tránsito de sus propios nacionales.

3. La persona trasladada deberá permanecer en prisión preventiva en el territorio de la Parte requirente y, en su caso, en el territorio de la Parte requerida de tránsito, salvo que la Parte a la que se ha pedido dicho traslado solicite que sea puesta en libertad.

#### ARTICULO 12

1. Ningún testigo o Perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que, como consecuencia de una citación, comparezca ante las autoridades de la Parte requirente, podrá ser perseguido, detenido o sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.

2. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que sea citada por las autoridades judiciales de la Parte requirente para responder de hechos por los cuales se le siga en la misma un procedimiento podrá ser perseguida, detenida o sometida a ninguna otra restricción de su libertad individual por hecho o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida y que no constasen en la citación.

3. La inmunidad prevista en el presente artículo cesará cuando el testigo, el Perito o la persona encausada hayan tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte requirente durante un plazo ininterrumpido de quince días, a partir del momento en que su presencia ya no sea requerida por las autoridades judiciales y, no obstante, permanezca en dicho territorio o regrese a él después de haberlo abandonado.

#### TITULO IV

##### *Antecedentes penales*

#### ARTICULO 13

1. Toda Parte requerida comunicará, en la medida en que sus propias autoridades judiciales puedan obtenerlos en casos semejantes, los extractos o información relativa a antecedentes penales que soliciten las autoridades judiciales de una Parte Contratante y sean necesarios en una causa penal.

2. En todos los casos no incluidos en el párrafo 1 del presente artículo, se accederá a una solicitud semejante en las condiciones establecidas por la legislación, los reglamentos o la práctica de la Parte requerida.

#### TITULO V

##### *Procedimiento*

#### ARTICULO 14

1. Las solicitudes de asistencia judicial deberán contener las siguientes indicaciones:



## DOCUMENTACION

- a) autoridad que formula la solicitud,
- b) objeto y motivo de la solicitud,
- c) en lo posible, identidad y nacionalidad de la persona de que se trate, y
- d) nombre y dirección del destinatario, cuando proceda.

2. En las comisiones rogatorias a que se hace referencia en los artículos 3, 4 y 5 se mencionará además la inculpación y contendrá una exposición sumaria de los hechos.

### ARTICULO 15

1. Las comisiones rogatorias mencionadas en los artículos 3, 4 y 5, así como las solicitudes a que hace referencia el artículo 11, serán cursadas por el Ministerio de Justicia de la Parte requirente al Ministerio de Justicia de la Parte requerida y devueltas por la misma vía.

2. En caso de urgencia, las citadas comisiones rogatorias podrán cursarse directamente por las autoridades judiciales de la Parte requirente o las autoridades judiciales de la Parte requerida. Serán devueltas acompañadas de los documentos relativos a la ejecución por la vía estipulada en el párrafo 1 del presente artículo.

3. Las solicitudes mencionadas en el párrafo 1 del artículo 13 podrán cursarlas directamente las autoridades judiciales a las autoridades competentes de la Parte requerida, las cuales podrán remitir directamente las respuestas. Las solicitudes mencionadas en el párrafo 2 del artículo 13 serán cursadas por el Ministerio de Justicia de la Parte requirente al Ministerio de Justicia de la Parte requerida.

Las solicitudes de asistencia judicial que no sean las mencionadas en los párrafos 1 y 5 del presente artículo y especialmente las peticiones de investigaciones preliminares al procesamiento podrán ser objeto de comunicaciones directas entre las autoridades judiciales.

5. En los casos en que se admita en el presente Convenio la transmisión directa, ésta podrá efectuarse por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

6. Toda Parte Contratante, al firmar el presente Convenio o depositar su Instrumento de Ratificación o de adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, indicar que algunas o todas las solicitudes de asistencia judicial deberán cursarse por vía distinta de la establecida en el presente artículo, o requerir que, en el caso mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, se envíe al mismo tiempo a su Ministerio de Justicia una copia de la comisión rogatoria.

7. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de acuerdos o arreglos bilaterales en vigor entre Partes Contratantes, que establezcan la transmisión directa de las peticiones de asistencia judicial entre las autoridades de las Partes.

### ARTICULO 16

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, no se exi-



## DOCUMENTACION

girá la traducción de las solicitudes ni de los documentos anexos.

Toda Parte Contratante, en el momento de la firma o del depósito de su Instrumento de Ratificación o de adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, reservarse la facultad de exigir que las solicitudes y documentos anexos que se le cursen vayan acompañados de una traducción en su propio idioma o en uno cualquiera de los idiomas oficiales del Consejo de Europa, o en uno determinado de estos idiomas que se especifique. Las demás Partes podrán aplicar la regla de la reciprocidad.

3. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la traducción de las solicitudes y documentos anexos que figuren en los acuerdos o arreglos en vigor o que se concierten posteriormente entre dos o más Partes Contratantes.

### ARTICULO 17

Los documentos escritos que se transmitan en aplicación del presente Convenio quedarán exentos de todas las formalidades de legalización.

### ARTICULO 18

Si la autoridad que reciba una solicitud de asistencia no tiene competencia para darle curso, remitirá de oficio dicha solicitud a la autoridad competente de su país y, en el caso en que la solicitud se hubiera cursado por vía directa, infirmará de ello por la misma vía a la Parte requirente.

### ARTICULO 19

Toda denegación de asistencia judicial será motivada.

### ARTICULO 20

A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 10, la ejecución de las solicitudes de asistencia no dará lugar al reembolso de gastos de ninguna clase, excepto los ocasionados por la intervención de Peritos en el territorio de la Parte requerida o para el traslado de personas detenidas que se efectúe en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.

## TITULO VI

### *Denuncias a fines procesales*

### ARTICULO 21

1. Toda denuncia cursada por una Parte Contratante cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de otra Parte, se transmitirá mediante comunicación entre los Ministerios de Justicia. No obstante, las Partes Contratantes podrán hacer uso de la facultad reconocida en el párrafo de artículo 15.

2. La Parte requerida notificará a la Parte requirente el curso dado a la denuncia y remitirá, si ha lugar, una copia de la decisión dictada.



## DOCUMENTACION

3. Las disposiciones del artículo 16 se aplicarán en las denuncias mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

### TITULO VII

#### *Intercambio de información sobre condenas judiciales*

#### ARTICULO 22

Cada una de las Partes Contratantes informará a cualquier otra parte interesada de las sentencias penales y medidas posteriores que afecten a los nacionales de esta última y que hayan sido objeto de inscripción en el Registro de Antecedentes y Penales. Los Ministerios de Justicia se comunicarán recíprocamente esta información por lo menos una vez al año. Si la persona de que se trate está considerada como nacional de dos o más Partes Contratantes, dicha información se comunicará a cada una de las Partes interesadas, salvo que la mencionada persona posea la nacionalidad de la Parte en cuyo territorio ha sido condenada.

### TITULO VIII

#### *Disposiciones finales*

#### ARTICULO 23

1. Toda Parte Contratante, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de ratificación o de adhesión, podrá formular una reserva con respecto a una o varias disposiciones concretas del Convenio.

2. Toda Parte Contratante que hubiere formulado una reserva la retirará tan pronto como lo permitan las circunstancias. La retirada de reservas se efectuará mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa.

3. La Parte Contratante que hubiere formulado una reserva con respecto a una disposición del Convenio no podrá reclamar a otra Parte la aplicación de dicha disposición más que en la medida en que ella misma la hubiere aceptado.

#### ARTICULO 24

Toda Parte Contratante, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de ratificación o de adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, manifestar qué autoridades considerará como autoridades judiciales a los efectos del presente Convenio.

#### ARTICULO 25

1. El presente Convenio se aplicará a los territorios metropolitanos de las Partes Contratantes.

2. En lo que concierne a Francia, se aplicará asimismo a Argelia y a los departamentos de ultramar, y, en lo que concierne a Italia, al territorio de Somalia bajo administración italiana.

3. La República Federal de Alemania podrá extender la aplicación del pre-



## DOCUMENTACION

rente Convenio al Land de Berlín, mediante una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa.

4. En lo que concierne al Reino de los Países Bajos, el presente Convenio se aplicará a su territorio europeo. Aquél podrá extender la aplicación del Convenio a las Antillas Neerlandesas al Surinam y a la Nueva Guinea Neerlandesa, mediante una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa.

5. Por acuerdo directo entre dos o más Partes Contratantes podrá extenderse el ámbito de aplicación del presente Convenio, en las condiciones que se estipulen en dicho acuerdo, a cualquier territorio de dichas Partes que no sean las mencionadas en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo y de cuyas relaciones internacionales esté encargada una de las Partes.

### ARTICULO 26

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 15 y en el párrafo 3 del artículo 16, el presente Convenio deroga, en lo que afecta a los territorios a los que se aplica, aquellas disposiciones de los tratados, convenios o acuerdos bilaterales que regulen entre dos Partes Contratantes la asistencia judicial en materia penal.

2. No obstante, el presente Convenio no afectará a las obligaciones contenidas en las disposiciones de cualquier otro convenio internacional de carácter bilateral o multilateral, en los que determinadas cláusulas reglamentem actualmente o en lo sucesivo en una esfera concreta, la asistencia judicial sobre puntos particulares.

3. Las Partes Contratantes sólo podrán concertar entre sí acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a la asistencia judicial, en materia penal con el fin de complementar las disposiciones del presente Convenio o para facilitar la aplicación de los principios que contiene.

4. Cuando entre dos o más Partes Contratantes, la asistencia judicial en materia penal se efectúe sobre la base de una legislación uniforme o de un régimen especial que establezca la aplicación recíproca de medidas de asistencia judicial en sus territorios respectivos, dichas Partes estarán facultadas para reglamentar sus relaciones mutuas en esa esfera exclusivamente con arreglo a tales sistemas, no obstante lo dispuesto en el presente Convenio. Las Partes Contratantes que conforme a lo dispuesto en el presente párrafo, excluyan en la actualidad o en lo sucesivo, la aplicación del presente Convenio en sus relaciones mutuas, deberán dirigir una notificación a este efecto al Secretario general del Consejo de Europa.

### ARTICULO 27

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario general del Consejo.

2. El Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha del depósito del tercer Instrumento de ratificación.

3. Para todo signatario que lo ratifique posteriormente, el Convenio entrará





en vigor noventa días después del depósito de su Instrumento de ratificación.

ARTICULO 28

1. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo a adherirse al presente Convenio. La resolución para formular esta invitación deberá contar con el acuerdo unánime de los miembros de Consejo que hayan ratificado el Convenio.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito ante el Secretario general del Consejo de un Instrumento de adhesión que surtirá efecto noventa días después de su depósito.

ARTICULO 29

Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio en lo que le concierna, mediante una notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. Esta denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario general del Consejo reciba dicha notificación.

ARTICULO 30

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los miembros del Consejo y al Consejo de todo estado que se haya adherido al presente Convenio:

a) los nombres de los signatarios y del depósito de todo Instrumento de ratificación o de adhesión;

b) la fecha de la entrada en vigor del Convenio;

c) toda notificación recibida de conformidad con las disposiciones del párrafo del artículo 5 del párrafo 3 del artículo 7, del párrafo 6 del artículo 15, del párrafo del artículo 16, del artículo 24, de los párrafos 3 y 4, del artículo 25 y del párrafo del artículo 26;

d) toda reserva formulada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23;

e) la retirada de toda reserva efectuada conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23;

f) toda notificación de denuncia recibida conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y la fecha en que dicha denuncia surtirá efecto.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Estrasburgo, el 20 de abril de 1956, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo enviará copias certificadas a los Gobiernos signatarios y adherentes.



## DOCUMENTOS

### ESTADOS PARTE

|                                   | Firma      | Ratificación    | Entrada en vigor |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Alemania, República Federal de, . | 20-4-1959  | 2-10-1976 (R)   | 1-1-1977         |
| Austria . . . . .                 | 20-4-1959  | 2-10-1968 (R)   | 31-12-1968       |
| Bélgica . . . . .                 | 20-4-1959  | 13-8-1975 (R)   | 11-11-1975       |
| Dinamarca . . . . .               | 20-4-1959  | 13-9-1962 (R)   | 12-12-1962       |
| España . . . . .                  | 24-7-1979  | 18-8-1982 (R)   | 16-11-1982       |
| Finlandia. . . . .                | —          | 29-1-1981 (AD)  | 29-4-1981        |
| Francia. . . . .                  | 28-4-1961  | 23-5-1967 (R)   | 21-8-1967        |
| Grecia . . . . .                  | 20-4-1959  | 23-2-1962 (R)   | 12-6-1962        |
| Israel . . . . .                  | —          | 27-9-1967 (AD)  | 26-12-1967       |
| Italia . . . . .                  | 20-4-1959  | 23-8-1961 (R)   | 12-6-1962        |
| Liechtenstein . . . . .           | —          | 28-10-1969 (AD) | 26-1-1970        |
| Luxemburgo. . . . .               | 20-4-1959  | 18-11-1976 (R)  | 16-2-1977        |
| Países Bajos . . . . .            | 21-1-1965  | 14-2-1969 (R)   | 15-5-1969        |
| Noruega . . . . .                 | 21-4-1961  | 14-3-1962 (R)   | 12-6-1962        |
| Suecia . . . . .                  | 20-4-1959  | 1-2-1968 (R)    | 1-5-1968         |
| Suiza . . . . .                   | 29-11-1965 | 20-12-1968 (R)  | 20-3-1967        |
| Turquía . . . . .                 | 23-10-1959 | 24-6-1969 (R)   | 22-9-1969        |

### AUSTRIA

#### I. Reservas

Artículo 1, párrafo 1.— Austria sólo prestará asistencia judicial en aquellos procedimientos relativos a infracciones que sean también punibles para la Ley austríaca y cuyo castigo es competencia de las autoridades judiciales en el momento en que se solicite la asistencia.

Artículo 2, apartado (a).— Austria denegará la asistencia judicial en el supuesto de los delitos enumerados en el apartado (a).

Artículo 2, apartado (b).— Austria entiende que la expresión “otros intereses esenciales de su país” inclusive especialmente la protección de la obligación de secreto prevista por la legislación austríaca.

Artículo 11.— En los supuestos previstos en los apartados (a), (b) y (c) del párrafo 1 del artículo 11, no se autorizará el traslado de una persona detenida en calidad de testigo o con fines de cargo.

#### II. Declaraciones

Artículo 5, párrafo 1.— Austria someterá la ejecución de las comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes a las condiciones estipuladas en el apartado (c).

Artículo 7, párrafo 3.— Austria no entregará la citación de comparecencia a un acusado que se encuentre en territorio austríaco más que en el supuesto en

que tal citación haya sido transmitida a la autoridad judicial austríaca competente al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

Artículo 16, párrafo 2.— A reserva de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 16, las solicitudes y documentos anexos, si no están redactados en los idiomas alemán, francés o inglés, deberán ir acompañados de una traducción de las denuncias a que se refiere el párrafo 1 del artículo 21.

Artículo 24.— A los fines del presente Convenio, Austria considerará como autoridades judiciales austríacas los Tribunales penales, el Ministerio público y el Ministerio federal de Justicia.

## BELGICA

### *I. Reservas*

Artículo 2.— El Gobierno del Reino de Bélgica se reserva la facultad de denegar una solicitud de asistencia judicial,

a) si existen serias razones para creer que aquella se refiere a una investigación abierta con vistas a perseguir, condenar o afectar de cualquier otra forma a la persona acusada en base a las convicciones políticas o religiosas, su nacionalidad, su raza o el grupo de población al que pertenezca,

b) en la medida en que la solicitud esté relacionada con un proceso o un procedimiento incompatible con el principio "non bis in idem", y

c) en la medida en que se refiera a una investigación sobre hechos por los cuales la persona acusada se encuentre demandada en Bélgica.

Artículo 11.— El Gobierno no concederá el traslado temporal previsto por el artículo 11, más que si se trata de una persona que cumple condena en su territorio y si a ello no se oponen consideraciones especiales.

Artículo 22.— El Gobierno no comunicará las medidas posteriores mencionadas en el artículo 22 más que en la medida en que lo permita la organización del registro de antecedentes penales.

Artículo 26.— En razón del régimen particular existente entre los países del Benelux, el Gobierno del Reino de Bélgica no se adhiere a los párrafos 1 y 3 del artículo 26 en lo que se refiere a sus relaciones con los Países Bajos y Luxemburgo.

El Gobierno se reserva la posibilidad de derogar estas disposiciones en lo que respecta a sus relaciones con los otros países miembros de la CEE.

### *II. Declaraciones*

Artículo 5.— El Gobierno del Reino de Bélgica declara que las Comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes en Bélgica no serán ejecutadas más que cuando se refieran a hechos que, en virtud del Convenio europeo de extradición, puedan dar lugar a la extradición y a condición de que el Juez belga haya acordado la ejecución de la misma, de conformidad con su ley nacional.

En tanto en cuanto el Convenio europeo de extradición no haya sido ratificado por Bélgica, las comisiones rogatorias sólo serán ejecutadas cuando se refie-

ran a hechos que puedan dar lugar a la extradición según la legislación belga.

Artículo 24.— El Gobierno declara que, en lo que se refiere a Bélgica, las autoridades judiciales en el sentido del Convenio son los miembros del poder judicial encargados de administrar la ley, los jueces de instrucción y los miembros del Ministerio público.

#### DINAMARCA

##### *I. Reservas*

Artículo 2.— La asistencia judicial podrá ser denegada si las autoridades judiciales de Dinamarca o de un tercer Estado han incoado un proceso judicial contra el acusado por la infracción que haya motivado el proceso en el Estado requirente, o si el acusado ha sido condenado o absuelto definitivamente por las autoridades judiciales de Dinamarca o de un tercer Estado por la infracción que haya motivado el proceso en el Estado requirente o si dichas autoridades han decidido no incoar proceso o poner fin al mismo en relación con dicha infracción.

Artículo 3, párrafo 2.— Una solicitud tendente a hacer declarar bajo juramento a un testigo o a un Perito podrá ser rechazada si el Tribunal danés competente no considera necesaria la prestación del juramento.

Artículo 7, párrafo 1.— Podrá ser denegada una solicitud de notificación que no sea la mera transmisión del documento al destinatario.

Artículo 11, párrafo 2.— El Gobierno danés reserva su posición sobre el conjunto de esta disposición.

Artículo 13, párrafo 1.— La obligación de comunicar los extractos del registro de antecedentes penales en virtud de esta disposición no se aplica más que al expediente penal de las personas inculpadas o acusadas.

Artículo 13, párrafo 2.— El Gobierno danés reserva su posición sobre el conjunto de esta disposición.

##### *II. Declaraciones*

Artículo 5, párrafo 1.— Una solicitud de registro o de embargo de bienes podrá ser denegada si no se han cumplido las condiciones enunciadas en los apartados a) y c) del párrafo 1, del artículo 5.

Artículo 7, párrafo 3.— Una citación que deba ser comunicada a un acusado que se encuentre en territorio danés, deberá ser transmitida a la autoridad competente danesa al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia de la persona en cuestión.

Artículo 16, párrafo 2.— Las solicitudes y documentos anexos de países distintos de Alemania, Gran Bretaña, Austria, Francia, Irlanda, Noruega o Suecia, deberán acompañarse de una traducción al danés o a una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa. En lo que respecta a documentos más importantes, se reserva el derecho de exigir en el caso particular una traducción al danés o de hacerlos traducir al danés a cargo del Estado requirente.

Artículo 24.— El término "autoridades judiciales" designa en Dinamarca a los tribunales y al Ministerio público quien, según el Código danés de organización judicial y de procedimiento, incluye al Ministerio de Justicia, al procurador



general, a los procuradores, al prefecto de policía de Copenhague y a los comisarios de policía.

Artículo 26.— El Protocolo de asistencia judicial concluido el 26 de junio de 1957 entre Dinamarca, Noruega y Suecia permanecerá en vigor.

FINLANDIA

*I. Reservas*

1. Artículo 2.— Finlandia declara que podrá denegar la asistencia judicial en los casos siguientes:

a) Si la infracción que motiva la solicitud, en caso de que hubiera sido cometida en condiciones análogas en Finlandia, no fuera punible según la Ley finlandesa;

b) Si la infracción fuera objeto de instrucción en Finlandia o en un tercer Estado;

c) Si la persona acusada en el Estado requirente estuviere siendo juzgada o hubiera sido definitivamente condenada o absuelta, ya sea en Finlandia o en un tercer Estado;

d) Si las autoridades competentes de Finlandia o de un tercer Estado hubieren decidido renunciar a la instrucción o al proceso o no iniciar la instrucción o incoar el proceso por la infracción;

e) Si hubiera prescrito la acción o la pena según la Ley finlandesa.

2. Artículo 11.— Finlandia declara que la asistencia prevista en este artículo no podrá ser obtenida en Finlandia.

3. Artículo 13.— Finlandia declara que sólo se podrán suministrar extractos del registro de antecedentes penales o informaciones que en él figuren en relación con un individuo acusado o juzgado.

4. Artículo 15, párrafo 7.— Finlandia declara que en relación con los demás países nórdicos, se adhiere al Acuerdo entre Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia sobre asistencia judicial mutua para notificar los documentos y recibir los testimonios.

5. Artículo 20.— Finlandia declara que, en relación con los demás países nórdicos se adhiere al Acuerdo mencionado en el párrafo 4.

6. Artículo 22.— Finlandia declara que no dará información a las demás partes contratantes sobre las sentencias penales y las medidas posteriores mencionadas en dicho artículo.

7. Artículo 26, párrafo 1.— Finlandia declara que, en relación con los demás países nórdicos, se adhiere al Acuerdo mencionado en el párrafo 4 para notificar los documentos y recibir los testimonios.

*II. Declaraciones*

1. Artículo 5.— Finlandia declara que supeditará la ejecución de las Comisiones Rogatorias relativas a registro o embargo de bienes a las condiciones mencionadas en los apartados a) a c) de dicho artículo.

2. Artículo 7, párrafo 3.— Finlandia declara que cualquier citación de com-



parecencia de una persona que se halle en territorio finlandés deberá ser transmitida a las autoridades finlandesas competentes al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia de dicha persona.

3. Artículo 15, párrafo 6.— Finlandia declara que las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a Finlandia deberán ser cursadas en todos los casos al Ministerio de Justicia.

4. Artículo 16, párrafo 1.— Finlandia declara que las solicitudes y documentos anejos no redactados en finlandés, sueco o inglés deberán ir acompañados de una traducción a cualquiera de estas lenguas. Al aceptar las solicitudes en estas lenguas, Finlandia no se compromete a hacer traducir las respuestas y los documentos anejos. El sueco es la segunda lengua oficial de Finlandia.

5. Artículo 24.— Finlandia declara que, por lo que a ella se refiere se consideren autoridades judiciales, en lo que respecta a la aplicación de los artículos 3, 4 y 5, los Tribunales y Jueces de instrucción y los agentes del Ministerio público.

6. Artículo 25.— Finlandia toma nota de que la República Federal de Alemania ha formulado el 2 de octubre de 1976 una declaración relativa a Berlín Oeste, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 25. Finlandia señala, por otra parte, que los demás párrafos del artículo 25 no tienen, por el momento, ninguna aplicación práctica.

7. Artículo 26, párrafo 4.— Finlandia declara que, pese a lo dispuesto en el Convenio, no aplicará, por lo que se refiere a los demás países nórdicos, la Ley relativa a la obligación de testificar ante los Tribunales en dichos países nórdicos.

#### FRANCIA

##### *I. Reservas*

El Gobierno francés declara que, en razón de la organización interna y del funcionamiento del registro de antecedentes penales en Francia, las autoridades que se ocupan del mismo se encuentran en la imposibilidad material de informar automáticamente a los Estados parte en este Convenio, de conformidad con el artículo 22, sobre las medidas tomadas posteriormente a la condena de sus nacionales —tales como las medidas de gracia, rehabilitación o amnistía— que son objeto de inscripción en el registro.

Con todo, se compromete a que esas autoridades, cuando sean requeridas a tal efecto en casos particulares, darán precisiones a los Estados parte mencionados, en la medida de lo posible, sobre la situación penal de sus nacionales.

El Gobierno francés declara que, a los fines del presente Convenio, deberán ser consideradas como autoridades judiciales francesas, las siguientes autoridades:

- los primeros Presidentes, Presidentes, Consejeros y jueces en los tribunales penales,
- los Jueces de Instrucción de dichos Tribunales,
- los miembros del Ministerio público en dichos Tribunales, a saber: los Pro-



curadores generales, los Abogados generales, los sustitutos de los Procuradores generales, los Procuradores de la República y sus sustitutos, los representantes del Ministerio público en los Tribunales de policía, los Comisarios del Gobierno en los Tribunales de las fuerzas armadas.

## II. Declaraciones

El Gobierno de la República Francesa declara:

1. Que confirma la reserva y la declaración hechas en el momento de la firma del Convenio, el 28 de abril de 1961, y relativas, respectivamente, la primera al intercambio de registros de antecedentes penales (artículo 22) y la segunda a las autoridades judiciales que deben ser consideradas como tales a los fines del Convenio (artículo 24):

2. Que hace uso:

a) de la facultad prevista en el párrafo 3 del artículo 7 y, en consecuencia, que las citaciones de comparecencia destinadas a personas acusadas que se encuentren en territorio francés deberán ser enviadas a las autoridades francesas al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia de dichas personas;

b) de la facultad prevista en el párrafo 6 del artículo 15, para la aplicación de los párrafos 2 y 4 de dicho artículo, de forma que las disposiciones de estos dos párrafos se aplicarán de la siguiente forma:

Artículo 15, párrafo 2.— En supuesto de urgencia, cuando las comisiones rogatorias previstas en los artículos 3, 4 y 5 se dirijan directamente por las autoridades judiciales de la Parte requirente a las autoridades judiciales de la Parte requerida, una copia de tales comisiones rogatorias deberá ser comunicada al mismo tiempo al Ministerio de Justicia de la Parte requerida.

Artículo 15, párrafo 4.— Las solicitudes de asistencia judicial distintas de las previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo 15 y, en particular, las solicitudes de investigaciones preliminares a la incoación del proceso, deberán dirigirse por el Ministerio de Justicia de la Parte requerida y devueltas por la misma vía.

3. Que el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal no se aplicará a Argelia, pese a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 25, ya que este país ha accedido a la independencia tras la firma del Convenio por el Gobierno francés.

## GRECIA

El Gobierno griego formula reservas respecto de los artículos 4 y 11 del Convenio, pues la aceptación de los mismos es incompatible con los artículos 97 y 459 del Código griego de procedimiento penal.

## ISRAEL

### I. Reservas

Artículo 16.— Israel exigirá que las solicitudes y documentos anexos se le di-



## DOCUMENTACION

rijan acompañados de una traducción al hebreo, inglés o francés.

Artículo 22.— Israel no se compromete a informar automáticamente de las medidas posteriores contempladas en el artículo 22, pero no escatimará esfuerzo alguno para hacerlo.

### II. Declaraciones

Artículo 7, párrafo 3.— La citación de comparecencia dirigida a una persona acusada que se encuentre en el territorio de Israel deberá transmitirse a sus autoridades a lo más tarde cuarenta días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

Artículo 15, párrafo 6.— Todas las solicitudes y demás comunicaciones contempladas por el Convenio deberán ser transmitidas a Israel a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 24.— A los fines del Convenio, se considerará autoridad judicial cualquier Tribunal competente, así como el Procurador general del Estado de Israel.

### ITALIA

El Gobierno italiano declara que:

De conformidad con el artículo 24 y a los fines del Convenio, deben considerarse como autoridades judiciales italianas las siguientes autoridades:

- Los Procuradores generales de la República.
- Los Procuradores de la República.
- Las Cortes y Tribunales ordinarios.
- Los Tribunales militares.
- Las oficinas del Ministerio público ante los Tribunales militares.
- Los Jueces de instrucción.
- Los Consejeros de instrucción.
- Los Pretores.
- El Tribunal Constitucional.
- La Comisión Parlamentaria de investigación.

Tomando en cuenta las disposiciones de los artículos 16 y 21, párrafo 3, Italia exigirá, bajo condición de reciprocidad, que las solicitudes de asistencia judicial y los documentos anexos, así como las denuncias previas en el artículo 21 del Convenio, se acompañen de una traducción al francés o al inglés.

El Gobierno italiano pide que:

Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 6 del artículo 15 del Convenio, en caso de solicitud de asistencia judicial dirigida directamente a las autoridades judiciales italianas, se envíe al Ministerio de Justicia una copia de las Comisiones rogatorias.

### LIECHTENSTEIN

Artículo 5, párrafo 1.— el Gobierno del Principado de Liechtenstein declara





que el Principado someterá la ejecución de una comisión rogatoria que comporte la aplicación de cualquier medida coercitiva, a la condición establecida en el párrafo 1-a) del artículo 5 del Convenio.

Artículo 16, párrafo 2.— El Principado exige que las Comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Liechtenstein, así como sus anexos, que estén redactados en idioma distinto del alemán (con excepción de la solicitud de notificación de comparecencia) vengan acompañados de una traducción a este idioma.

## LUXEMBURGO

### *I. Reservas*

Artículo 2.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo se reserva la facultad de denegar una solicitud de asistencia judicial,

a) Si existen serias razones para creer que aquélla se refiere a una investigación abierta con vistas a perseguir, condenar y afectar de cualquiera otra forma a la persona acusada en base a sus convicciones políticas o religiosas, su nacionalidad, su raza o el grupo de población al que pertenezca;

b) en la medida en que la solicitud esté relacionada con un proceso o un procedimiento incompatible con el principio "non bis in idem";

c) en la medida en que se refiera una investigación sobre hechos por los cuales la persona acusada se encuentre demandada en el Gran Ducado de Luxemburgo.

Artículo 11.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo no concederá un traslado temporal previsto por el artículo 11, más que si se trata de una persona que cumple condena en su territorio y si a ello no se oponen consideraciones especiales.

Artículo 16.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo exigirá que las solicitudes de asistencia judicial y documentos anexos que se le dirijan, sean acompañados de una traducción al francés, al alemán o al inglés.

Artículo 22.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo no comunicará las medidas posteriores mencionadas en el artículo 22 más que en la medida en que lo permita la organización del registro de antecedentes penales.

Artículo 26.— En razón del régimen particular existente entre los países de Benelux, el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo no se adhiere a los párrafos 1 y 3 del artículo 26, en lo que se refiere a sus relaciones con los Países Bajos y Bélgica. El Gobierno se reserva la posibilidad de derogar estas disposiciones en lo que respecta a sus relaciones con los otros países miembros de la CEE.

### *Declaraciones*

Artículo 5.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo declara que las Comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes en Luxemburgo no serán ejecutadas más que cuando se refieran a hechos que, en virtud del Convenio europeo de extradición, pueden dar lugar a la extradición y a condición de que el juez luxemburgués haya acordado la ejecución de la mis-



## DOCUMENTACION

ma de conformidad con su ley nacional.

Artículo 24.— El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo declara que en lo que se refiera a Luxemburgo, las autoridades judiciales en el sentido del Convenio son los miembros del poder judicial encargados de administrar la ley, los jueces de instrucción y los miembros del Ministerio público.

### NORUEGA

#### *I. Reservas*

Artículo 2.— Podrá denegarse la asistencia judicial:

a) Si el acusado es objeto de un proceso incoado por el Ministerio público noruego o por las autoridades judiciales de un tercer Estado, en base a la infracción o infracciones que hayan motivado el proceso en el Estado requirente; o

b) Si el acusado ha sido condenado o absuelto por sentencia definitiva dictada por un Tribunal noruego o por las autoridades judiciales de un tercer Estado, por la infracción o infracciones que hayan motivado el proceso en el Estado requirente, o si el Ministerio público noruego o las autoridades judiciales de un tercer Estado han decidido no incoar el proceso o poner fin al mismo en relación con dichas infracción o infracciones.

Artículo 3, párrafo 2.— Toda solicitud tendente a hacer declarar a testigos bajo juramento podrá ser rechazada si, en opinión del Tribunal noruego competente, el juramento no es exigible.

Artículo 7, párrafo 1.— Podrá siempre rechazarse una solicitud de entrega de documentos procesales, que no sea la simple transmisión del documento a la persona interesada.

Artículo 11, párrafo 1.— El Gobierno noruego formula reservas a la totalidad de esta disposición.

Artículo 13, párrafo 1.— La obligación de comunicar los extractos del registro de antecedentes penales y cualquier información relativa a éste no se aplicará más que a los antecedentes penales de las personas demandadas por una infracción penal.

Artículo 13, párrafo 2.— El Gobierno noruego formula reservas a la totalidad de esta disposición.

#### *II. Declaraciones*

Artículo 5, párrafo 1.— Toda solicitud de registro o de embargo de bienes podrá rechazarse si no se han cumplido las condiciones estipuladas en los apartados (a), (b) y (c) del párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 7, párrafo 3.— Toda citación de comparecencia dirigida a una persona demandada que se encuentra en territorio noruego deberá ser transmitida a la autoridad noruega competente al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia de dicha persona ante el Tribunal.

Artículo 16, párrafo 2.— Las solicitudes y documentos anexos que no figuren en noruego, danés, inglés o sueco deberán acompañarse de una traducción al noruego. En caso contrario, queda reservado el derecho de hacerlos traducir al



noruego, a costa del Estado requirente.

Artículo 24.— A los fines del presente Convenio, la expresión “autoridades judiciales” se aplica en Noruega a los Tribunales y al Ministerio público, incluidos los Jefes de policía.

Artículo 26.— Permanecerá en vigor el Protocolo de asistencia judicial, de 26 de junio de 1958, concluido entre Noruega, Dinamarca y Suecia.

## PAISES BAJOS

### *I. Reservas*

Artículo 2.— El Gobierno del Reino de los Países Bajos se reserva la facultad de no cursar una solicitud de asistencia judicial:

a) Si hay serias razones para creer que aquélla se refiere a una investigación abierta con vistas a perseguir, condenar o afectar de cualquier otra manera a la persona acusada por razón de sus convicciones religiosas o políticas, su nacionalidad, su raza o el grupo de población al que pertenezca;

b) En la medida en que se refiera a un proceso o procedimiento incompatible con el principio “non bis in idem”;

c) En la medida en que aquélla se refiera a una investigación sobre hechos por los cuales la persona acusada se encuentre demandada en los Países Bajos.

Artículo 11.— El Gobierno del Reino de los Países Bajos no concederá el traslado temporal previsto por el artículo 11 más que si se trata de una persona que cumple condena en su territorio y si no se oponen a ello consideraciones especiales.

Artículo 22.— El Gobierno del Reino de los Países Bajos, no comunicará las medidas posteriores mencionadas en el artículo 22 más que en la medida que lo permita la organización del registro de antecedentes penales.

Artículo 26.— En razón del régimen particular existente entre los países del Benelux, el Gobierno del Reino de los Países Bajos no acepta los párrafos 1 y 3 del artículo 26 en lo que respecta a sus relaciones con el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

El Gobierno se reserva la posibilidad de derogar estas disposiciones en lo que que se refiere a sus relaciones con los demás Estados miembros de la CEE.

### *II. Declaraciones*

Artículo 5.— El Gobierno del Reino de los Países Bajos declara que las comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes en los Países Bajos no serán ejecutadas más que cuando se refieran a hechos que, en virtud del Convenio europeo de extradición, puedan dar lugar a la extradición, y a condición de que el Juez holandés haya acordado la ejecución de la misma de conformidad con su ley nacional.

Artículo 24.— El Gobierno del Reino de los Países Bajos declara que, en lo que respecta a los Países Bajos, hay que entender por autoridades judiciales en el sentido del Convenio, los miembros del poder judicial encargados de administrar

la ley, los jueces de instrucción y los miembros del Ministerio público.

Artículo 25, párrafo 1.— Dada la igualdad que existe desde el punto de vista del derecho público entre los Países Bajos, el Surinam y las Antillas neerlandesas, el término “territorios metropolitanos”, utilizado en el párrafo 1 del artículo 25 del Convenio, pierde su significado inicial en lo que respecta al Reino de los Países Bajos y, en consecuencia, y por lo que respecta al Reino, se considerará que significa “territorio en Europa”. En lo referente al párrafo 4 del artículo 25 del Convenio, hay que señalar que a partir del 1 de octubre de 1962 el Gobierno del Reino de los Países Bajos dejó de ser responsable de las relaciones internacionales de Guinea Occidental.

Artículo 25, párrafo 4.— En el supuesto de que el Gobierno del Reino de los Países Bajos hiciera una declaración por la cual se extendiera la aplicación del Convenio a Surinam y a las Antillas Neerlandesas o a cualquiera de ellas, podrá unir a esa declaración condiciones relativas a las necesidades locales y, en particular, declarar que el Convenio podrá ser denunciado por separado por esos países.

#### REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Artículo 5.— No se autorizará el registro y embargo de bienes más que si se cumplen las condiciones previstas en los párrafos 1 (a) y (c) del artículo 5 del Convenio.

Artículo 7.— Toda solicitud de entrega de una citación de comparecencia de una persona acusada que se encuentre en el territorio de la República Federal de Alemania será, en principio, ejecutada sólo si se recibe por las autoridades alemanas por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la comparecencia de dicha persona.

Artículo 11.— El traslado de un testigo será denegado en todos los supuestos enumerados en el apartado segundo del párrafo 1.

Artículo 16.— Si la solicitud de asistencia judicial y los documentos anexos no están redactados en idioma alemán, deberán acompañarse de una traducción de la solicitud y de los documentos, al alemán o a uno de los idiomas oficiales del Consejo de Europa.

Artículo 24.— A los fines del presente Convenio, las autoridades judiciales son:

- El Ministro Federal de Justicia (Bonn).
- El Tribunal Federal de Justicia (Karlsruhe).
- El Procurador general Federal ante el Tribunal de Justicia (Karlsruhe).
- El Ministerio de Justicia de Bade-Wurttemberg (Stuttgart).
- El Ministerio de Estado bávaro de Justicia (Munich).
- El Senador-Ministro de Justicia de Berlín (Berlín).
- El Ministro de Justicia y Administración penitenciaria de Bremen (Bremen).
- El Departamento de Justicia de la Ciudad Libre Hanseática de Hamburgo.



## DOCUMENTACION

- El Ministro de Justicia de Hesse (Wiesbaden).
- El Ministro de Justicia de la Baja Sajonia (Hannover).
- El Ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia (Düsseldorf).
- El Ministro de Justicia de Renania-Palatinado (Maguncia).
- El Ministro de Justicia del Sarre (Saarbrücken).
- El Ministro de Justicia de Scheleswig-Holstein (Kiel).
- El Tribunal Supremo bávaro (Munich).
- Los Tribunales regionales superiores.
- Los Tribunales regionales.
- Los Tribunales cantonales.
- El Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo bávaro (Munich).
- Los Fiscales en los Tribunales regionales superiores.
- Los Fiscales en los Tribunales regionales.
- La Oficina central de las autoridades de Justicia de los Länder para la investigación de los crímenes nacional-socialistas (Ludwigsburg).

Artículo 25.— El Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, de 20 de abril de 1959, se aplicará igualmente al Land de Berlín con efectos desde la fecha de entrada en vigor del mismo para la República Federal de Alemania.

### SUECIA

#### *I. Reservas*

Artículo 2.— Podrá denegarse la asistencia judicial:

- a) Si la infracción que motiva la solicitud no es punible según la ley sueca;
- b) Si la infracción es objeto de instrucción en Suecia o en un tercer Estado;
- c) Si la persona acusada en el Estado requirente está siendo juzgada o ha sido definitivamente condenada o absuelta ya sea en Suecia o en un tercer Estado;
- d) Si las autoridades competentes de Suecia o de un tercer Estado han decidido renunciar a la instrucción o al proceso, o no iniciar la instrucción o incoar el proceso por la infracción;
- e) Si según la ley sueca, ha prescrito la acción o la pena.

Artículo 5.— Suecia reitera su reserva general en relación con el artículo 5 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal y está dispuesta a prestar la asistencia prevista en este artículo en las condiciones siguientes:

Si una persona resulta sospechosa o es acusada o condenada por la comisión en uno de los Estados contratantes de una infracción que sea punible por el Derecho Penal de dicho Estado, todos los bienes, expedientes y documentos que se encuentren en Suecia podrán ser embargados y enviados al Estado extranjero en cuestión, si existen motivos razonables para creer que tales bienes, expedientes o documentos pueden tener importancia para la investigación de la infracción, o que cualquier persona haya podido ser privada de ellos como consecuencia de la infracción. La búsqueda de bienes que sean objeto de un mandamiento de embargo podrá dar lugar a registro.

Para la ejecución de comisiones rogatorias relativas a un embargo o registro,



Suecia exigirá:

- a) Que la infracción que motive la comisión rogatoria pueda dar lugar a extradición según la ley sueca; y
- b) Que la ejecución de la Comisión rogatoria sea compatible con la ley sueca.

Se debe mencionar a este respecto las reservas formuladas por Suecia en relación con el artículo 2 del Convenio.

La solicitud de asistencia deberá indicar el nombre, nacionalidad y residencia del interesado, los bienes que se reclaman, la naturaleza de la infracción, y la fecha y lugar en que haya ido cometida, así como las disposiciones legales pertinentes del Estado requirente. El texto de dichas disposiciones deberá ser adjuntado a la solicitud.

Si se hubiera dictado sentencia en el Estado requirente, se deberá adjuntar a la solicitud copia de dicha sentencia. En otro caso, se deberán suministrar detalles sobre las circunstancias que apoyan la sospecha o la acusación y, en su caso, de la demanda civil.

Las autoridades suecas podrán pedir al Estado requirente, si fuera necesario, un complemento de información.

Artículo 10, párrafo 3.— Esta disposición no será aplicable en lo que se refiere a un testigo o un Perito llamado a comparecer a petición solamente de la persona interesada.

Artículo 11.— La asistencia prevista en este artículo no podrá ser obtenida en Suecia.

Artículo 13, párrafo 1.— Sólo se podrán suministrar extractos del registro de antecedentes penales o informaciones que en él figuren en relación con un individuo acusado o juzgado.

Artículo 13, párrafo 2.— La asistencia prevista no podrá obtenerse en Suecia.

Artículo 15, párrafo 7.— Permanecerá vigente el Protocolo de 26 de junio de 1957 relativo a la Asistencia Judicial entre Suecia, Dinamarca y Noruega.

Artículo 16.— La comunicación de las solicitudes sólo podrá ser realizada de forma obligatoria si éstas están traducidas al sueco.

Artículo 20.— Es aplicable la reserva formulada respecto del artículo 15, párrafo 7.

Artículo 22.— Suecia no dará información sobre las medidas adoptadas con posterioridad a la condena. La información de otro tipo será comunicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, al cual deberá igualmente comunicarse la información de otros países.

## II. Declaraciones

Artículo 7, párrafo 3.— La citación de comparecencia destinada a una persona acusada que se encuentre en Suecia deberá ser transmitida a las autoridades suecas al menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

Artículo 15, párrafo 6.— Las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a Suecia en base al Convenio deberán ser cursadas por vía diplomática. En caso de ur-

gencia las solicitudes podrán dirigirse directamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Real Ministerio de Asuntos Exteriores. Las solicitudes de Suecia serán cursadas por las misiones diplomáticas o los Consulados suecos.

Artículo 16, párrafo 2.— Las solicitudes y documentos anexos mencionados en los artículos 3 y 21, deberán acompañarse de una traducción en sueco, danés o noruego.

Artículo 21, párrafo 1.— Las denuncias deberán ser cursadas por vía diplomática.

Artículo 24.— Serán consideradas como autoridades judiciales: en lo que se refiere a la aplicación de los artículos 3, 4 y 6, los Tribunales y Jueces de Instrucción y, en los demás casos, los Tribunales, los Jueces de Instrucción y los Agentes del Ministerio público adscritos a los Tribunales.

## SUIZA

### *Reservas y declaraciones*

Artículo 1.— El Consejo Federal Suizo declara que las siguientes autoridades deben considerarse como autoridades judiciales suizas a los fines del Convenio:

- Los Tribunales, sus salas o secciones.
- El Ministerio Público de la Confederación.
- La Dirección de Policía del Departamento Federal de Justicia y Policía.
- Las autoridades habilitadas por el derecho cantonal para instruir los asuntos penales o para expedir citaciones (“mandats de répression”). Por razón de las considerables diferencias que existen entre las organizaciones judiciales de los cantones respecto de la denominación de funciones de esas autoridades, la autoridad competente en virtud del artículo 15 del Convenio confirmará expresamente cada vez que sea necesario, en el momento de transmitir una solicitud judicial, que ésta emana de una autoridad judicial en el sentido del Convenio.

### Artículo 2.

a) Suiza se reserva el derecho de denegar la asistencia judicial cuando el acto que motive la solicitud sea objeto en Suiza de un proceso penal contra el mismo acusado o cuando se haya dictado una sentencia penal sobre el fondo del asunto y sobre la culpabilidad del interesado;

b) Por añadidura, Suiza se reserva, en casos especiales, el derecho de no conceder la asistencia judicial en virtud del Convenio más que bajo la expresa condición de que los resultados de las investigaciones realizadas en Suiza y las informaciones contenidas en los documentos o expedientes transmitidos sean utilizados exclusivamente para instruir y juzgar los delitos en base a los cuales se facilita la asistencia judicial.

Artículo 5, párrafo 1.— El Consejo Federal Suizo declara que Suiza subordinará la ejecución de toda comisión rogatoria que exija la aplicación de cualquier medida de coerción, a la condición fijada en el párrafo 1 (a) del artículo 5.

Artículo 7, párrafo 3.— Suiza pide que toda solicitud encaminada a la entrega de una citación de comparecencia a un acusado que se encuentre en Sui-



za, llegue a poder de la autoridad suiza competente de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 15, por lo menos treinta días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

Artículo 11, párrafo 3; artículo 1 y artículo 15, párrafos 1 y 3.— El Consejo Federal Suizo declara que, a los fines de estas disposiciones, las autoridades competentes en Suiza son las siguientes:

1. La Dirección de la Policía del Departamento Federal de Justicia y Policía, en Berna.

a) Para extender la orden de arresto contra las personas detenidas entregadas a las autoridades suizas en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 11 del Convenio.

b) Para recibir o transmitir las solicitudes de asistencia judicial, del extranjero o de Suiza, las cuales, de conformidad con el artículo 15 del Convenio, deberán ser transmitidas por el Ministerio de Justicia de la parte requirente al de la parte requerida.

2. La Oficina Central Suiza de Policía, en Berna, para presentar y recibir las solicitudes de extracto de registro de antecedentes penales, de conformidad con la primera frase del párrafo 3 del artículo 15.

Artículo 12, párrafo 3.— El Consejo Federal Suizo declara que, en opinión de las autoridades suizas, la condición establecida por el párrafo 3 del artículo 12 del Convenio para hacer cesar la inmunidad no se producirá —contrariamente a la del artículo 14 del Convenio europeo de extradición— más que si no existiese ningún obstáculo jurídico o práctico para que el testigo, el Perito o el acusado que se encuentre en libertad abandone libremente el territorio del Estado requirente.

Artículo 13, párrafo 2.— Tomando en consideración que cualquier persona puede obtener extractos de su propio registro de antecedentes, Suiza se reserva el derecho de no atender las solicitudes presentadas en virtud del párrafo 2 del artículo 13, más que si queda suficientemente demostrada la necesidad de obtener tal extracto por vía oficial.

Artículo 16, párrafo 2.— Suiza pide que todas las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a sus autoridades así como los documentos anexos, excepto las solicitudes sobre entrega de citaciones de comparecencia, se acompañen de una traducción al alemán, francés o italiano, si no estuvieran redactadas en uno de esos idiomas.

#### TURQUIA

##### *Declaraciones*

Artículo 5.— La ejecución de las comisiones rogatorias que tengan como fin un registro o un embargo de bienes se someterá a las condiciones estipuladas en los apartados (a), (b) y (c) del párrafo 1.

Artículo 7, párrafo 3.— Las citaciones de comparecencia dirigidas a personas acusadas que se encuentren en territorio de la República turca deberán transmi-





tirse a las autoridades turcas interesadas en un plazo mínimo de cuarenta días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

El presente Convenio entró en vigor con carácter general el 12 de junio de 1962 y entrará en vigor para España el 16 de noviembre de 1982, de conformidad con las disposiciones del artículo 27.3 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 6 de septiembre de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

**PROTOCOLO DE 15 DE MARZO DE 1978 ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE 7 DE JUNIO DE 1968. ACERCA DE LA INFORMACION SOBRE EL DERECHO EXTRANJERO. (B.O.E. 24 junio 1982)<sup>1</sup>.**

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo,

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Europeo relativo a la Información sobre el Derecho Extranjero, abierto a la firma en Londres el 7 de junio de 1968 (denominado en adelante "El Convenio");

Considerando que es conveniente ampliar el sistema de asistencia mutua internacional establecido en ese Convenio a la esfera del derecho y procedimiento penal, en un marco multilateral abierto a todas las Partes Contratantes en el Convenio;

Considerando que para eliminar los obstáculos de carácter económico que dificultan el acceso a los procedimientos jurídicos y permitir a las personas económicamente débiles que ejerciten mejor sus derechos en los Estados miembros, es conveniente asimismo ampliar el sistema establecido por el Convenio a la esfera de la asistencia judicial y el asesoramiento jurídico en materia civil y mercantil;

Teniendo en cuenta que en el párrafo 2 del artículo 1 del Convenio se dispone que dos o más Partes Contratantes podrán acordar ampliar entre ellas el ámbito de aplicación del Convenio a otras esferas además de las que se indican en el propio Convenio.

Teniendo asimismo en cuenta que el párrafo 3 del artículo 3 del Convenio dispone que dos o más Partes Contratantes podrán acordar ampliar en lo que les concierne la aplicación del Convenio a las peticiones procedentes de autoridades que no sean autoridades judiciales,

Han convenido lo siguiente:

**CAPITULO PRIMERO**

*Artículo 1*

Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar, conforme a las dis-

1. Texto del Convenio de 7 de junio de 1968 en este *Anuario*, vol. I, pág. 660.



## DOCUMENTACION

posiciones del Convenio, información sobre su derecho sustantivo y procesal, su organización judicial en la esfera penal, con inclusión del Ministerio Público, y su legislación sobre la ejecución de las medidas penales. Este compromiso se aplica a todos los procedimientos que se instruyan por infracciones cuya sanción, en el momento en que se solicite la información, sea de la competencia de las autoridades judiciales de la Parte requirente.

### *Artículo 2*

Una demanda de información sobre las cuestiones mencionadas en el artículo 1 podrá:

a) Formularla no sólo un Tribunal, sino también cualquier autoridad judicial competente para instruir procedimiento o ejecutar sentencias firmes con efecto de cosa juzgada; y

b) Ser formulada no sólo cuando se haya iniciado ya el procedimiento correspondiente, sino también cuando prevea la instrucción de un procedimiento.

## CAPITULO II

### *Artículo 3*

En el marco del compromiso incluido en el párrafo 1 del artículo del Convenio, las Partes Contratantes convienen en que la petición de información podrá:

a) Formularla, no sólo una autoridad judicial, sino también cualquiera otra autoridad o persona que actúe dentro de un sistema oficial de asistencia judicial o de asesoramiento jurídico por cuenta de personas económicamente débiles; y

b) Ser formulada, no sólo cuando se haya iniciado un procedimiento, sino también cuando se prevea la instrucción de un procedimiento.

### *Artículo 4*

1. Toda Parte Contratante que no haya establecido o designado uno o varios Organismos para la transmisión de información, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio, establecerá o designará uno o varios de esos Organismos para transmitir el Organismo extranjero de recepción la demanda de información formulada de conformidad con el artículo 3 del presente Protocolo.

2. Cada una de las Partes Contratantes comunicará al Secretario general del Consejo de Europa el nombre y la dirección del Organismo de los Organismos de transmisión que se establezcan o designen en aplicación del párrafo precedente.

## CAPITULO III

### *Artículo 5*

1. Cada Estado, en el momento de la firma o del depósito de su Instrumento de Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que sólo estará vinculado por las disposiciones del capítulo I o por las del capítulo II del pre-



presente Protocolo.

2. Todo Estado que hubiere formulado una declaración en ese sentido podrá declarar en cualquier otro momento posterior mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que estará vinculado por el conjunto de las disposiciones de los capítulos I y II. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

3. Toda Parte Contratante vinculada por el conjunto de las disposiciones de los capítulos I y II podrá declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que dejará de estar vinculada por las disposiciones del capítulo I o por las del capítulo II. Esta notificación surtirá efecto un mes después de su recepción.

4. Las disposiciones del capítulo I o las del Capítulo II, según el caso, sólo serán aplicables entre las Partes Contratantes que estén vinculadas por las disposiciones de ese mismo capítulo, respectivamente.

#### Artículo 6

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio, que pueden llegar a ser Partes en el Protocolo por:

- a) La firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
- b) La firma con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

3. Ningún Estado miembro del Consejo de Europa, podrá firmar el presente Protocolo sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación ni ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo sin haber ratificado o aceptado el Convenio simultáneamente o con anterioridad.

#### Artículo 7

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que tres Estados miembros del Consejo de Europa lleguen a ser Partes en el Protocolo con arreglo a las disposiciones del artículo 6.

2. Para cualquier Estado miembro que ulteriormente firme el acuerdo sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación o lo ratifique, acepte o apruebe, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

#### Artículo 8

1. Después de la entrada en vigor del presente Protocolo el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado que se haya adherido al Convenio o que hubiese sido invitado a adherirse al mismo, a adherirse también al presente Protocolo.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito en poder del Secretario general del Consejo de Europa de un Instrumento de adhesión, que surtirá efecto



tres meses después de la fecha del depósito de dicho instrumento.

*Artículo 9*

1. Todo Estado, en el momento de la firma o del depósito de su Instrumento de Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá designar el territorio o los territorios a los que se aplicará el presente Protocolo.

2. Todo Estado, en el momento del depósito de su Instrumento de Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en cualquier otro momento posterior, podrá extender la aplicación del presente Protocolo, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, a cualquier otro territorio designado en la declaración de cuyas relaciones internacionales esté encargado o respecto del cual esté facultado para contraer compromisos.

3. Toda declaración hecha en aplicación del párrafo precedente podrá ser retirada con respecto a cualquier territorio designado en la declaración, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. Dicha retirada surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario general del Consejo de Europa haya recibido la notificación.

*Artículo 10*

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar, en lo que le concierne, el presente Protocolo mediante una notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa.

2. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario general del Consejo de Europa reciba la notificación.

3. La denuncia del Convenio entrañará automáticamente la denuncia del presente Protocolo.

*Artículo 11*

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo y a cualquier Estado que se haya adherido al Convenio:

- a) Cualquier firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
- b) Cualquier firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
- c) El depósito de cualquier Instrumento de Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

d) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 7.

e) Cualquier notificación que se reciba en aplicación de las disposiciones del artículo 4.

f) Cualquier declaración o notificación que se reciba en aplicación de las disposiciones del artículo 5.

g) Cualquier declaración que se reciba en aplicación de las disposiciones del artículo 9, y cualquier retirada de una declaración de esa clase.

h) Cualquier declaración que se reciba en aplicación de las disposiciones del artículo 10 y la fecha en que surtirá efecto la denuncia.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman



el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo, el 15 de marzo de 1978, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa enviará copias certificadas a cada uno de los Estados signatarios y adheridos.

## ESTADOS PARTE

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Austria . . . . .      | 25 febrero 1980 (R).                 |
| Bélgica . . . . .      | 30 mayo 1979 (R).                    |
| Chipre . . . . .       | 3 abril 1979 (R) <sup>1</sup> .      |
| Dinamarca . . . . .    | 11 octubre 1979 (R).                 |
| España . . . . .       | 10 marzo 1982 (FD).                  |
| Italia . . . . .       | 11 febrero 1982 (R).                 |
| Noruega . . . . .      | 2 noviembre 1978 (R).                |
| Países Bajos . . . . . | 3 junio 1980 (AP) <sup>2</sup> .     |
| Reino Unido . . . . .  | 2 septiembre 1981 (R) <sup>3</sup> . |
| Suecia . . . . .       | 21 marzo 1981 (FD).                  |

(R) Ratificación. (AP) Aprobación. (FD) Firma definitiva).

El presente Protocolo entró en vigor el 31 de agosto de 1979 y para España el 11 de junio de 1982, de conformidad con lo establecido en su artículo 7.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 14 de junio de 1982.— El Secretario general Técnico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

**LEY 51/1982, DE 13 DE JULIO, DE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 17 AL 26 DEL CODIGO CIVIL (B.O.E. 30 julio 1982).**

**DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA**

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

1. Al depositar este instrumento de ratificación, el Representante permanente de Chipre ante el Consejo de Europa declara, de conformidad con el artículo 5.1, que la República de Chipre quedará solamente vinculada por las disposiciones del capítulo 1 de este Protocolo.

2. En el momento de depositar el instrumento de aprobación, en virtud de lo establecido en el artículo 5.1, el Representante permanente declara que el Reino de los Países Bajos —Reino en Europa— quedará vinculado solamente por las disposiciones del capítulo 1 del Protocolo.

3. En este instrumento de ratificación, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte declara, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5º, párrafo 1, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte quedará solamente vinculado por las disposiciones del capítulo 1 del Protocolo adicional.

*Artículo único*

Se modifican los artículos diecisiete al veintiséis del Título I del Libro I del Código Civil que quedarán redactados en la forma siguiente:

“Art. 17. Son españoles de origen: 1º Los hijos de padre o madre españoles. 2º Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos uno de éstos, hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de padre o madre extranjeros adscritos al servicio diplomático o consular. 3º Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. 4º Los nacidos en España cuya filiación sea desconocida o aunque conocida respecto de uno de los padres la legislación de éste no atribuya al hijo su nacionalidad y los menores hallados en territorio español si no se conoce el lugar de su nacimiento ni su filiación.

La determinación legal de la filiación respecto del padre o madre españoles producirá automáticamente la adquisición de la nacionalidad española de origen.

Art. 18. El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español.

Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen.

Art. 19. Los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español pueden optar por la nacionalidad española:

1º Desde que cumplan los catorce años, asistidos por su representante legal.

2º Por sí solos, dentro de los dos años siguientes a la emancipación, a haber cumplido dieciocho años o a la recuperación de la plena capacidad.

Art. 20. La declaración de opción se hará ante el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado. Si residiera fuera de España, podrá hacer la declaración ante el Registro consular correspondiente o mediante documento debidamente autenticado y dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Son requisitos de esta adquisición por opción: La declaración de renuncia a la nacionalidad anterior, el juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes, y la inscripción como español en el Registro Civil.

Art. 21. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales.

Podrán solicitar la adquisición el interesado emancipado o mayor de dieciocho años, y los menores, desde que cumplan los catorce años, asistidos por su representante legal, debiendo cumplirse los requisitos establecidos en el párrafo último del artículo anterior.

Art. 22. La nacionalidad española se adquirirá por residencia en España por tiempo de diez años, previa solicitud del interesado, y mediante concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos de orden pú-



blico o interés nacional.

Serán suficientes dos años, cuando se trate de nacionales de origen de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, que acrediten su respectiva condición.

Bastará, sin embargo, el tiempo de residencia de un año para:

- 1º El que haya nacido en territorio español.
- 2º El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles.
- 3º El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
- 4º Quien se haya casado con español o española, aunque el matrimonio se hubiere disuelto.

En todos los casos la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

El solicitante deberá ser mayor de dieciocho años o estar emancipado.

Para que la concesión tenga eficacia será necesario cumplir los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 20.

La concesión o denegación de la nacionalidad deja a salvo la vía judicial civil.

Art. 23. Perderán la nacionalidad española los que hallándose emancipados y residiendo fuera de España con tres años de anterioridad adquirieran voluntariamente otra nacionalidad. No la perderán cuando justifiquen ante los Registros Consular o Central que la adquisición de la nacionalidad extranjera se produjo por razón de emigración.

Cuando se trate de españoles que ostenten desde su menor edad, además, una nacionalidad extranjera, sólo perderán la nacionalidad española si, una vez emancipados, renunciaren expresamente a ella en cualquier momento.

No se perderá la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en este artículo, si España se hallase en guerra.

La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal o de aquellos con los que se concierte un tratado de doble nacionalidad, sólo producirá pérdida de la nacionalidad española de origen cuando el interesado así lo declare expresamente en el Registro Civil una vez emancipado.

Art. 24. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:

- 1º Cuando por sentencia firme fueren condenados a su pérdida conforme a lo establecido en las leyes penales o declarados incurso en falsedad, ocultación o fraude en su adquisición.
- 2º Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo público en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

Art. 25. No perderá el hijo la nacionalidad española por quedar sujeto a la patria potestad de un extranjero o porque quienes la ejerzan pierdan dicha nacionalidad.

Art. 26. El español que haya perdido esta condición podrá recuperarla cum-



## DOCUMENTACION

pliendo con los requisitos siguientes:

1º Residencia legal y continuada en España durante un año inmediatamente anterior a la petición.

2º Declaración ante el encargado del Registro Civil de su voluntad de recuperar la nacionalidad española.

3º Renuncia ante el encargado del Registro Civil a su nacionalidad extranjera, y

4º Inscripción de la recuperación en el Registro Civil.

El requisito de la residencia será dispensado por el Ministro de Justicia a los españoles emigrantes que justifiquen tal condición. También se dispensará a los españoles que hayan adquirido voluntariamente la nacionalidad de su cónyuge. En los demás casos, la dispensa tendrá carácter discrecional.

No podrán recuperar la nacionalidad sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno:

1º Los que la hayan perdido siendo mayores de catorce años sin haber cumplido en España el servicio militar o la prestación social sustitutoria.

2º Los que hayan sido privados de la nacionalidad conforme a lo establecido en el artículo 24”.

### DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veintiséis, los que hubieren perdido la nacionalidad española por razón de emigración, con anterioridad a esta Ley, podrán recuperarla cumpliendo exclusivamente los requisitos dos y cuatro del citado artículo.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a trece de julio de mil novecientos ochenta y dos.— Juan Carlos R.— El Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.

## CONVENIO EUROPEO DE 7 DE JUNIO DE 1968 RELATIVO A LA SUPRESION DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EXTENDIDOS POR LOS AGENTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES, HECHO EN LONDRES.

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 1 DE JUNIO DE 1982

(B.O.E. 28 de agosto de 1982)

DON JUAN CARLOS I  
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 15 de abril de 1982, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Convenio Eu-





ropeo relativo a la supresión de la legalización de documentos extendidos por los Agentes diplomáticos y consulares, hecho en Londres el 7 de junio de 1968.

Vistos y examinados los diez artículos de dicho Convenio,

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a uno de junio de mil novecientos ochenta y dos.— Juan Carlos R.— El Ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.

CONVENIO EUROPEO RELATIVO A LA SUPRESION DE LA LEGALIZACION  
DE DOCUMENTOS EXTENDIDOS POR LOS AGENTES DIPLOMATICOS  
Y CONSULARES

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio;

Considerando que el fin del Consejo de Europa es realizar una unión más íntima entre sus Miembros;

Considerando que las relaciones entre los Estados miembros, así como entre sus Agentes diplomáticos o consulares, se fundan cada vez más en una confianza recíproca;

Considerando que la supresión de la legalización reforzará los vínculos existentes entre los Estados miembros, permitiendo la utilización de documentos extranjeros en las mismas condiciones que los que expidan las autoridades nacionales;

Convencidos de la necesidad de suprimir la exigencia de la legalización de los documentos expedidos por sus Agentes diplomáticos o consulares,

Convienen en lo siguiente:

ARTICULO 1

La legalización, a los efectos del presente Convenio, no es más que la formalidad que tiene como fin dar fe de la autenticidad de la firma puesta en un documento, la calidad en que ha actuado el signatario del documento y, si así fuere el caso, la identidad del sello o timbre que figure en dicho documento.

ARTICULO 2

1. El presente Convenio se aplicará a los documentos expedidos en su calidad oficial por los Agentes diplomáticos o consulares de una Parte Contratante que ejerzan sus funciones en el territorio de cualquier Estado y que deban presentarse:

- a) En el territorio de la otra Parte Contratante, o
- b) A los Agentes diplomáticos o consulares de otra Parte Contratante que



## DOCUMENTACION

ejercen sus funciones en el territorio de un Estado que no sea parte en el presente Convenio.

2. Se aplicará asimismo a las declaraciones oficiales, tales como menciones de registro, visados de fecha cierta y certificaciones de firma, extendidos por los Agentes diplomáticos o consulares en documentos que no sean aquellos a que se refiere el párrafo anterior.

### ARTICULO 3

Cada una de las Partes Contratantes dispensará de la obligación de legalizar los documentos a los cuales se aplique el presente Convenio.

### ARTICULO 4

1. Cada una de las Partes Contratantes tomará las medidas necesarias para evitar que sus autoridades procedan a la legalización en los casos en que el Convenio prescriba su supresión.

2. Cuidará de la verificación, en caso de necesidad, del origen de los documentos a los cuales se aplique el presente Convenio. Dicha verificación no dará lugar al pago de derechos o a gasto alguno y se llevará a cabo tan rápidamente como sea posible.

### ARTICULO 5

El presente Convenio prevalecerá en las relaciones, entre las Partes Contratantes, sobre las disposiciones de los Tratados, Convenios o Acuerdos que exigen o puedan exigir la legalización para autenticar la firma de los Agentes diplomáticos o consulares, la calidad en que haya actuado el signatario de un documento y, si así fuere el caso, la identidad del sello o timbre que figure en dicho documento.

### ARTICULO 6

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa. Será objeto de ratificación o aceptación. Los instrumentos de ratificación o aceptación se depositarán en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

2. El Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o aceptación.

3. Entrará en vigor, con respecto a cualquier Estado signatario que lo ratifique o acepte ulteriormente, tres meses después de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o aceptación.

### ARTICULO 7

1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo a que se adhiera al presente Convenio.

2. La adhesión se llevará a cabo mediante el depósito en poder del Secretario general del Consejo de Europa de un instrumento de adhesión, que tendrá efec-



## DOCUMENTACION

to tres meses después de la fecha de su depósito.

### ARTICULO 8

1. Cualquier Parte Contratante podrá, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Convenio.

2. Cualquier Parte Contratante podrá, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, ampliar la aplicación del presente Convenio —mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa— a cualquier otro territorio designado en la declaración, cuyas relaciones internacionales asuma o en representación del cual esté facultado para estipular.

3. Cualquier declaración hecha en virtud del párrafo anterior podrá retirarse, en lo que respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, en las condiciones previstas en el artículo 9 del presente Convenio.

### ARTICULO 9

1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación alguna de tiempo.

2. Cualquier Parte Contratante podrá, en lo que a ella respecta, denunciar el presente Convenio dirigiendo la correspondiente notificación al Secretario general del Consejo de Europa.

3. La denuncia tendrá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de la notificación por el Secretario general.

### ARTICULO 10

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo y a cualquier Estado que se haya adherido al presente Convenio:

- a) Cualquier firma.
- b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o adhesión.
- c) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
- d) Cualquier declaración recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 8.
- e) Cualquier notificación recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 9 y la fecha en que la denuncia tendrá efecto.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio.

Hecho en Londres, el 7 de junio de 1968, en francés y en inglés, ambos textos igualmente fehacientes, en un ejemplar único que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa enviará una copia certificada conforme del mismo a cada uno de los Estados signatarios y adheridos.



## DOCUMENTACION

### Convenio Europeo relativo a la supresión de la legalización de los documentos extendidos por los Agentes diplomáticos y consulares

#### ESTADOS PARTE

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Alemania, República Federal de <sup>1</sup> . . . . . | 7 junio 1968 (F)       | 18 junio 1971 (R)      |
| Austria . . . . .                                     | 8 febrero 1981 (F)     | 9 abril 1973 (R)       |
| Chipre . . . . .                                      | 29 octubre 1968 (F)    | 16 abril 1969 (R)      |
| España . . . . .                                      | 15 abril 1982 (F)      | 10 junio 1982 (R)      |
| Francia . . . . .                                     | 7 junio 1968 (F)       | 13 mayo 1970 (R)       |
| Grecia . . . . .                                      | 7 junio 1968 (F)       | 22 febrero 1979 (R)    |
| Italia . . . . .                                      | 6 noviembre 1968 (F)   | 18 octubre 1971 (R)    |
| Liechtenstein . . . . .                               |                        | 6 noviembre 1972 (AD)  |
| Luxemburgo . . . . .                                  | 7 junio 1968 (F)       | 30 marzo 1979 (R)      |
| Noruega . . . . .                                     | 7 mayo 1981 (F)        | 19 junio 1981 (R)      |
| Países Bajos <sup>2</sup> . . . . .                   | 16 septiembre 1969 (F) | 9 julio 1970 (R)       |
| Reino Unido <sup>3</sup> . . . . .                    | 7 junio 1968 (F)       | 24 septiembre 1969 (R) |
| Suecia . . . . .                                      | 7 junio 1968 (F)       | 27 septiembre 1973 (R) |
| Suiza . . . . .                                       | 7 junio 1968 (F)       | 19 agosto 1970 (R)     |

El presente Convenio entró en vigor con carácter general el 14 de agosto de 1970 y entrará para España el 11 de septiembre de 1982, de conformidad con las disposiciones del artículo 6, 3 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 19 de agosto de 1982.— El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaga Barberán.

(F), firma; (R), ratificación; (AD), adhesión.

1. Se aplicará igualmente al Land de Berlín con afecto desde la fecha en que entre en vigor para la República Federal de Alemania.



## **PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA**

### *Manuales*

1. ALVARO D'ORS: *Elementos de Derecho Privado Romano* (2.<sup>a</sup> ed.).
2. AURELIO GUAITA: *Derecho administrativo* (agotado).
3. ENRIQUE GIMÉNEZ-ARNAU: *Derecho Notarial* (2.<sup>a</sup> ed.).
4. MIGUEL SANCHO IZQUIERDO: *Lecciones de Derecho Natural* (agotado).
5. JOSÉ ZAFRA: *Teoría fundamental del Estado* (agotado).
6. LEANDRO BENAVIDES: *Economía Política General* (agotado).
7. ALVARO D'ORS: *Derecho Privado Romano* (4.<sup>a</sup> ed.).
8. JOSÉ ZAFRA: *Régimen político de España* (agotado).
9. JAVIER IRABURU: *Introducción a la economía descriptiva. I. Macro-Economía*.
10. MICHEL VILLEY: *Compendio de Filosofía del Derecho. I. Definiciones y fines del Derecho. II. Los medios del Derecho*.
11. MIGUEL SANCHO IZQUIERDO-JAVIER HERVADA: *Compendio de Derecho Natural*, 2 vols.
12. JAVIER HERVADA: *Introducción crítica al Derecho Natural* (2.<sup>a</sup> ed.).
13. RAFAEL GÓMEZ PÉREZ, *Deontología Jurídica*.

### *Jurisprudencia y Textos Legales*

1. JOSÉ ANTONIO CORRIENTE: *Textos de Derecho Internacional Público*, I.
2. ENRIQUE PECOURT: *Derecho Internacional Privado español*, Jurisprudencia sistematizada y comentada.
3. ALFREDO GALLEGO ANABITARTE: *Leyes constitucionales y administrativas de España*.
4. JAVIER HERVADA y JOSÉ M. ZUMAQUERO: *Textos internacionales de derechos humanos*.
5. JAVIER HERVADA y JOSÉ M. ZUMAQUERO: *Textos constitucionales españoles (1808-1978)*.

### *Colección jurídica*

1. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ: *El recurso de agravios*.
2. JOSÉ JAVIER LÓPEZ JACOISTE: *El arrendamiento como aportación del socio* (2.<sup>a</sup> ed.).
3. RAFAEL AIZPÚN TUERO: *La representación sucesoria en el Derecho civil de Navarra*.
4. TOMÁS MUÑOZ ROJAS: *El allanamiento a la pretensión del demandante* (agotado).
5. RODRIGO FABIO SUÁREZ MONTES: *El consentimiento en las lesiones*.



6. TOMÁS MUÑOZ ROJAS: *El imputado en el proceso penal* (agotado).
7. VARIOS: *Curso de Derecho Privado Foral Navarro*.
8. VARIOS: *Curso de Derecho Público Foral Navarro*.
9. RAMÓN GARCÍA DE HARO: *El salario como crédito privilegiado* (agotado).
10. AMADOR GARCÍA-BAÑÓN: *El beneficio de separación*.
11. CARMELO DE DIEGO-LORA: *La posesión y los procesos posesorios* (2 tomos).
12. JOSÉ LUIS MURGA GENER: *El arrendamiento rústico en la transmisión «mortis causa»*.
13. JOSÉ ZAFRA: *Sentencia constitutiva y sentencia dispositiva*.
14. EZEQUIEL CABAILEIRO: *Los tratados internacionales*.
15. RAFAEL ECHEVERRÍA: *La V República francesa*.
16. FRANCISCO GÓMEZ ANTÓN: *El Consejo Foral Administrativo de Navarra*.
17. JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO: *La jurisprudencia del Tribunal Internacional de La Haya*.
18. ENRIQUE LALAGUNA: *Estudios de Derecho matrimonial*.
19. HANS NAWIASKY (traducción de José Zafra): *Teoría general del Derecho* (agotado).
20. RAMÓN GARCÍA DE HARO: *La posición jurídica del trabajador subordinado*.
21. TOMÁS MUÑOZ ROJAS: *La caducidad de la instancia judicial* (agotado).
22. RODRIGO FABIO SUÁREZ MONTES: *Consideraciones críticas en torno a la doctrina de la antijuridicidad en el finalismo*.
23. JOSÉ M.<sup>a</sup> MARTÍNEZ DORAL: *La estructura del conocimiento jurídico*.
24. JOSÉ GONZÁLEZ PALOMINO: *Estudios jurídicos de Arte Menor* (2 tomos).
25. RAFAEL M.<sup>a</sup> DE BALBÍN: *La concreción del poder político*.
26. JOSÉ ZAFRA: *El derecho como fuerza social* (agotado).
27. RAMÓN GARCÍA DE HARO: *Régimen jurídico de la formación profesional en derecho español*. Con un anexo de legislación vigente, recopilado por Javier Fernández Micheltorona.
28. ANGEL DíEZ RONCAL: *Garantías reales sobre maquinaria industrial* (agotado).
29. EDUARDO GUTIÉRREZ DE CABIEDES: *La enajenación forzosa*.
30. JOSÉ ANTONIO DORAL: *La fase de seguridad en la hipoteca*.
31. GONZALO DÍEGUEZ: *Deducción y solución de los conflictos laborales de intereses*.
32. JOSÉ RODRÍGUEZ ITURBE: *El concepto de derecho en la doctrina española actual*.
33. JOSÉ ANTONIO DORAL: *La noción de orden público en el Derecho civil español*.
34. ENRIQUE LALAGUNA: *La enfiteusis en el Derecho civil de Baleares*.
35. KARL ENGISCH (traducción de Juan José Gil Cremades): *La idea de concreción en el derecho* (agotado).
36. GONZALO DÍEGUEZ: *Responsabilidad directa de las prestaciones de Seguridad Social*.



37. VARIOS: *Estudios de Derecho civil en honor del profesor Castán To-beñas* (6 tomos).
38. JOSÉ LUIS MURGA: *Donaciones y testamentos «in bonum animae» en el Derecho Romano tardío*.
39. ALEJANDRINO FERNÁNDEZ BARREIRO: *La previa información del adversario en el proceso privado romano*.
40. GONZALO DIÉGUEZ: *La fidelidad del trabajador en LCT*.
41. HARRY SAMUELS (traducción de Gonzalo Diéguez): *El Derecho de los Sindicatos*.
42. ALFREDO GARCÍA-BERNARDO: *Sistema jurídico de las Viviendas de Protección Oficial* (2 tomos).
43. PLUTARCO MARSÁ: *La mujer en el Derecho Político*.
44. PLUTARCO MARSÁ: *La mujer en el Derecho civil*.
45. ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS: *La sociedad irregular mercantil en el proceso*.
46. RAFAEL GÓMEZ PÉREZ: *La ley eterna en la historia*.
47. ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS: *La conexión en el proceso penal* (agotado).
48. FRIEDRICH STEIN (traducción de Andrés de la Oliva Santos): *El conocimiento privado del juez* (agotado).
49. EMILIO VALIÑO: *Acciones pretorias complementarias de la acción civil de la ley Aquilia*.
50. JOSÉ ANTONIO CORRIENTE: *Valoración jurídica de los preámbulos de los Tratados Internacionales*.
51. EMILIO VALIÑO: *«Acciones útiles»*.
52. SERGIO COTTA (traducción de Jesús Ballesteros): *Itinerarios humanos del Derecho* (2.ª ed.).
53. EDUARDO GUTIÉRREZ DE CABIEDES: *Estudios de Derecho Procesal*.
54. VARIOS: *El sistema de medidas cautelares*. (IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades españolas).
55. JESÚS M.ª LOBATO: *La cláusula penal en el Derecho español*.
56. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MONTES: *La calificación civil de la quiebra en el proceso penal*.
57. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI: *Derecho patrimonial de los religiosos: cuestiones civiles*.
58. ALEJANDRO GUZMÁN: *Caución tutelar en Derecho Romano*.
59. JOSÉ ZAFRA: *Poder y poderes*.
60. JOSÉ ÁNGEL TORRES: *La configuración jurídica del volumen de edificabilidad*.
61. VARIOS: *La fe pública mercantil*. Primer Seminario.
62. MODESTO SANTOS CAMACHO: *Ética y Filosofía analítica. Estudio histórico-crítico*.
63. JOSÉ ZAFRA: *Alma y cuerpo del Movimiento Nacional*.
64. MIGUEL MORENO MOCHOLI: *El precario*.
65. ALEJANDRO GUZMÁN: *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*.
66. GONZALO DIÉGUEZ: *Orden público y conflictos colectivos*.



67. DOMINGO RAMOS-LISSÓN: *La ley según Domingo de Soto*. Estudio teológico-jurídico.
68. FERNANDO DE ARVIZU Y GALARRAGA: *La disposición «mortis causa» en el Derecho español de la Alta Edad Media*.
69. FRANCESCO OLGIATI: *El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino*.
70. ANGEL CRISTÓBAL-MONTES: *La administración delegada de la sociedad anónima*.
71. JOSÉ ORTEGO: *Prevención de las infracciones de menores*.
72. FRANCISCO DE ASÍS SANCHEZ REBULLIDA: *Estudios de Derecho Civil* (2 tomos).
73. FAUSTINO CORDÓN MORENO: *La legitimación en el proceso contencioso-administrativo*.
74. ALVARO D'ORS: *Ensayos de teoría política*.
75. JESÚS GARCÍA LÓPEZ: *Los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino*.
76. EMMA MONTANOS: *La familia en la Alta Edad Media española*.
77. GONZALO ROJAS SÁNCHEZ: *Los derechos políticos de asociación y reunión en la España Contemporánea (1811-1936)*.
78. TERESA GIMÉNEZ-CANDELA: *El régimen pretorio subsidiario de la acción noxal*.
79. VARIOS: *El derecho de visita. Teoría y praxis* (2.<sup>a</sup> ed.).
80. JUAN ANDRÉS MUÑOZ: *La educación política como función de gobierno en el Estado*.

#### *Publicaciones periódicas*

- ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL.
- PERSONA Y DERECHO. *Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos*.